



ANALES DEL CONCEJO

DE BOGOTÁ, D.C.

PROYECTOS DE ACUERDO

AÑO II N°. 3883 DIRECTORA: LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO ENE. 22 DEL AÑO 2025

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

PROYECTO DE ACUERDO NO 153 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN ESTATUS ESPECIAL AL CAMPESINADO COMO PROTECTORES (AS) DEL AGUA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	25054
PROYECTO DE ACUERDO NO 154 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE INCENTIVA EL USO DE LA BICICLETA EN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO”.....	25059
PROYECTO DE ACUERDO NO 155 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS Y SE CREA EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS COMUNITARIOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	25070
PROYECTO DE ACUERDO NO 156 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DISTRITAL Y EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SECTOR MOVILIDAD”.....	25077
PROYECTO DE ACUERDO NO 157 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA CREAR EL CONSEJO DISTRITAL Y LOS CONSEJOS LOCALES DE LOS MOTOCICLISTAS Y CONDUCTORES EN BOGOTÁ D.C.”.....	25095
PROYECTO DE ACUERDO NO 158 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE PROTEGE LA VIDA Y SE PREVIENE LA SINIESTRALIDAD DE LOS TRABAJADORES EN VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS”.....	25114
PROYECTO DE ACUERDO NO 159 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS QUE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN QUE REALIZA ACTIVIDADES SEXUALES PAGAS DE ÉLITE EN BOGOTÁ EN LA MODALIDAD DE WEBCAM, PREPAGO, ACOMPAÑANTES, APLICACIONES, ENTRE OTRAS”.....	25143
PROYECTO DE ACUERDO NO 160 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA DE TALENTOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, “BOGOTÁ, LA CAPITAL DEL TALENTO INFANTIL” EN EL DISTRITO CAPITAL”.....	25145
PROYECTO DE ACUERDO NO 161 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA SEGURIDAD EN LAS COPROPIEDADES SUJETAS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL DISTRITO CAPITAL”.....	25153
PROYECTO DE ACUERDO NO 162 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR OBRAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	25167
PROYECTO DE ACUERDO NO 163 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FESTIVAL DE INTERCAMBIO CULTURAL, DEPORTIVO, GASTRONÓMICO Y DE DISTINTOS SECTORES CON LA POBLACIÓN COREANA EN BOGOTÁ”.....	25186

Pág.

<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 164 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA Y TERRITORIOS CAMPESINOS AGROALIMENTARIOS (TCAM) EN LA RURALIDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	25189
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 165 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS SOBRE EL USO Y MANIPULACIÓN DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS, SE PROHÍBE LA DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA SU COMPRA Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS, CON EL FIN DE PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES, DE LOS SERES HUMANOS Y DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL.”	25196
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 166 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y MATERIALIZACIÓN DE LAS ALIANZAS PÚBLICO POPULARES EN EL DISTRITO CAPITAL”.....	25123
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 167 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “REGLAMENTACIÓN DE PROMOCIÓN DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS y VIVIENDA PRODUCTIVA CON ALTERNATIVAS DE REÚSO”.....	25230

PROYECTO DE ACUERDO NO 153 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN ESTATUS ESPECIAL AL CAMPESINADO COMO PROTECTORES (AS) DEL AGUA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

OBJETO DEL PROYECTO

“RECONOCER AL CAMPESINADO COMO SUJETOS CLAVE EN LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AGUA, OTORGÁNDOLES UN ESTATUS ESPECIAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL”

I. SUSTENTO JURÍDICO**DE ORDEN CONSTITUCIONAL**

- **Artículo 64 de la Constitución Política:** Garantiza el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra en condiciones de equidad.
- **Artículo 79:** Derecho a un ambiente sano y participación comunitaria en la protección de los recursos naturales.

- **Acto Legislativo 01 de 2023:** Reconoce al campesinado como sujeto de derechos.

DE ORDEN LEGAL

- **Ley 160 de 1994:** Promueve el uso adecuado del suelo y la gestión sostenible de los recursos naturales.
- **Ley 1931 de 2018:** Fortalece la gestión integral del cambio climático y la protección de fuentes hídricas.
- **Decreto 1076 de 2015:** Reglamenta la gestión ambiental en Colombia.
- **Ley 99 de 1993:** Establece la estructura del Sistema Nacional Ambiental (SINA).

NORMATIVIDAD DISTRITAL

- **Acuerdo 742 de 2019:** Política Pública de Ruralidad de Bogotá.
- **Acuerdo 927 de 2024:** Establece medidas de protección y fortalecimiento de la vida campesina en el marco de las Transformaciones Rurales Integrales. Cita explícitamente los siguientes artículos:
 - **Artículo 48. Transformaciones Rurales Integrales:** Establece la territorialización del Acuerdo de Paz mediante Transformaciones Rurales Integrales y la Hoja de Ruta PDET-BR, con medidas de inclusión social y productiva y protección de la ZRC de Sumapaz.
 - **Artículo 114. Articulación de la vida campesina:** Propende por un programa integral de protección y fortalecimiento de la vida campesina en los ámbitos productivo, social, cultural y territorial, promoviendo un enfoque diferencial.
- **Plan de Ordenamiento Territorial (POT) - Decreto 555 de 2021:** Define las áreas de protección hídrica, zonas de conservación y directrices específicas sobre el manejo de los ecosistemas estratégicos y los corredores ecológicos en el Distrito Capital.

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

Los ecosistemas de páramo y las áreas rurales de Bogotá son esenciales para la provisión de agua potable de la ciudad y de la región circundante. El campesinado desempeña un papel fundamental en la protección de estas fuentes de agua, mediante prácticas agroecológicas, conservación de suelos y actividades sostenibles. Sumapaz, al ser el páramo más grande del mundo, representa el 42% del territorio distrital y alberga más de 92.000 hectáreas de áreas protegidas, siendo un espacio clave para la preservación de los recursos hídricos.

El reconocimiento del campesinado como protectores del agua propenderá por el fortalecimiento de los procesos de gobernanza comunitaria y promoverá la justicia

socioambiental al visibilizar su contribución en la mitigación de la crisis hídrica. Datos recientes indican que el 70% de las fuentes hídricas en el área rural se encuentran bajo manejo comunitario, lo que evidencia el compromiso de las comunidades campesinas con la protección de los bienes comunes.

A pesar de su rol fundamental, las comunidades rurales enfrentan desafíos significativos, como la falta de acceso a infraestructura básica y el riesgo de pérdida de territorios por presiones urbanísticas. Este proyecto propende por garantizar su permanencia en el territorio mediante el otorgamiento de un estatus especial que reconozca sus aportes y promueva su fortalecimiento.

Datos Relevantes:

- **Producción hídrica:** Los páramos de Sumapaz, Guerrero y Chingaza abastecen al 80% de Bogotá y la Sabana.
- **Cobertura forestal:** El 65% de las áreas rurales del Distrito corresponden a zonas de protección hídrica.
- **Participación campesina:** Más del 40% de las iniciativas de conservación están lideradas por asociaciones campesinas.

La implementación de este estatus especial propenderá por el diseño de incentivos para la adopción de prácticas de conservación, como pagos por servicios ambientales, apoyo técnico y asistencia financiera.

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta a la Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.
Art. 12. Atribuciones. *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:*

1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

Este marco legal otorga al Concejo de Bogotá la autoridad para crear programas y proyectos que mejoren la gestión de riesgos a nivel comunitario, asegurando una administración pública eficiente y participativa.

IV. IMPACTO FISCAL

El presente proyecto no genera impacto fiscal alguno, ya que las actividades relacionadas

con el reconocimiento del campesinado como protectores del agua serán financiadas mediante recursos ya asignados en los programas existentes de desarrollo ambiental y protección hídrica del Distrito Capital. Además, se promoverá la participación de entidades privadas y comunitarias para cofinanciar los proyectos, así como la colaboración interinstitucional con el Gobierno Nacional y organismos internacionales para la gestión y apoyo en la implementación de estas medidas. De esta manera, se asegura la optimización de los recursos sin la necesidad de destinar nuevos fondos fiscales adicionales.

DONKA ATANASSOVA IAKIMOVA

Concejala de Bogotá

Partido Polo Democrático Alternativo Coalición Pacto - Histórico

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 153 DE 2025

PRIMER DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO XXX DE 2025

**“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN ESTATUS ESPECIAL AL CAMPESINADO
COMO PROTECTORES (AS) DEL AGUA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”**

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.

VI. ARTICULADO

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. Reconocer al campesinado de Bogotá como protectores del agua y propender por la adopción de mecanismos que garanticen su participación y fortalecimiento en las políticas de conservación hídrica.

Artículo 2. Estatus Especial. Se otorgará al campesinado un estatus especial que conlleva los siguientes beneficios:

1. Acceso prioritario a programas de pagos por servicios ambientales.
2. Asistencia técnica y capacitación en gestión sostenible de recursos hídricos.
3. Fortalecimiento de los proyectos comunitarios de protección del agua mediante convenios con entidades públicas y privadas.

Artículo 3. Creación de incentivos. La Administración Distrital propenderá por el diseño de un plan de incentivos que incluya recursos financieros, asistencia técnica y acceso a proyectos de reforestación.

Artículo 4. Participación comunitaria. La participación de las comunidades campesinas se promoverá mediante mesas de trabajo permanentes en las localidades rurales.

Artículo 5. Monitoreo y evaluación. La Secretaría de Ambiente presentará un informe semestral sobre los avances de las medidas adoptadas en el marco de este acuerdo.

Artículo 6. Vigencia. Este acuerdo regirá a partir de la fecha de su publicación.

PROYECTO DE ACUERDO NO 154 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE INCENTIVA EL USO DE LA BICICLETA EN LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO "****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

Fomentar y fortalecer el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible entre los funcionarios de las entidades distritales, mediante la implementación de un sistema integral de incentivos, que incluye la concesión de tiempo libre remunerado y la promoción de infraestructura adecuada para su utilización.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

- Artículo 2 – Constitución Política de Colombia: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
- Artículo 334 – Constitución Política de Colombia: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.
- Sentencia T-154 de 2013 – Corte Constitucional

En cuanto al derecho al medio ambiente, promovido mediante el uso de medios alternativos como la bicicleta, la Corte Constitucional destacó su importancia en la Sentencia T-154 de 2013. En este fallo, se subraya la relevancia de las políticas dirigidas a la protección ambiental, considerándolo un tema de interés general vinculado directamente al derecho a la vida. Frente a la salvaguarda de este derecho y de la integridad personal, la Corte ha establecido que la autoridad de tránsito goza de una amplia facultad de intervención.

Del orden Nacional:

- Ley 336 de 1996 – Por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Transporte.

Artículo 3°. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

- Ley 1503 de 2011 – “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones”.

Promueve hábitos seguros en la vía y aborda mejoras en procedimientos y elementos para la seguridad vial de los usuarios de bicicletas.

- Ley 1811 de 2016 “Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito”

Artículo 1° (...) “La presente ley tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio nacional; incrementar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana”

Del orden Distrital:

- Acuerdo 663 de 2017 “Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad sostenible en el Distrito Capital”

Artículo 1°. (...) La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, promoverá una estrategia institucional que fomente e incentive el uso de diferentes medios alternativos y sostenibles de transporte, con el fin de generar la racionalización del uso del vehículo particular, promover la protección al medio ambiente y contribuir a una movilidad socialmente responsable con la ciudad.

- Decreto Distrital 672 de 2018 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan otras disposiciones”

Artículo 17°. Subdirección de la Bicicleta y el Peatón. Son funciones de la Subdirección de la Bicicleta y el Peatón: (...) 3. Elaborar las políticas, planes, programas, proyectos, conceptos y lineamientos de transporte no motorizado, en Bogotá D.C., 4. Liderar la coordinación interinstitucional para el desarrollo de políticas públicas, planes, programas, proyectos, lineamientos y estrategias en materia de transporte no motorizado en Bogotá D.C., (...) y 9. Definir e implementar programas, planes, proyectos, protocolos, acciones e instrumentos para la promoción del uso de la bicicleta y la caminata como modos de transporte. (...).

- Decreto 813 de 2017 “Por el cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial y de Motociclista 2017-2026”

El Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026 de Bogotá busca reducir la accidentalidad vial enfocándose en la protección de usuarios vulnerables como los ciclistas. Para esto, planea implementar capacitaciones en seguridad vial para ciclistas, identificar y mejorar caminos seguros para bicicletas, y realizar auditorías de seguridad vial en proyectos de infraestructura.

- Acuerdo 804 del 2021 “Por medio del cual se declara la bicicleta como medio de transporte prioritario en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones para fortalecer su uso”

Declara la bicicleta como modo (sic) de transporte prioritario en Bogotá para la superación de la crisis producto del COVID-19 y el desarrollo de una ciudad sostenible en el largo plazo, y plantea los siguientes objetivos:

1. Promover y facilitar el distanciamiento físico, como medida para enfrentar el COVID- 19.
2. Prevenir la congestión del sistema de transporte público masivo.
3. Facilitar la movilización segura de los ciudadanos en escenarios de post cuarentena, o de reactivación económica sectorial.
4. Contribuir a la mejora de la calidad del aire de la ciudad.
5. Fomentar la actividad física.

Así mismo en el artículo 1 se estipula que, “Para dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría Distrital de Movilidad realizará de manera prioritaria y urgente los ejercicios de redistribución del espacio vial y otras acciones que considere necesarias, con el objetivo de proveer el ciclo de infraestructura que permita una circulación bajo condiciones de seguridad.”.

•Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital (CONPES D.C.) 015 de 2021 “Política Pública de la Bicicleta 2021-2039”

Su objetivo general “Mejorar las condiciones físicas, socioeconómicas y culturales de la ciudad para el uso y disfrute de la bicicleta” Se pretende fomentar su desarrollo mediante la consecución de cinco objetivos específicos que incluyen:

1. “Más seguridad personal” con el que se busca optimizar las condiciones de seguridad personal para la ciudadanía que usa la bicicleta en Bogotá.
2. “Mayor seguridad vial” pretende proteger a los ciclistas de la ciudad frente a siniestros viales asociados al uso de la bicicleta.
3. “Más y mejores viajes en bicicleta” desarrolla acciones en pro de mejorar la experiencia de viaje de los ciclistas en Bogotá.
4. “Más bici para todas y todos” con el que se quiere fortalecer la cultura en torno a la bicicleta.

La promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte no solo busca aliviar la congestión vehicular, sino que también genera beneficios ambientales, sociales y económicos que impactan positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Este proyecto encuentra su fundamentación en diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, lo que amplía su impacto y aborda aspectos adicionales.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La creciente adopción de la bicicleta como medio de transporte en Bogotá no solo evidencia una transformación significativa en los hábitos de movilidad de la ciudad, sino que también destaca la importancia de incrementar los incentivos y promover aún más el uso de este medio sostenible. Este aumento sustancial, evidenciado en los resultados de la Encuesta de Movilidad 2019, no solo se traduce en números impresionantes, como los 880.000 viajes diarios en bicicleta, sino que también refleja un cambio cultural hacia una movilidad más consciente y saludable. Esta cifra muestra un importante aumento del 37,85% en comparación con 2015, cuando se registraban 639.643 viajes diarios en bicicleta según la misma encuesta. Es decir que en solo 4 años el uso de la bicicleta prácticamente se ha duplicado.

En un contexto donde la bicicleta se posiciona como el medio de transporte más utilizado para trayectos menores a 5 km y representa el 65% de los desplazamientos en la ciudad, según un estudio de la Universidad Libre¹, es imperativo

¹ Universidad Libre. (2018). Caracterización de biciusuarios en Bogotá. Bogotá: Universidad Libre.

reconocer la necesidad de fortalecer los incentivos para consolidar este cambio positivo. Además, la bicicleta no solo contribuye al bienestar físico individual, sino que también juega un papel crucial en la mitigación del cambio climático al reducir las emisiones de CO₂ y generar un significativo ahorro económico anual.

Por otra parte, se estima que alrededor de 240.000 personas usan la bicicleta a diario en Bogotá para ir a trabajar o estudiar, de acuerdo con la Encuesta Multipropósito 2017. Esta tendencia ascendente se ve reflejada en la continua expansión de la infraestructura para bicicletas impulsada por la ciudad. Bogotá cuenta actualmente con más de 540 km de ciclorutas, la red más extensa de Latinoamérica.^{2 3}

En términos económicos, se estima que las actividades directamente relacionadas con la bicicleta generan cerca de 32.000 empleos en Bogotá, una cifra equivalente a la del sector turismo en la ciudad.⁴ Por otra parte, el uso de la bicicleta en reemplazo de vehículos motorizados representa un ahorro anual de 1,27 billones de pesos en emisiones de CO₂. A nivel individual, se calcula que los usuarios de bicicleta ahorran un promedio de 41.087 pesos mensuales en tiempo de transporte en comparación con otros medios.

A pesar de los beneficios ya evidentes, es crucial destacar que el acceso equitativo a la infraestructura ciclable y los incentivos asociados no es uniforme en todas las áreas de la ciudad, especialmente en las localidades de estratos bajos (1 y 2). La concentración de esfuerzos y recursos en estas zonas vulnerables es esencial para garantizar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades de acceder a los beneficios de la movilidad en bicicleta y que se promueva una transformación inclusiva y sostenible en toda Bogotá.⁵

Finalmente, el incremento sostenido en el uso de la bicicleta en Bogotá es un testimonio elocuente de la aceptación y adopción generalizada de un modo de transporte más saludable y respetuoso con el medio ambiente. La significativa participación de la comunidad en la movilidad en bicicleta no solo demuestra un cambio cultural positivo, sino que también resalta la necesidad apremiante de reforzar y expandir los incentivos asociados. La bicicleta no solo representa una alternativa eficiente para trayectos cortos, sino que también contribuye de manera tangible a la salud pública, la reducción de emisiones de CO₂ y el ahorro económico a nivel individual y colectivo. Sin embargo, la disparidad en la infraestructura disponible, particularmente en áreas de bajos recursos, subraya la urgencia de dirigir inversiones específicas para garantizar una movilidad en bicicleta equitativa y accesible para todos los ciudadanos.

Contexto internacional

En el ámbito internacional, la promoción de la bicicleta como medio de transporte sostenible se ha consolidado como una estrategia integral para abordar desafíos relacionados con la movilidad, la salud, el medio ambiente y el desarrollo urbano. Diversos países, entre ellos Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Alemania, han implementado iniciativas y políticas que ofrecen incentivos económicos y fiscales, reflejando un compromiso global con los principios de desarrollo sostenible y la mitigación de impactos adversos.

Esta orientación internacional no solo busca aliviar la congestión vehicular, sino también mejorar la salud y el bienestar ciudadano, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crear entornos urbanos más sostenibles. Experiencias

² BID. (2015). Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe: Guía para impulsar el uso de la bicicleta. BID.

³ Alcaldía de Bogotá. (2019). Infraestructura para bicicletas en Bogotá. Recuperado de <https://bogota.gov.co/>

⁴ SDE-DEDE. (2019). Caracterización de la economía de la bicicleta en Bogotá. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

⁵ Encuesta Multipropósito. (2017). Movilidad en bicicleta en Bogotá. Secretaría Distrital de Planeación.

exitosas en naciones europeas, como Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Alemania, evidencian un interés común en transformar la movilidad urbana mediante estímulos económicos para el uso de la bicicleta.

En España, la Estrategia Estatal de la Bicicleta y las iniciativas privadas, como las de la empresa Ingeteam, reflejan el creciente interés por fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte. La visión de la bicicleta como una alternativa sostenible se extiende por toda Europa, donde países como Francia y Países Bajos han implementado innovadoras iniciativas para recompensar económicamente a quienes eligen la bicicleta en lugar de vehículos motorizados, promoviendo entornos más amigables y reduciendo la presencia de automóviles en las ciudades.

Estos programas no solo destacan el aspecto ecológico, sino también los beneficios para la salud individual y colectiva. En países líderes en el uso de la bicicleta, como Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Alemania, la inversión en infraestructura ciclista, incentivos fiscales y programas de subsidios ha contribuido al éxito de esta modalidad de transporte.

Los Países Bajos, reconocidos mundialmente como el paraíso de las bicicletas, han establecido un modelo con una infraestructura ciclista bien desarrollada y segura, incluyendo carriles exclusivos, semáforos específicos y amplios estacionamientos. En Dinamarca, donde aproximadamente el 27% de los viajes se realizan en bicicleta, la inversión en carriles y rutas ciclistas bien señalizadas ha sido fundamental. Suecia, con alrededor del 17% de sus desplazamientos en bicicleta, ha implementado políticas y programas, como incentivos fiscales y subsidios, para fomentar su uso. Alemania, donde cerca del 12% de los viajes son en bicicleta, destaca por su extensa red de carriles y estacionamientos.

A nivel global, la bicicleta no solo responde a problemas de movilidad; además, se posiciona como una herramienta clave para enfrentar el cambio climático y mejorar la calidad de vida. Estas iniciativas son ejemplos inspiradores que demuestran cómo la bicicleta se está convirtiendo en un pilar fundamental para construir ciudades más sostenibles y saludables en todo el mundo.

Acerca de la derogatoria del acuerdo xxxx de 2016

IV. CONTRIBUCIÓN A LOS ODS⁶:

- ODS 3 - Salud y Bienestar:

La promoción del uso diario de la bicicleta no solo reduce la congestión vehicular, sino que también fomenta la actividad física, mejorando la condición física y cardiovascular de los ciudadanos y contribuyendo a la prevención de enfermedades relacionadas con la inactividad. El proyecto, al incentivar el uso de la bicicleta entre los funcionarios del distrito, impactará directamente en su bienestar y calidad de vida, promoviendo hábitos saludables y previniendo enfermedades cardiovasculares, respiratorias y musculoesqueléticas.

Esta iniciativa se alinea con las metas específicas del ODS 3, que incluyen:

- Meta 3.4: Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, así como promover la salud mental y el bienestar. El fomento del uso de la bicicleta contribuye a la promoción de la salud cardiovascular y física, apoyando la meta de reducir las enfermedades no transmisibles.
- Meta 3.9: Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. El uso de la bicicleta

⁶ Naciones Unidas. *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Recuperado de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

como alternativa al transporte motorizado contribuye a la reducción de la contaminación del aire, mejorando la calidad ambiental y la salud general de la población.

- ODS 11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles:

La bicicleta, como medio de transporte no motorizado, no emite CO₂ ni otros contaminantes atmosféricos, mejorando significativamente la calidad del aire. Además, la promoción de su uso impulsa el desarrollo de infraestructuras amigables para ciclistas, haciendo las ciudades más sostenibles y accesibles. La adopción masiva de la bicicleta propuesta por este proyecto reducirá la huella de carbono, la contaminación atmosférica y auditiva generada por el parque automotor, mejorando la eficiencia del sistema de movilidad y disminuyendo los tiempos de viaje.

Esta iniciativa se alinea con las metas específicas del ODS 11, que incluyen:

- Meta 11.2: De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público. La promoción del uso de la bicicleta contribuye directamente a ofrecer un sistema de transporte sostenible y seguro, cumpliendo con esta meta.
- Meta 11.6: De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluyendo la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales. El fomento del ciclismo como medio de transporte ayuda a reducir la huella ambiental de las ciudades, especialmente en términos de calidad del aire y gestión de desechos.
- Meta 11.7: De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. La promoción del uso de la bicicleta contribuye a la creación de entornos urbanos más accesibles y seguros, fomentando el acceso a zonas verdes y espacios públicos.
- Meta 11.a: Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. La promoción del ciclismo contribuye a la creación de ciudades más integradas y sostenibles, fortaleciendo los lazos entre áreas urbanas y rurales.
- Meta 11.c: Proporcionar apoyo a los países menos adelantados para construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. Aunque el proyecto no se centra directamente en la construcción de edificios, la promoción del ciclismo puede contribuir indirectamente al desarrollo sostenible y la resiliencia urbana.

- ODS 13 - Acción por el Clima:

La bicicleta es una alternativa ecológica al transporte motorizado, ya que no utiliza combustibles fósiles, contribuyendo así a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la mitigación del cambio climático. El proyecto tiene un papel crucial en la acción por el clima al promover la bicicleta como una alternativa sostenible.

Esta iniciativa se alinea con las metas específicas del ODS 13, que incluyen:

- Meta 13.1: Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. La promoción del uso de la bicicleta contribuye a la resiliencia climática al reducir la dependencia de los combustibles fósiles, mitigando así los riesgos asociados al cambio climático.

- Meta 13.2: Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. El proyecto propuesto, al fomentar la movilidad sostenible, aborda directamente las medidas para mitigar el cambio climático en el ámbito local.
- Meta 13.3: Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. La promoción del uso de la bicicleta no solo tiene beneficios ambientales, sino que también contribuye a sensibilizar y educar a la población sobre alternativas sostenibles en la movilidad urbana.

V. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” contempla dentro de sus propósitos centrales la promoción de una movilidad sostenible para la ciudad.

Específicamente, el Propósito 4 plantea “Hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible”. Para ello, una de las estrategias es el mejoramiento integral de la red de ciclorutas de la ciudad, con el fin de aumentar el número de personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte.

En este contexto, el Artículo 106 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 “*Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020- 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”* adopta la política pública de la bicicleta, buscando mejorar las condiciones para su uso y disfrute. Dentro de sus énfasis se encuentra el fortalecimiento de la cultura en torno a este medio, la seguridad vial para ciclistas, y la articulación interinstitucional para su gestión.

Asimismo, el Artículo 107 contempla la implementación del Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá, como parte del Programa Estratégico de Movilidad Sostenible.

Estos elementos demuestran la importancia conferida por el Plan de Desarrollo Distrital al fomento del uso de la bicicleta, en línea con el presente proyecto de acuerdo que busca incentivar este medio de transporte sostenible entre los funcionarios de las entidades distritales.

VI. RELACIÓN CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente “Bogotá Reverdece 2022 – 2035”, compilado en el Decreto 555 de 2021

El presente proyecto de acuerdo se alinea con la visión integral del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito Capital. En respuesta a la Política de Movilidad Sostenible y Descarbonizada, la iniciativa busca priorizar modos de transporte activos y de bajas emisiones, reflejando un compromiso con la transformación del modelo de movilidad urbana y la creación de un entorno más amigable con el medio ambiente.

El artículo 3 está orientado hacia una movilidad sostenible y segura, enfocándose en corredores verdes y la construcción de infraestructuras clave como líneas de metro y cables aéreos.

Artículo 3. Políticas de largo plazo del ordenamiento territorial del Distrito Capital: (...)2. Política de Movilidad Sostenible y Descarbonizada. Se orienta a privilegiar los desplazamientos en modos de transporte activos, de cero y bajas emisiones. El eje estructurador de la movilidad es el peatón y el desarrollo de un sistema de corredores verdes de alta y media capacidad, que cambien el modelo la movilidad urbana, descarbonicen el sistema de transporte público, conecten la ciudad con la región, soporten una ciudad de proximidad, cuidadora

e incluyente, mejoren las condiciones de accesibilidad de las zonas de origen informal e incorpore el desarrollo orientado al transporte y la revitalización alrededor de las infraestructuras de movilidad. Esta Política se soporta en la construcción de cinco líneas de metro, dos regiotram y siete cables aéreos, que junto con la consolidación de corredores verdes y una red de infraestructura peatonal y de cicloinfraestructura buscan establecer una movilidad sostenible y segura en el marco de la descarbonización de los viajes en el Distrito capital.” (Subrayado fuera de texto)

El artículo 103 concreta principios rectores en el componente urbano, enfatizando el impulso del uso de la bicicleta mediante la implementación de la Ciclo-Alameda del Medio Milenio y la expansión de cicloalamedas.

“Artículo 103. Principios rectores del ordenamiento en el componente urbano. Los principios rectores del ordenamiento territorial de Bogotá, definidos en el componente general, se concretan en estrategias, proyectos y medidas normativas que, en el suelo urbano, apuntan a los siguientes objetivos: (...) 4. Impulsar, aún más, el uso de la bicicleta, generando mejores condiciones (facilidad de uso, continuidad, seguridad vial y seguridad en general) para su adopción, como medio de transporte, por mujeres, personas mayores, niños y niñas, a través de:

- a. La implementación de la Ciclo-Alameda del Medio Milenio y la consolidación de una red de cicloalamedas con la cualificación de la existente Ciclo-Alameda del Porvenir, como ejes articuladores del transporte en bicicleta y otros modos de micromovilidad.*
- b. Más cicloparqueaderos de uso público y privado y fácilmente accesibles.*
- c. Cicloinfraestructura adicional a implementar en la ciudad.”.*

VII. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1º del artículo 12:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

- 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.”*

De igual forma, el numeral 4 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 confiere al alcalde Mayor la atribución de “Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos”. De esta manera, el presente Proyecto de Acuerdo establece un marco general, dejando a cargo del gobierno distrital, en el ejercicio de su capacidad reglamentaria, desarrollar y poner en práctica lo dispuesto en esta iniciativa normativa.

VIII. IMPACTO FISCAL

El artículo 7 de la Ley 819 de 2003, establece lo siguiente:

“Artículo 7. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. (...)”

Y el Acuerdo 741 de 2019 (Reglamento Interno del Concejo de Bogotá), en su Capítulo IX, Artículo 67, indica que los proyectos de acuerdo deben contener requisitos mínimos, en los que se incluye en el literal d. Análisis del impacto fiscal del proyecto.

El presente proyecto se encuentra en línea con el programa "Al trabajo en bici" del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, mediante el cual el Distrito promueve e incentiva el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible entre los funcionarios públicos. Si bien la iniciativa busca fomentar esta práctica entre los funcionarios distritales, no implica la ejecución de nuevos gastos o reducción de ingresos que afecten el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Los lineamientos y estrategias planteadas se enmarcan en la política pública distrital de movilidad sostenible y uso de la bicicleta, por lo que su implementación se realizará con los recursos humanos y presupuestales actuales de las entidades competentes. En consecuencia, el proyecto no requiere concepto previo de la Secretaría Distrital de Hacienda al no representar impacto fiscal adicional.

IX. REFERENCIAS

Alcaldía de Bogotá. (2019). Infraestructura para bicicletas en Bogotá. Recuperado de <https://bogota.gov.co/>

BID. (2015). Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe: Guía para impulsar el uso de la bicicleta. BID.

Encuesta de Movilidad. (2019). Resultados preliminares Encuesta de Movilidad 2019. Bogotá: Secretaría Distrital de Movilidad.

Encuesta Multipropósito. (2017). Movilidad en bicicleta en Bogotá. Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación.

Naciones Unidas. (s.f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

SDE-DEDE. (2019). Caracterización de la economía de la bicicleta en Bogotá. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Universidad Libre. (2018). Caracterización de biciusuarios en Bogotá. Bogotá: Universidad Libre.

Atentamente,
JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
H. Concejal de Bogotá D.C.
Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 154 DE 2025

PRIMER DEBATE

**“POR MEDIO DEL CUAL SE INCENTIVA EL USO DE LA BICICLETA EN LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO”**

EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1°. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto fortalecer e incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible entre los funcionarios públicos que laboran en las entidades distritales, promoviendo así un entorno laboral más saludable y respetuoso con el medio ambiente.

Artículo 2°. Beneficios e incentivos. Con el propósito de fomentar el uso de la bicicleta, las entidades distritales otorgarán a los funcionarios públicos que se desplacen en bicicleta a su lugar de trabajo, el beneficio de un permiso remunerado de un (1) día laboral por cada treinta (30) días laborables efectivos trabajados.

Adicionalmente, se establecerán convenios con establecimientos autorizados para ofrecer descuentos en la adquisición de bicicletas y accesorios, facilitando así la movilidad en bicicleta.

Parágrafo Primero. Las condiciones y procedimientos para acceder a estos beneficios serán reglamentados por cada entidad, garantizando equidad y transparencia en su aplicación.

Parágrafo Segundo. En cualquier circunstancia, el beneficio del permiso remunerado no podrá exceder los límites establecidos en la Ley 1811 de 2016.

Artículo 3°. Infraestructura e instalaciones. Las entidades públicas deberán adecuar sus espacios, asegurando condiciones de comodidad y seguridad para los funcionarios que utilicen la bicicleta como medio de transporte. Se priorizará la creación de áreas de estacionamiento seguro para bicicletas y vestuarios, incentivando así el uso de este medio de movilidad.

Artículo 4°. Capacitación y comunicación. La Secretaría Distrital de Movilidad y las entidades distritales implementarán programas de capacitación y comunicación dirigidos a los funcionarios públicos. Estos programas abordarán los beneficios del uso de la bicicleta, proporcionarán información sobre incentivos, ofrecerán recomendaciones técnicas y presentarán la normatividad existente para promover y facilitar la movilidad en bicicleta.

Artículo 5°. Participación en actividades. Las entidades distritales fomentarán la participación de sus funcionarios en eventos y campañas comunitarias que promuevan el uso de la bicicleta y la movilidad sostenible.

Facilitarán la asistencia de los servidores públicos a estas actividades, brindarán apoyo logístico a los organizadores según sus capacidades, y reconocerán la participación destacada de funcionarios que contribuyan a generar conciencia ciudadana sobre los beneficios de la bicicleta.

Las entidades coordinarán su respaldo a dichas iniciativas, garantizando su integración constructiva a la gestión institucional y fortaleciendo así la cultura ciclista en la ciudad.

Artículo 6°. Seguimiento. La Secretaría Distrital de Movilidad realizará seguimiento semestral al cumplimiento de este Acuerdo. Se presentará un informe semestral detallado al Concejo de Bogotá sobre los avances y resultados obtenidos, con el objetivo de evaluar la efectividad de las medidas implementadas.

Artículo 7º. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y Cúmplase

PROYECTO DE ACUERDO NO 155 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS Y SE CREA EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS COMUNITARIOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

OBJETO DEL PROYECTO

“ESTABLECER LINEAMIENTOS Y CREAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS COMUNITARIOS EN EL DISTRITO CAPITAL”

I. SUSTENTO JURÍDICO
DE ORDEN CONSTITUCIONAL

Constitución Política:

“(…)

ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (negrilla y subrayado fuera de texto).

ARTÍCULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

(…)”.

“(…)”.

ARTÍCULO 93. *Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.*

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

(...).

“(...)

ARTÍCULO 209. *La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.* (negrilla y subrayado fuera de texto).

(...).

DE ORDEN LEGAL

- **Ley 99 de 1993.** *“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.*
- **Ley 388 de 1997.** Ordenamiento territorial y gestión de riesgos.
- **Ley 1523 de 2012.** Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
- **Ley 1575 de 2012.** *“Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia”.*
- **Ley 1931 de 2018.** *“Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático”.*
- **Decreto 2157 de 2017.** *“Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012”.*
- **Decreto 1372 de 2024.** *“Por el cual se declara una Situación de Desastre Nacional”.*

NORMATIVIDAD DISTRITAL

- **Acuerdo 546 de 2013.** *“Por el cual se transforma el Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias -SDPAE-, en el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático-SDGR-CC, se actualizan sus instancias, se crea el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático “FONDIGER” y se dictan otras disposiciones”.*
- **Decreto 174 de 2014:** *“Por medio del cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá, D.C., - FONDIGER”.*
- **Política Pública Distrital de Acción Climática:** Promueve soluciones basadas en naturaleza (SbN).
- **Acuerdo 732 de 2018:** *“Por medio del cual se adoptan medidas para la promoción y masificación de la movilidad eléctrica y demás tecnologías cero emisiones directas de material particulado en Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones”.*

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

El objetivo de este proyecto es crear un programa integral de gestión comunitaria del riesgo en el Distrito Capital. Este programa permitirá a las comunidades urbanas y rurales identificar, evaluar y gestionar los riesgos, fortaleciendo la resiliencia comunitaria y promoviendo una cultura de prevención frente a desastres y emergencias.

Para ello, se propone la creación de comisiones comunitarias de gestión del riesgo en barrios y veredas, conformadas por líderes comunitarios y representantes de entidades distritales para coordinar esfuerzos y garantizar acciones efectivas.

Diagnóstico de Riesgos y Cifras Relevantes

Incendios forestales: 97 hectáreas afectadas recientemente en los cerros orientales.

Déficit de bomberos: En 2024, Bogotá contó con solo 640 bomberos frente a un estándar internacional mucho mayor.

Estaciones de atención: Solo 8 de las 17 estaciones de bomberos están equipadas para emergencias forestales.

Eventos reportados: Más de 6.222 incendios forestales en 2024 en todo el país.

Desplazamientos y emergencias sociales: Incremento de situaciones de emergencia en localidades como Ciudad Bolívar y Usme, evidenciando vulnerabilidades socioeconómicas.

Este panorama evidencia la urgencia de un modelo más integral que contemple riesgos ambientales, socioeconómicos y de infraestructura.

Fundamentación Técnica

El Decreto 1372 de 2024, expedido por el Gobierno Nacional, declaró la situación de desastre nacional e incluyó directrices para la implementación de planes de atención y prevención en todas las entidades territoriales. Este marco establece lineamientos para la articulación con los planes locales de gestión de riesgos, reforzando la necesidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y priorizando medidas urgentes de adaptación y recuperación.

En Bogotá, este decreto ha servido de referencia para orientar políticas locales, aunque su aplicación directa aún se encuentra en proceso de adaptación a las dinámicas específicas de la ciudad. Por ejemplo, la asignación de recursos del Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos (FONDIGER) ha considerado las recomendaciones de dicho decreto, especialmente en la destinación de partidas para el refuerzo de infraestructura y la reforestación de áreas vulnerables. Además, el decreto subraya la importancia de fortalecer los sistemas de alerta temprana y fomentar la participación comunitaria en procesos de respuesta y recuperación.

El decreto también establece criterios de priorización de atención en territorios que presenten riesgos múltiples, como deslizamientos, incendios forestales y vulnerabilidades por infraestructura deficiente. Esto coincide con los planes de acción formulados por el IDIGER y la Subcomisión de Control de Emergencias en el Distrito Capital.

Este marco normativo respalda las iniciativas distritales para implementar intervenciones progresivas y reforzar el trabajo intersectorial en gestión de riesgos, integrando los enfoques de restauración ecológica y planificación resiliente.

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta a la Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Art. 12. Atribuciones. *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:*

- 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

Este marco legal otorga al Concejo de Bogotá la autoridad para crear programas y proyectos que mejoren la gestión de riesgos a nivel comunitario, asegurando una administración pública eficiente y participativa.

IV. IMPACTO FISCAL

El presente proyecto no genera impacto fiscal alguno, ya que se prevé que las actividades relacionadas con la gestión comunitaria del riesgo serán financiadas con recursos existentes del Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático (FONDIGER) y otros recursos que se dispongan para tal fin. Además, se buscará optimizar el uso de recursos mediante la participación activa de las comunidades y la colaboración interinstitucional, reduciendo así la necesidad de nuevos fondos adicionales.

DONKA ATANASSOVA IAKIMOVA

Concejala de Bogotá

Partido Polo Democrático Alternativo Coalición Pacto - Histórico

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 155 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS Y SE CREA EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS COMUNITARIOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.

VI. ARTICULADO

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. Establecer los lineamientos y promover la creación del Programa de Gestión Integral de Riesgos Comunitarios en el Distrito Capital con el propósito de fomentar la participación en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos ambientales, socioeconómicos y de infraestructura.

Artículo 2. Definiciones.

1. **Gestión integral de riesgos comunitarios:** Conjunto de acciones orientadas a identificar y reducir riesgos de diversa índole, promoviendo el fortalecimiento comunitario y la capacidad de respuesta.
2. **Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios (SATC):** Herramientas para monitorear y responder a situaciones de riesgo de manera articulada con las entidades competentes.

3. **Soluciones basadas en naturaleza (SbN):** Estrategias de restauración de ecosistemas para mitigar impactos y fortalecer la sostenibilidad del entorno.
4. **Infraestructura resiliente:** Proyectos que buscan mejorar y adaptar los servicios básicos ante emergencias de diversa índole.

Artículo 3. Lineamientos generales. La Administración Distrital propenderá por:

1. La identificación de zonas críticas y la formulación de planes de mitigación y gestión del riesgo.
2. La promoción de procesos de capacitación y formación comunitaria de manera continua.
3. El impulso de proyectos de restauración ambiental e infraestructura resiliente.
4. La articulación interinstitucional para asegurar una respuesta eficiente y coordinada.

Artículo 4. Comisiones de Alerta Temprana Comunitarias (CATC). La Administración Distrital incentivará la conformación de CATC, que podrán estar integradas por:

- Representantes comunitarios.
- Delegados de IDIGER, Secretaría de Salud y Bomberos.
- Organizaciones de base comunitaria.

Artículo 5. Funciones de las CATC.

1. Realizar evaluaciones participativas de riesgos y elaborar mapas de riesgos comunitarios.
2. Proponer y coordinar planes de respuesta comunitarios.
3. Organizar simulacros periódicos y campañas de sensibilización.
4. Coordinar acciones con las entidades distritales para fortalecer las capacidades de respuesta.

Artículo 6. Renaturalización y SbN. La Administración Distrital propenderá por la implementación de proyectos de restauración de humedales, quebradas y reforestación con especies nativas.

Artículo 7. Infraestructura resiliente. La Administración Distrital impulsará proyectos de adecuación y mantenimiento de infraestructura comunitaria clave.

Artículo 8. Formación comunitaria. La Administración Distrital fomentará programas de formación en gestión de riesgos, primeros auxilios y estrategias de intervención, con enfoque diferencial y de género.

Artículo 9. Evaluación y seguimiento. La Administración Distrital deberá presentar informes anuales sobre los avances del programa y proponer mejoras en los lineamientos según los resultados obtenidos.

Artículo 10. Vigencia. Este acuerdo regirá a partir de la fecha de su publicación.

PROYECTO DE ACUERDO NO 156 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DISTRITAL Y EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SECTOR MOVILIDAD”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I OBJETO DEL PROYECTO

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objeto implementar la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana Distrital artículo 11 de la ley 1310 de 2009 *“como mecanismo del más alto nivel, encargada de orientar y fiscalizar las relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito de las Entidades Territoriales y las autoridades administrativas”*. Además del Sistema de Participación Ciudadana artículo 10 *“Con el objeto de fortalecer las relaciones entre el ciudadano y la institución, estableciendo mecanismos efectivos para que se expresen y sean atendidos distintos intereses sectoriales y regionales, atinentes al servicio de los agentes de tránsito”*.

II SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA.

DE ORDEN CONSTITUCIONAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991.

ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales.

(...)

ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;

(...)

ARTÍCULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

(...)

ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

(...)

ARTÍCULO 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

(...)

ARTÍCULO 103. “..... El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”.

(...)

ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.

DE ORDEN LEGAL.

LEY 1310 DE 2009 *“Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.*

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en la presente ley serán aplicables a los organismos de tránsito y transporte y a los agentes de tránsito y transporte del ámbito territorial.

Artículo 2°. Definición. Para la aplicación e interpretación de esta ley, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Organismos de Tránsito y Transporte: Son entidades públicas del orden municipal, distrital o departamental que tienen como función organizar, dirigir y controlar el tránsito y el transporte en su respectiva jurisdicción.

Autoridad de Tránsito y Transporte: Toda entidad pública o empleado público que esté acreditado conforme al artículo 3° de la Ley 769 de 2002.

Agente de Tránsito y Transporte: Todo empleado público investido de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales.

Grupo de Control Vial o Cuerpo de Agentes de Tránsito: Grupo de empleados públicos investidos de autoridad como agentes de tránsito y transporte vinculados legal y reglamentariamente a los organismos de tránsito y transporte.

Artículo 10. Sistema de participación ciudadana. Los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las Entidades Territoriales desarrollarán un sistema de participación ciudadana, con el objeto de fortalecer las relaciones entre el ciudadano y la institución, estableciendo mecanismos efectivos para que se expresen y sean atendidos distintos intereses sectoriales y regionales, atinentes al servicio de los agentes de tránsito.

Artículo 11. Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana. Créase la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana, como mecanismo del más alto nivel, encargada de orientar y fiscalizar las relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito de las Entidades Territoriales y las autoridades administrativas. Esta comisión tiene por objeto atender las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte, y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución.

LEY 1551 DE 2012 “*Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios*”.

Artículo 29. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.

III. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

1. LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL.

La constitución política en el preámbulo definió el estado colombiano como un estado social de derecho democrático, participativo y pluralista, en el cual se garantizó el poder supremo y soberano del pueblo, mediante tres aspectos:

(i) *Que el Pueblo, a través de sus representantes o directamente, crea el derecho al que se subordinan los órganos del Estado y los habitantes.*

(ii) *Que el Pueblo decide la conformación de los órganos mediante los cuales actúa el poder público, mediante actos electivos.*

(iii) *Que el Pueblo y las organizaciones a partir de las cuales se articula, intervienen en el ejercicio y control del poder público, a través de sus representantes o directamente. (Corte Constitucional ,2015)*

De la misma manera, el artículo 40 de la constitución establece el derecho del ciudadano a elegir y ser elegido. Derecho constitucional que se ha interpretado de dos maneras, la primera como garantía por parte del estado de brindar todos los medios necesarios para que los ciudadanos puedan participar efectivamente en la elección de sus representantes y la segunda el derecho que tiene el ciudadano de ser elegido como representante de los votantes en un cargo determinado. (Corte Constitucional, 2014)

Lo que refleja que la democracia es el eje esencial de los ciudadanos en el estado colombiano, que mediante el mandato popular logra representación en la administración, actuación y decisión del estado. Surge entonces la necesidad del estado de garantizar la organización de los ciudadanos en espacios de participación ciudadana que les permita incidir en la gestión y administración de lo público.

Por otro lado, el Estatuto Orgánico de Bogotá establece en el artículo 6 que le corresponde al Concejo de Bogotá *“dictar las normas necesarias para asegurar la vigencia de las instituciones y los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria”*. Así se confirmó más adelante con el Decreto Distrital 448 de 2007 cuando en su artículo 10 le otorgó la calidad de autoridad de la participación al Concejo de Bogotá, siendo la principal autoridad del Distrito Capital con la obligación de impulsar proyectos de acuerdo que garanticen la participación de las comunidades y de la ciudadanía en general.

Concibiendo esta obligación, Bogotá ha sido pionera en generar la política pública de participación ciudadana Incidente del Distrito Capital 2023 – 2034, dispuso 6 puntos que conforman el alcance de participación incidente de la ciudadanía, de los cuales se resaltan:

“Cocreación. Es la forma colaborativa en la que se involucra a la ciudadanía para establecer objetivos, métodos, estrategias o resultados de una política, programa o proyecto en torno a la gestión pública.

Controlar. Las personas realizan control social y seguimiento a la gestión pública en lógica de petición y rendición de cuentas, que puede incluir recomendaciones sobre la ejecución de planes, programas y proyectos de la Administración Pública.

Co-ejecutar. Permite la participación de las personas en lo público mediante su vinculación en la ejecución de planes, programas, proyectos e iniciativas.

Decidir. Se expresa en la posibilidad de generar un ejercicio deliberativo entre los habitantes y las instituciones del Estado sobre asuntos de interés.”

Ejes con los cuales se logra una política pública incidente en el distrito capital, lo que origina confianza, seguridad, cercanía e involucramiento de las comunidades en la planificación y proyección del entorno en que conviven.

Justo es el caso del gremio de los conductores, los cuales no cuentan con un espacio de participación ciudadana incidente y requieren que sus necesidades sean tenidas en cuenta en la cocreación, control, co-ejecución y gestión de las políticas de movilidad de la ciudad.

Siendo un enfoque necesario para la implementación de políticas públicas como la prevención de siniestros viales, la regulación del tráfico en vías y la política de seguridad vial, debido a que son los principales actores viales que padecen las consecuencias de una mala gestión de movilidad en la ciudad.

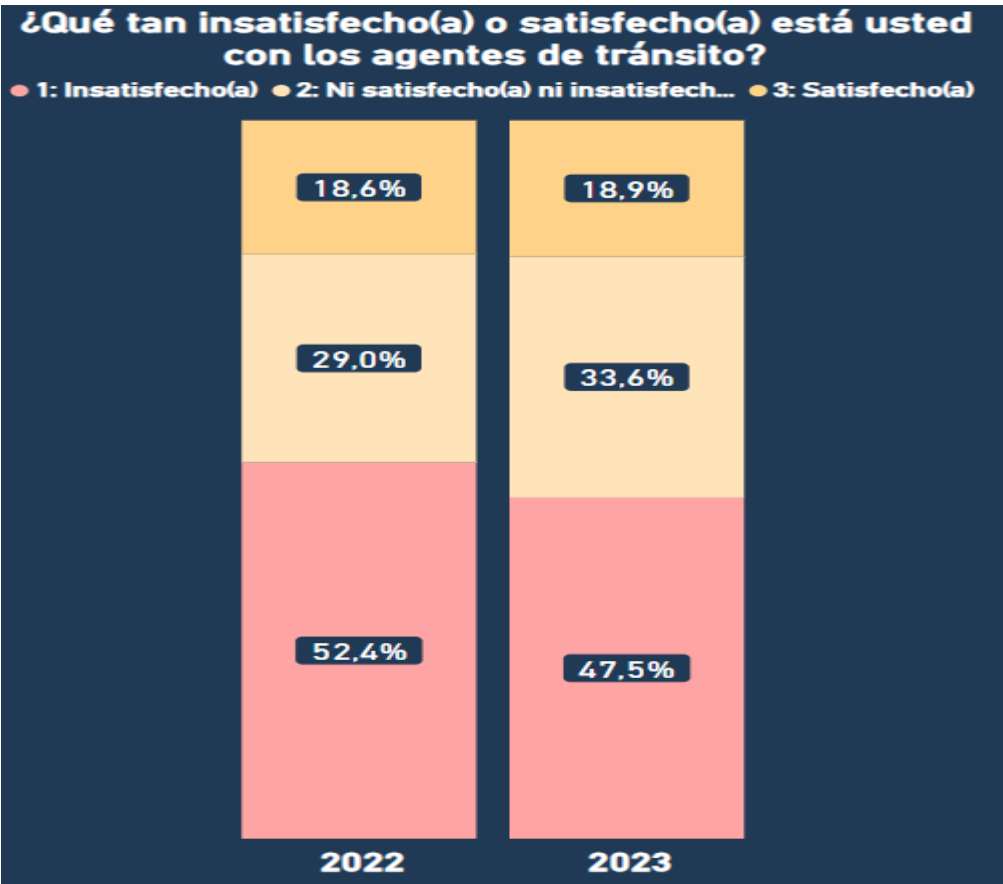
2. LA NECESIDAD DE CREAR INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN LA CIUDAD.

Implementar comités e instancias de participación ciudadana en los entes del distrito es una decisión importante que el Concejo de Bogotá debe tomar, darle la oportunidad a los ciudadanos de que participen, fortalezcan la democracia y los procesos de transformación en la toma de decisiones, es un mecanismo que genera transparencia y confianza de la ciudadanía en las instituciones, es por esto que se debe vincular a la ciudadanía como parte de la solución de las problemáticas por las que atraviesan diariamente.

La participación ciudadana fortalece la legitimidad y la credibilidad frente a las decisiones públicas, según la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la participación ciudadana *“es el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas”* (Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009) con base en lo anterior se hace necesario contar con la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, ya que es un deber y al mismo tiempo un derecho el que la ciudadanía tenga la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones.

Ciudades como Ibagué, Medellín, Cartagena, Armenia y Bucaramanga ya han implementado la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana y el Sistema de Participación Ciudadana, es por esto que el Concejo de Bogotá debe sumarse a esta iniciativa y aprovechar la gran oportunidad de brindarle a la ciudad dos instancias de participación sumamente importantes para el sector movilidad, como lo son las instancias anteriormente mencionadas, las cuales ya están creadas por la ley 1310 de 2009. Lo que busca este proyecto es la

implementación de dicha ley, si se logra la implementación de estas instancias, mejorará la relación entre la ciudadanía y los agentes civiles de tránsito, por ende se mejorará la percepción que tienen los ciudadanos sobre la Secretaría Distrital de Movilidad y el cuerpo de agentes civiles de tránsito.



(Fuente:
Bogotá Cómo

Vamos,2023)

El análisis de los datos de la última “Encuesta de Percepción Ciudadana 2023 de Bogotá Cómo Vamos”, respecto a la satisfacción de la ciudadanía con los agentes civiles de tránsito, revela un panorama preocupante en la relación entre la ciudadanía y esta entidad. El hecho de que un 47.5% de los ciudadanos encuestados se declaren insatisfechos con los agentes de tránsito indica una percepción negativa. Esta insatisfacción podría estar relacionada con problemas de corrupción, maltrato hacia los conductores, abusos

de autoridad y malos procedimientos, además la percepción de que los agentes no están cumpliendo adecuadamente con su función de regular el tráfico y garantizar la seguridad vial.

Por otro lado, existe un 33.6% de los ciudadanos que se encuentran en una posición neutral, lo que sugiere que hay un sector de la población que no tiene una opinión formada o que ha tenido experiencias variadas con los agentes de tránsito. Esto podría interpretarse como una oportunidad para mejorar la comunicación y la relación entre los agentes y los ciudadanos. Si bien no están insatisfechos, su falta de opinión positiva puede indicar que la labor de los agentes no está generando un impacto lo suficientemente fuerte como para ser reconocida.

Finalmente, que solo el 18.9% de los ciudadanos demuestren satisfacción es un indicador alarmante, especialmente en un contexto donde la movilidad y la seguridad en las vías son temas cruciales en una ciudad donde la movilidad es una de las prioridades de los Bogotanos. Este bajo nivel de satisfacción es una llamada de atención para el Concejo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad sobre la necesidad de reformar y mejorar los procesos de participación ciudadana, además de la formación, evaluación y supervisión de los agentes civiles de tránsito.

Estas instancias reúnen a la academia, la ciudadanía, los servidores públicos, expertos en temas de movilidad, entes de control, los cuales intercambiarán sus experiencias y conocimientos sobre las buenas prácticas que deben implementar los agentes civiles de tránsito de cara a la ciudadanía.

Además, este espacio será un ágora para la lucha contra la corrupción, las malas prácticas de algunos agentes civiles de tránsito y el mal comportamiento de algunos ciudadanos, pero a su vez, será un espacio enmarcado por el respeto entre sus participantes, en donde se prioricen el intercambio de conocimientos y temas de ciudad para el sector movilidad, convirtiéndose en una instancia importante para la solución de problemáticas de los actores viales y para mejorar la relación entre los agentes civiles de tránsito y la ciudadanía.

3. RELACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El proyecto de acuerdo *“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DISTRITAL Y EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SECTOR MOVILIDAD”* Está directamente relacionado con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A continuación, se relacionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están directamente relacionados con el proyecto de acuerdo.

- **ODS 10 - Reducción de las desigualdades**

Reducir la desigualdad en la participación política requiere la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones. Fomentar y fortalecer el acceso de los ciudadanos a instancias como las que promueve este proyecto mejora la desigualdad en temas de participación ciudadana, especialmente de grupos poblacionales que no tienen la posibilidad de ser escuchados.

- **ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas**

Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, es lo que pretende este Objetivo, así que se hace necesario fomentar un gobierno abierto que propenda por el fomento de la democracia, el buen gobierno, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de las entidades distritales de cara a la ciudadanía.

- **ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos**

La creación de estas instancias de participación ciudadana fomentan la colaboración entre el Sector Público y la ciudadanía, lo que promueve la participación y la confianza de la ciudadanía en las entidades del Distrito.

4. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO.

La presente iniciativa tiene correlación directa con el **"Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura"** que pretende generar confianza, transparencia y cercanía con la presente administración Distrital.

Así lo establece el artículo 15 el cual indica que uno de los propósitos de la vigente administración distrital es tener un gobierno que atienda las necesidades, garantice los derechos de las personas y brinde un servicio amable, ágil y oportuno en todo el territorio, propendiendo fortalecer la confianza entre el Gobierno y la ciudadanía que habita Bogotá y transita por ella, a partir de una relación fundamentada en el diálogo, el respeto, la participación y la corresponsabilidad.(Acuerdo 927 de 2024)

Fíjese como la administración plantea que se generen consensos entre los gobiernos y la sociedad civil, la academia, el sector privado y en general la ciudadanía, para avanzar hacia una gestión pública más inteligente, abierta y cercana a la ciudadanía. (Acuerdo 927 de 2024)

Esto confirmado por el plan de desarrollo distrital mediante programa 39 del **“Camino Hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana incidente”**, cuando establece que para implementar un nuevo modelo de gobernanza democrática, **se fortalecerá las plataformas de participación ciudadana en las 20 localidades, en el marco de presupuestos participativos, Gobierno Abierto y audiencias ciudadanas y asambleas locales y consejos locales y distritales**. Espacios donde la ciudadanía tendrá la posibilidad de ser parte de las decisiones y actuaciones de la Administración Distrital. (Acuerdo 927 de 2024)

Por otra parte, el plan de desarrollo fijó las siguientes metas a cumplir por parte de la presente administración distrital que complementan lo mencionado anteriormente:

413. Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles.

419. Implementar un (1) modelo de gobernanza democrática que amplíe el alcance de la participación de la ciudadanía organizaciones sociales y comunales de primer, segundo y tercer grado en todas las decisiones públicas del gobierno distrital.

IV. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

En cuanto a la competencia que tiene el Concejo de Bogotá para aprobar esta iniciativa, esta se ampara en el Decreto Ley 1421 de 1993, que establece al Concejo de Bogotá como la suprema autoridad del Distrito Capital y habilitado para dictar este tipo de normas:

Decreto Ley 1421 de 1993

ARTÍCULO 3o. OBJETO. *El presente estatuto político, administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio; y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.*

Las disposiciones del presente estatuto prevalecen sobre las normas legales de carácter general vigentes para las demás entidades territoriales.

Artículo 12: *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.....*

(...)

19. *Dictar normas de tránsito y transporte.*

V. IMPACTO FISCAL

Como lo establece el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es obligatorio esclarecer el impacto fiscal que tienen las normas sobre las finanzas públicas, lo que significa medir la carga fiscal que estas pueden tener tanto en el presupuesto anual y en el Marco Fiscal de mediano Plazo que deben observar las diferentes entidades del Estado. Ahora bien, esto no significa que los instrumentos normativos que pueda aprobar el Concejo de Bogotá estén limitados por este hecho, pues como lo aclara la Sentencia C-911 de 2007, el impacto fiscal no se puede convertir en una limitación absoluta para que las corporaciones públicas cumplan con sus funciones legislativas o de orden normativo. En este sentido, la sentencia establece:

En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

(...) el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.

Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto del proyecto y cómo este se alcanzará, se considera que la presente iniciativa no genera impacto fiscal, ya que las acciones para la implementación del proyecto de acuerdo se enmarcan en la Ley 1310 del 2009. Artículos 10 y 11. Los recursos con los que cuentan las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito son suficientes para su puesta en marcha.

VI. CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto y de conformidad con el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 2019, nos permitimos presentar a su consideración el presente proyecto de acuerdo, para su trámite y aprobación.

Respetuosamente,

EDISON JULIAN FORERO CASTEBLANCO
Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 156 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DISTRITAL Y EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SECTOR MOVILIDAD”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 y 19 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

ARTÍCULO 1. OBJETO DEL PROYECTO. El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objeto implementar la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana Distrital y el Sistema de Participación Ciudadana del Sector Movilidad.

ARTÍCULO 2: IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DISTRITAL. Impleméntese la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana Distrital como mecanismo del más alto nivel, encargada de orientar y fiscalizar las relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito del Distrito Capital y las autoridades administrativas, así como, atender las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución.

Parágrafo: RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN. La Secretaría Distrital de Movilidad garantizará la implementación, conformación, funcionamiento y el desarrollo de las actividades que sean necesarias para llevar a cabo la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana Distrital.

ARTÍCULO 3: COMPOSICIÓN. La Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana Distrital, estará integrada por:

1. El Alcalde o el Secretario Distrital de Movilidad.
2. Un representante del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC
3. El Comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Comandante del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito del Distrito.
4. Un miembro del Consejo Territorial de Planeación Distrital.
5. Un delegado del Sindicato de Empleados de Tránsito y Transporte.
6. Un representante de las Juntas de Acción Comunal.
7. Un representante de las Empresas del Transporte.
8. Un representante de la Asociación Distrital de Clubes Moteros de Bogotá.
9. Un representante de los Agentes de Tránsito.
10. Un delegado del Concejo Distrital, que será designado por la Mesa Directiva del Concejo Distrital.
11. Un representante del Consejo Distrital de Juventudes.
12. Un representante del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá
13. Un representante del sector Académico.
14. Un representante de la Veeduría Distrital.
15. Un representante de la Personería Distrital.
16. Un representante del Consejo Distrital de Discapacidad.
17. Un representante del Consejo Distrital de la Bici.
18. Demás asociaciones de actores viales debidamente constituidas.

PARÁGRAFO 1. EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL IDPAC. Será el garante del proceso por el cual se elegirán los diferentes representantes que harán parte de la Comisión de Tránsito Distrital y Participación Ciudadana.

PARÁGRAFO 2. ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES. Para la elección de los representantes del Sindicato de Empleados de Tránsito y Transporte, las Juntas de Acción Comunal, las Empresas de Transporte, la Asociación Distrital de Clubes Moteros de Bogotá, los agentes de tránsito, del Consejo Territorial de Planeación Distrital, del Consejo Distrital de Juventudes, del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, del sector Académico, del consejo distrital de discapacidad,

del consejo distrital de la bici y demás asociaciones de actores viales debidamente constituidas previo a la instalación de la comisión, el Instituto Distrital de La Participación y Acción Comunal IDPAC, se reunirá con cada uno de ellos, con la finalidad de elegir la metodología de elección de cada uno de sus representantes.

Parágrafo 3. Los representantes serán elegidos por un periodo de un (1) año, con la posibilidad de ser reelegido por un (1) año más.

ARTÍCULO 4: FUNCIONES. Son funciones básicas de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana Distrital:

1. Proponer iniciativas para fortalecer la acción preventiva de los funcionarios públicos de los organismos de tránsito del Distrito Capital, frente a la sociedad, así como prevenir la comisión de faltas, delitos, abusos de autoridad y omisiones.
2. Proponer iniciativas y mecanismos tendientes a determinar en forma prioritaria una orientación ética, civilista, democrática, educativa y social en la relación comunidad-agentes de tránsito y demás servidores públicos.
3. Promover la participación ciudadana en los asuntos de tránsito y transporte, en el Distrito.
4. Recomendar el diseño de mecanismos, políticas públicas, proyectos, programas de planeación, campañas pedagógicas, seguridad, prevención y control vial, para asegurar el compromiso de la comunidad-agentes de tránsito y entidades del Distrito con el apoyo y participación del Fondo de Prevención Vial.
5. Recomendar programas de desarrollo, salud, vivienda, educación y bienestar para los funcionarios de los organismos de tránsito del Distrito.
6. Recomendar la ampliación de los grupos de control vial en el Distrito.
7. Establecer los mecanismos necesarios para que la ciudadanía se exprese y sea atendida la comunidad relacionada con el servicio de los Agentes de Tránsito y Transporte.
8. Las demás que el Distrito les asignen con relación al tránsito y transporte de la Ciudad.

Parágrafo. El Secretario Distrital de Movilidad convocará cada tres meses a la Comisión de Tránsito Distrital y Participación Ciudadana.

ARTÍCULO 5: PERIODICIDAD. La Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana Distrital se reunirá en sesiones ordinarias cada tres (03) meses, del cual se llevará un registro de asistencia, actas de acuerdos y compromisos.

ARTÍCULO 6: RENDICIÓN DE INFORMES. El Secretario Distrital de Movilidad y el Comandante del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito, deberán rendir informe detallado trimestralmente al Concejo Distrital de Bogotá sobre los acuerdos y las actividades realizadas por la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana Distrital.

ARTÍCULO 8: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SECTOR MOVILIDAD: Impleméntese el Sistema de Participación Ciudadana del Sector movilidad con el fin de fortalecer las relaciones entre el ciudadano y la institución, estableciendo mecanismos efectivos para que se expresen y sean atendidos distintos intereses sectoriales y regionales, atinentes al servicio de los agentes de tránsito.

ARTÍCULO 9. RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN. Será el cuerpo de agentes civiles de tránsito y transporte quien desarrollará el Sistema de Participación Ciudadana, además garantizará la implementación, conformación, funcionamiento y el desarrollo de las actividades que sean necesarias para llevar a cabo el sistema de Participación Ciudadana Distrital del Sector Movilidad.

PARÁGRAFO 1: El responsable de implementar el Sistema de Participación Ciudadana del Sector Movilidad será el comandante civil de tránsito y transporte.

PARÁGRAFO 2. EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL IDPAC. Será el garante del proceso por el cual se desarrollará el Sistema de Participación Ciudadana.

ARTÍCULO 9. VIGENCIA. El presente acuerdo empieza a regir desde su fecha de publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BIBLIOGRAFÍA

1. Tamayo, N. (2021). Influencia de la participación ciudadana en las políticas y gestión pública de movilidad sostenible en bicicleta en Bogotá: caso de estudio consejos locales de la bicicleta. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recuperado de: <https://repository.udistrital.edu.co/server/api/core/bitstreams/e0a7ff08-540f-4a5d-9d39-0b43f54e3413/content>
2. Rivera, A. (2020). Participación ciudadana y transparencia como objetivos del “gobierno abierto”: estudio de caso en Bogotá 2012-2020. Universidad Católica De Colombia -Università Degli Studi Di Salerno. Recuperado de: <https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/aff55bc0-aedf-424f-88dd-a85871c900a7/content>
3. Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Recuperado de: <https://clad.org/wp-content/uploads/2020/10/5-Carta-Iberoamericana-de-Participaci%C3%B3n-Ciudadana-CLAD.pdf>
4. A. Naser (coord.), “Gobierno abierto y ciudadanía en el centro de la gestión pública: selección de artículos de investigación”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2021/114), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021. : Recuperado de: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/62058418-8a03-4e67-956e-f8934925c206/content>

5. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de:
https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023_Spanish.pdf?_gl=1*q9rn7i*_ga*MTEzMjc0MjAyMy4xNzI3MTA4NjA2*_ga_TK9BQL5X7Z*MTcyNzEwODYwNi4xLjEuMTcyNzEwODY0NC4wLjAuMA.
6. O'Donnell, G. (2004). Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política. Revista Española de Ciencia Política. Núm. 11. Recuperado de :
<file:///C:/Users/jesui/Downloads/37355-Texto%20del%20art%C3%ADculo-117306-1-10-20150717.pdf>
7. Plan Distrital de Seguridad Vial. Recuperado de:
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=150342>
8. OCDE (2015), Gobierno Abierto en América Latina, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing. Recuperado de: https://www.oecd-ilibrary.org/gobierno-abierto-en-america-latina_5jxvdl3tslp.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F9789264225787-es&mimeType=pdf
9. Encuesta de Percepción Ciudadana 2023 Bogotá Cómo Vamos. Recuperado de:
<https://bogotacomovamos.org/datos/#tablero>

PROYECTO DE ACUERDO NO 157 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA CREAR EL CONSEJO DISTRITAL Y LOS CONSEJOS LOCALES DE LOS MOTOCICLISTAS Y CONDUCTORES EN BOGOTÁ D.C.”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**I OBJETO DEL PROYECTO**

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objeto implementar lineamientos para la constitución y creación del Consejo Distrital y los Consejos Locales de Motociclistas en Bogotá D.C., fomentando y garantizando el derecho de participación ciudadana en las decisiones, acciones, proyectos, programas y políticas públicas trascendentes en la visión, gestión y administración de la movilidad que afecte o beneficie al gremio motociclista de la ciudad.

II SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA.**DE ORDEN INTERNACIONAL:**

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Artículo 21:

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

Artículo 25: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

- a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

DE ORDEN CONSTITUCIONAL:

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, **democrática, participativa y pluralista**, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; **facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación**; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

(...)

Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, **tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.**

(...)

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

(...)

Artículo 79: (...) La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

(...)

Artículo 103: El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.

(...)

Artículo 209: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

(...)

Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.

(...)

Artículo 311: Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

DE ORDEN LEGAL:

Decreto ley 1421 de 1991. "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá"

Artículo 6. Participación comunitaria y veeduría ciudadana. Las autoridades distritales promoverán la organización de los habitantes y comunidades del Distrito y estimularán la creación de las asociaciones profesionales, culturales, cívicas, populares, comunitarias y juveniles que sirvan de mecanismo de representación en las distintas instancias de participación, concertación y vigilancia de la gestión distrital y local.

De conformidad con lo que disponga la ley, el Concejo dictará las normas necesarias para asegurar la vigencia de las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y comunitaria y estimular y fortalecer los procedimientos que garanticen la veeduría ciudadana frente a la gestión y la contratación administrativas.

Ley 105 de 1993 "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones."

Artículo 2.- Principios Fundamentales.

- a) **De la soberanía del pueblo:** La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. **El pueblo la ejerce en forma directa por medio de sus representantes**, en los términos que la Constitución establece. Corresponde al Estado garantizar la soberanía completa y exclusiva sobre el territorio, el espacio aéreo y el mar territorial.
- b) **De la intervención del Estado:** Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.

Ley 489 de 1998. "Por la cuál se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."

Artículo 32.- Democratización de la Administración Publica. Todas las entidades y organismos de la Administración Publica tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

Ley 769 de 2002 "Código Nacional de Transito".

Artículo 1. ámbito de aplicación y principios.

Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, educación y descentralización.

Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática"

Artículo 60. Control Social a lo público. El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados.

DE ORDEN REGLAMENTARIO:

Decreto Distrital 448 de 2007 "Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana"

Artículo 2. Definición y objetivos del sistema distrital de participación ciudadana. El Sistema Distrital de Participación Ciudadana es un mecanismo de articulación entre la administración distrital, las instancias de participación, las organizaciones sociales y comunitarias y redes, asociaciones, alianzas - temporales y permanentes, con el fin de garantizar el derecho a la participación en las políticas públicas del Distrito Capital de Bogotá.

(...)

Artículo 10. autoridades de la participación. Son el conjunto de servidores y servidoras públicas, entidades, dependencias e instancias de gobierno y administración públicas distrital y local, que tienen la función de formular, adoptar, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar, promover y financiar los procesos institucionales y sociales de participación de las comunidades y las organizaciones sociales en las decisiones públicas. Son autoridades en materia de participación en el Distrito Capital:

I. El Concejo de Bogotá

Decreto Distrital 504 de 2011 “Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital”

Artículo 1. Política Pública Distrital de Participación Incidente. Adóptase la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital, la cual será de obligatorio cumplimiento para los/as servidores/as públicos/as, entidades, dependencias e instancias de gobierno y de la administración pública del orden distrital y local.

(...)

Artículo 4°. Objetivo General de la Política Pública de Participación Incidente. Es Promover, concertar y fortalecer los procesos de construcción democrática de lo público, creando las condiciones que permitan reconocer y garantizar el derecho a la participación incidente de la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos de formulación, decisión, ejecución. Seguimiento, evaluación y control social de las políticas públicas, Plan Distrital de Desarrollo, Planes Locales de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial.

Decreto Distrital 477 de 2023. “Por medio del cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034 y se dictan otras disposiciones”

Artículo 1.- Adopción. Adóptese la Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034, con el fin de fortalecer el ejercicio del derecho de participación ciudadana en Bogotá en procura de alcanzar incidencia en los asuntos públicos a través del mejoramiento de las condiciones de gobernanza, estructura institucional y las competencias ciudadanas.

(...)

Artículo 6°.- Alcance de la Participación. El alcance de la participación ciudadana se comprende a partir de seis niveles progresivos:

1. **Informar.** La Administración pública socializa la información sobre un proyecto o proceso de interés público.
2. **Consultar.** La Administración pública presenta a consideración de los actores una iniciativa o decisión, se emite un concepto u opinión, pero este no es necesariamente vinculante.
3. **Cocrear.** Es la forma colectiva de innovación colaborativa en el que se involucra a la ciudadanía para establecer objetivos, métodos, estrategias o resultados de una política, programa o proyecto en torno a la gestión pública.
4. **Controlar.** Las personas realizan control social y seguimiento a la gestión pública en lógica de petición y rendición de cuentas, que puede incluir recomendaciones sobre la ejecución de planes, programas y proyectos de la Administración Pública, no necesariamente vinculantes. En todo caso se genera la correlativa obligación de emitir respuesta.

5. **Co-ejecutar.** Permite la participación de las personas en lo público mediante su vinculación en la ejecución de planes, programas, proyectos e iniciativas.
6. **Decidir.** Se expresa en la posibilidad de generar un ejercicio deliberativo entre los habitantes y las instituciones del Estado sobre asuntos de interés. Propende porque las decisiones y acciones de las instituciones del Estado reflejen las preferencias, iniciativas y consideraciones de la población en los términos derivados del diálogo y las decisiones democráticas, estas son de obligatorio cumplimiento.

III. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

1. la importancia de la participación ciudadana como un derecho fundamental.

La constitución política en el preámbulo definió el estado colombiano como un estado social de derecho democrático, participativo y pluralista, en el cual se garantiza el poder supremo y soberano del pueblo, mediante tres aspectos:

- (i) *Que el Pueblo, a través de sus representantes o directamente, crea el derecho al que se subordinan los órganos del Estado y los habitantes.*
- (ii) *Que el Pueblo decide la conformación de los órganos mediante los cuales actúa el poder público, mediante actos electivos.*
- (iii) *Que el Pueblo y las organizaciones a partir de las cuales se articula, intervienen en el ejercicio y control del poder público, a través de sus representantes o directamente. (Corte Constitucional ,2015)*

De la misma manera, el artículo 40 de la constitución establece el derecho del ciudadano a elegir y ser elegido. Derecho constitucional que se ha interpretado de dos maneras, la primera como garantía por parte del estado de brindar todos los medios necesarios para que los ciudadanos puedan participar efectivamente en la elección de sus representantes y la segunda el derecho que tiene el ciudadano de ser elegido como representante de los votantes en un cargo determinado. (Corte Constitucional, 2014)

De esta manera se entiende que la democracia es un eje esencial de los ciudadanos en el estado colombiano, que mediante el mandato popular logra representación en la administración, actuación y decisión del estado. Surge entonces la necesidad del estado de garantizar la organización de los ciudadanos en espacios de participación ciudadana que les permita incidir en la gestión y administración de lo público.

Por otro lado, el Estatuto orgánico de Bogotá establece en el artículo 6 que le corresponde al Concejo de Bogotá *“dictar las normas necesarias para asegurar la vigencia de las instituciones y los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria”*. Así lo confirmó el Decreto Distrital 448 de 2007 cuando en su artículo 10 le otorgó la calidad de autoridad de la participación al Concejo de Bogotá, siendo la principal autoridad del Distrito Capital que tiene la obligación de impulsar proyectos de acuerdo que garanticen la participación de las comunidades y de la ciudadanía en general.

Concibiendo esta obligación, Bogotá ha sido pionera en generar la política pública de participación ciudadana Incidente del Distrito Capital 2023 – 2034, en la que se dispuso 6 puntos que conforman el alcance de participación incidente de la ciudadanía, de los cuales se resaltan:

“Cocrear: *Es la forma colaborativa en el que se involucra a la ciudadanía para establecer objetivos, métodos, estrategias o resultados de una política, programa o proyecto en torno a la gestión pública.*

Controlar. *Las personas realizan control social y seguimiento a la gestión pública en lógica de petición y rendición de cuentas, que puede incluir recomendaciones sobre la ejecución de planes, programas y proyectos de la Administración Pública.*

Co-ejecutar. *Permite la participación de las personas en lo público mediante su vinculación en la ejecución de planes, programas, proyectos e iniciativas.*

Decidir. *Se expresa en la posibilidad de generar un ejercicio deliberativo entre los habitantes y las instituciones del Estado sobre asuntos de interés.”*

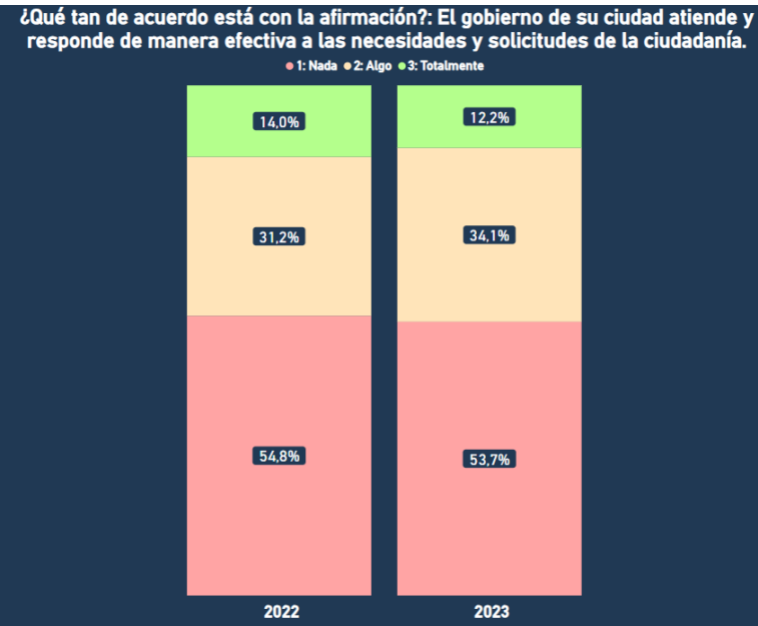
Ejes con los cuales se logra una política pública incidente en el distrito capital, lo que origina confianza, seguridad, cercanía e involucración de las comunidades en la planificación y proyección del entorno en que conviven.

Este es el caso que pretende el proyecto de acuerdo con el gremio de los motociclistas y de los conductores, los cuales no cuentan con un espacio de participación ciudadana incidente y requieren que sus necesidades sean tenidas en cuenta en la cocreación, control, co-ejecución y gestión de las políticas de movilidad de la ciudad.

Siendo un enfoque y visión necesaria para la implementación de políticas públicas de movilidad como es la prevención de siniestros viales, la regulación del tráfico en vías y la política de seguridad vial, debido a que son los principales actores viales que padecen las consecuencias de una mala gestión de movilidad en la ciudad.

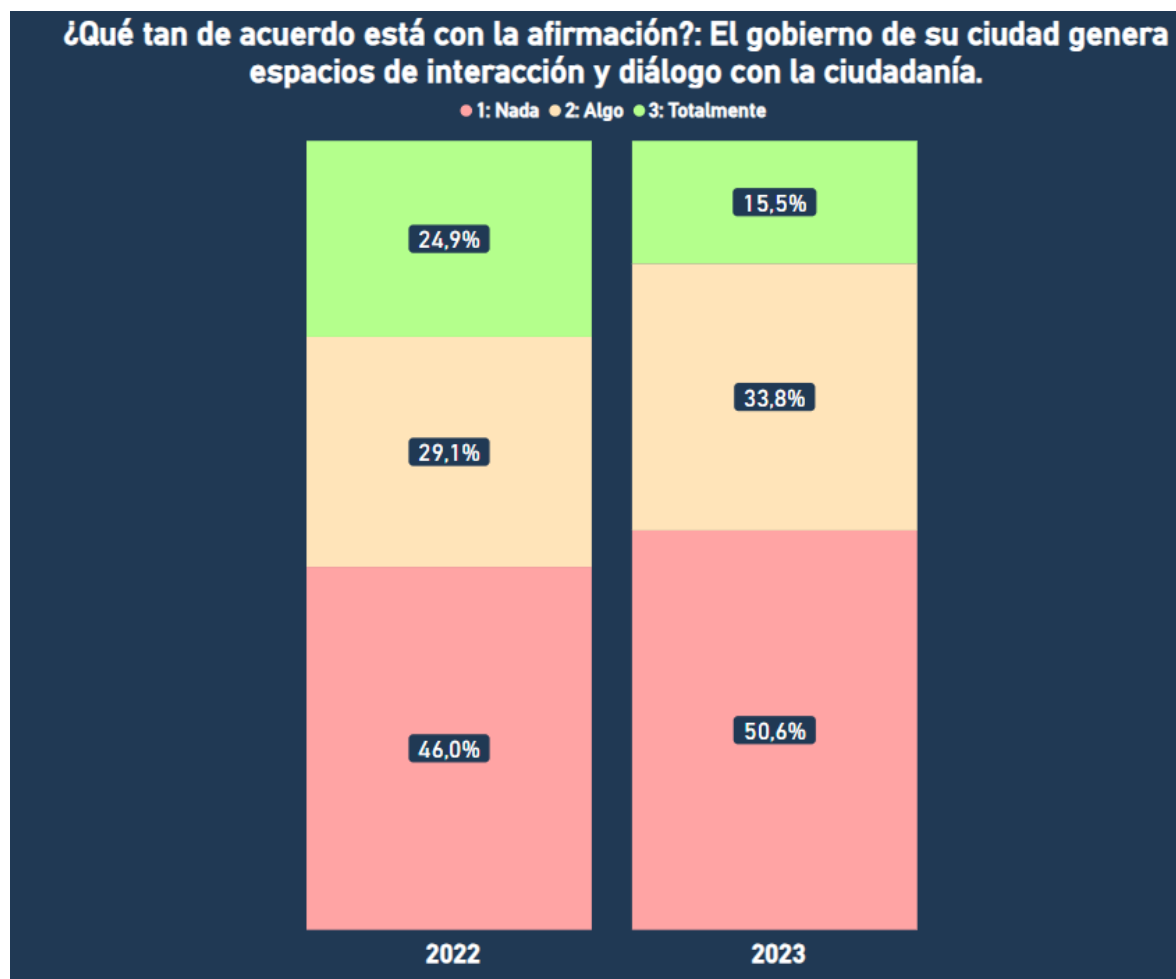
2. la necesidad de crear instancias de participación en la ciudad.

En Bogotá, si bien se han aunado esfuerzos para generar gran variedad de espacios de diálogo, interacción e intervención ciudadana, como son los Consejos Locales y Distritales, los Consejos Consultivos y las diferentes mesas locales de participación ciudadana. Los ciudadanos hoy tienen la percepción de que hay poca atención y acercamiento a las necesidades que tiene la ciudad, el 12% de los 1.501 encuestados por Bogotá Cómo Vamos siente que la administración distrital atiende de manera efectiva las necesidades y solicitudes realizadas , **el 53,7% siente que no se atienden de manera efectiva las necesidades de la ciudadanía**, lo que refleja la poca cercanía y repuesta del gobierno distrital con los bogotanos. (Bogotá Cómo Vamos,2023)



(Fuente: Bogotá Cómo Vamos,2023)

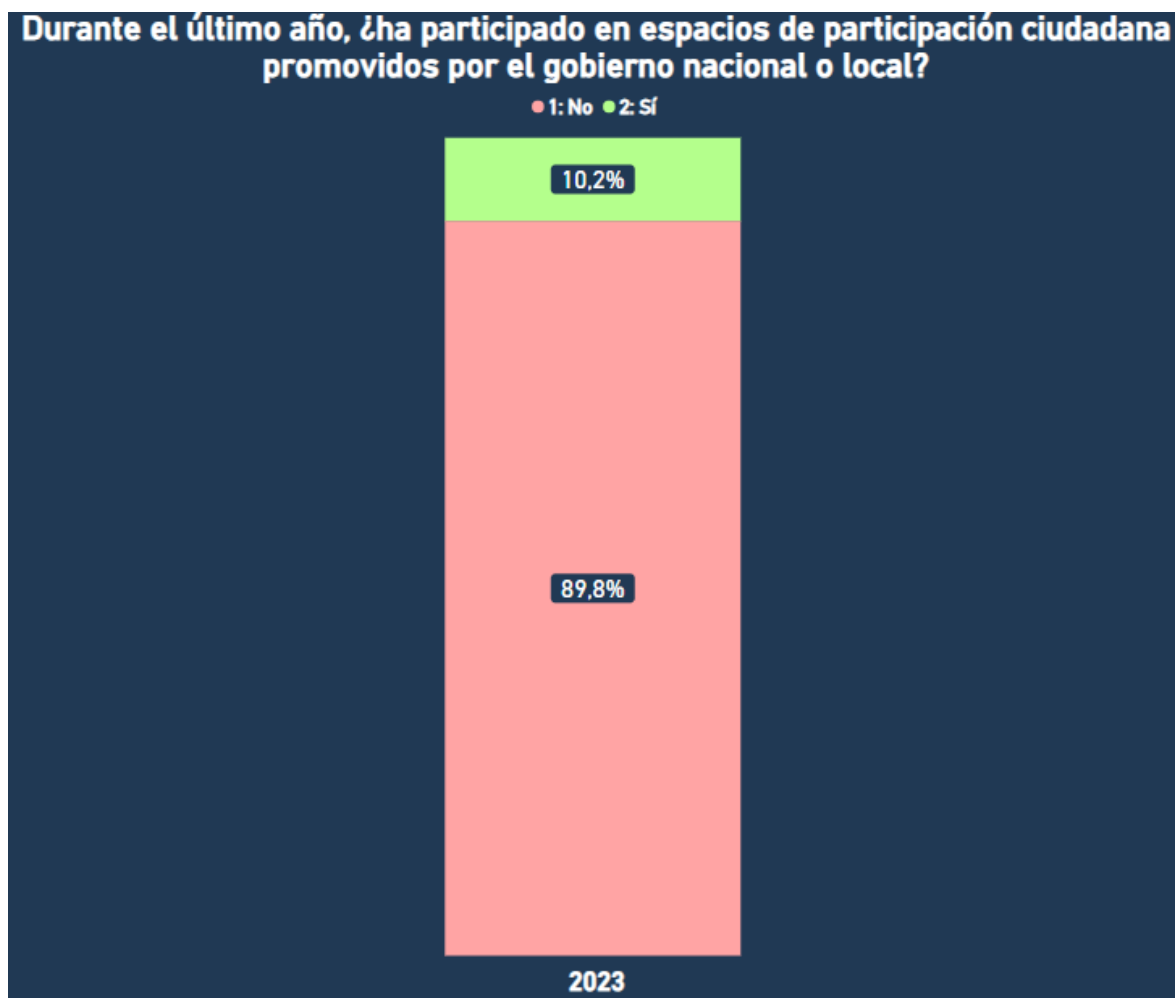
La falta la involucración de la ciudadanía en las decisiones trascendentales es una realidad en Bogotá, **el 50.6% de 1.501 personas encuestadas por Bogotá Cómo Vamos consideran que en Bogotá no se generan espacios de interacción ni de diálogo en la ciudad** y tan solo el 15.5% considera que si se están generando este tipo de espacios, lo que demuestra que aunque se tengan variedad de espacios de participación en la ciudad, todavía una gran parte de la población no se siente representada en estos escenarios diseñados por la administración distrital.(Bogotá Cómo Vamos,2023)



(Fuente: Bogotá Cómo Vamos 2023)

De la misma manera, la ciudadana, en general, no se encuentra incentivada para ser parte de los espacios de participación diseñados por el Distrito, esto viéndose reflejado en la poca representación que tienen los diferentes gremios, comunidades, sectores y estratos de la ciudad. **Alrededor del 90 % de los encuestados por Bogotá Cómo Vamos en 2023 no han intervenido en escenarios de participación ciudadana**, esto puede ser un resultado de que los diferentes sectores no se sienten atraídos por la temática u objeto con el que se diseñó el escenario de participación. Generando una descontextualización y desconocimiento de las problemáticas que vive la ciudad al no tener una clara representación como lo mencionó el sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Hernando Gómez Buendía cuando dijo que en "Colombia nadie representa a nadie", (Hernando Gómez Buendía, 2021)

(Fuente: Bogotá Cómo Vamos 2023)



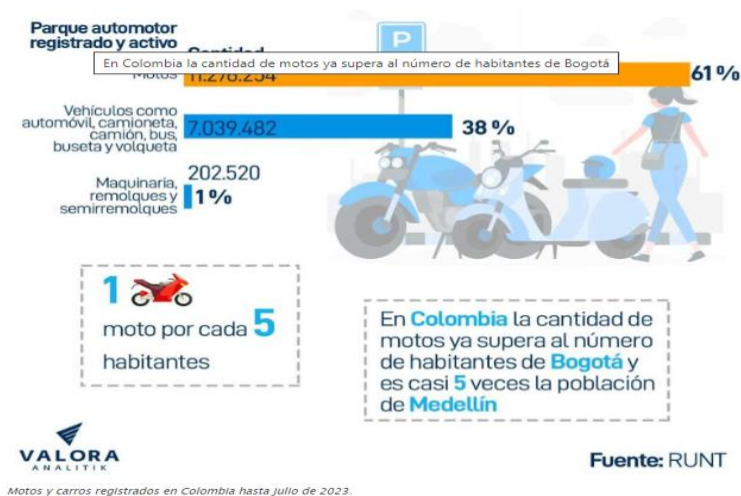
Esta falta de involucración y representación en los escenarios de participación, ha generado desconfianza en el gobierno nacional y local, lo que puede explicar la falta de motivación por parte de la ciudadanía a ser parte de espacios de acercamiento, diálogo, e interacción de los diferentes sectores de la sociedad y la administración distrital.

La importancia recae, pues en que Bogotá al ser la ciudad que recibe y acoge alrededor de 10 millones de habitantes de todas las partes del país, sea la que más escenarios de participación tengan en la Nación para que comunidades, gremios, congregaciones, asociaciones y cualquier tipo de población tengan un espacio en el debate público de las medidas, estrategias, proyectos o políticas públicas de la ciudad.

3. El panorama Nacional y Distrital de los motociclistas y conductores.

Los motociclistas son uno de los principales actores vial, la moto se ha convertido por excelencia en el vehículo preferido por los colombianos, alrededor de **11.609.028 motocicletas** se encuentran matriculadas en el país lo que representa **el 61% del parque automotor nacional**, siendo el vehículo más comprado y utilizado en las vías nacionales, departamentales municipales, y distritales del país. (Runt,2024).

Esto demuestra que el número de motos a nivel nacional ya supera el número de habitantes de Bogotá, que son 7.412.556 habitantes y es 5 veces la población de Medellín, que es alrededor de 2.700.702 habitantes, lo que indica que en Colombia hay 1 moto por cada 5 habitantes. (DANE 2018-2020, VALORA ANALITIK 2023)



(Fuente:Valora Analytk 2023)

Con respecto al vehículo particular, el 38% del parque automotor nacional es conformado por este, lo que indica que alrededor de 7.039.482 de vehículos como automóviles, camionetas, camión, bus, buseta y volqueta se encuentran matriculados en el país. Siendo un sector importante que contribuye al desarrollo económico de la ciudad y el país. (VALORA ANALITYK,2023)

Por otro lado, el avance de la industria automotriz ha logrado el desarrollo económico y social del país, el sector Automotor representa **el 6,2% del producto interno bruto (PIB)**, empresas como GM Colmotores, Sofasa Renault, Hino Motors y Foton S.A.; Auteco, AKT Motos, Incolmotos Yamaha, Fanalca Honda, Hero Motors y Suzuki; generan alrededor del 99% del ensamble de vehículos a nivel nacional, 84% del ensamble de motocicletas y un 30% en la producción de autopartes a nivel nacional, siendo una de las industrias más importantes para el país. (ANDI,2019)

Lo que ha producido que hoy en Bogotá circulen cerca de 2.400.000 vehículos. De los cuales el 50% son automóviles y el 20% son motocicletas. Son 511.790 motociclistas que circulan hoy en Bogotá, de los cuales el 44,8% utilizan la moto para el desplazamiento diario, el 12,9% la usan como medio de empleo y de generación de ingresos y el 17,1% lo utiliza para desplazamientos de recreación. (Bogotá Cómo Vamos 2019, RUNT 2023, Red De Seguridad Vial 2023).

USO DE MOTO



(Fuente: Red de Seguridad Vial 2023)

4. La necesidad de crear un Consejo Local y Distrital enfocado en las políticas de movilidad y tránsito en la ciudad.

Es claro que las prestaciones y economía de los vehículos como son las motos o los automóviles son de gran utilidad para los Bogotanos, la comodidad, la economía y el bienestar reflejado en tiempo, es lo que incentiva a los bogotanos y colombianos a adquirir un carro o una moto, esto se puede evidenciar en el aumento de número de viajes en moto en los últimos 12 años en Bogotá mientras que en el 2011 el número de viajes en moto era de 343.505 paso a 887.552 viajes en moto en 2023, un aumento de más del doble, siendo el tercer vehículo más utilizado en la ciudad después del auto y el transporte público.

Fuente: (Observatorio de movilidad 2023)



Por otro lado, es en los estratos 1, 2 y 3 donde más se concentran los viajes en moto con 804.609 en 2023, mientras que el auto está presente en los estratos 4, 5 y 6 con 787.134 viajes en 2023. Esto demuestra la gran cantidad de personas que se transportan en vehículo particular, que deben ser tenidos en cuenta en la movilidad de la ciudad que requieren ser incorporados a la gestión, decisiones y política pública de la movilidad, mediante un espacio democrático que permita el intercambio de pensamiento, diálogo y opinión para el avance y ejecución del desarrollo de la movilidad en la ciudad (Observatorio de Movilidad 2023)

Son 2.400.000 conductores que transitan en Bogotá que deben contar con un espacio de deliberación donde surjan propuestas, iniciativas, comentarios y opiniones de los temas relevantes para el futuro de la ciudad como es; la movilidad sostenible, el plan de seguridad vial, los planes de manejo de tráfico, el mantenimiento de la malla vial de la ciudad y la integración de modos de transportes.

Los mencionados espacios promoverán la cooperación e involucración de los conductores y motociclistas en las políticas de movilidad, educación, pedagogía y cultura en las vías de la ciudad, otorgando la posibilidad de ejercer control social a la gestión, operación y funcionamiento de las autoridades y organismos de tránsito que existen en la ciudad.

5. Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El proyecto de acuerdo *"por medio del cual se dictan normas para crear el consejo distrital y los consejos locales de los motociclistas y conductores en Bogotá D.C."* esta relacionado con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible:

- **ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas:** facilitar la inclusión del gremio de los conductores y motociclistas en las políticas de movilidad en la ciudad, genera que haya convivencia pacífica entre las autoridades de tránsito que gestionan la movilidad de la ciudad y los conductores de moto o vehículo que transitan en la ciudad.

De la misma manera generar estos espacios de participación permiten cumplir con las siguientes metas fijadas por el objetivo:

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.

6. Relación con el Plan Distrital de Desarrollo.

La presente iniciativa tiene correlación directa con el ***"Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura"*** que pretende generar confianza, transparencia y cercanía con la presente administración Distrital.

Así lo estableció en su artículo 15 cuando indico que uno de los propósitos de la vigente administración distrital es tener un gobierno que atienda las necesidades, garantice los derechos de las personas y brinde un servicio amable, ágil y oportuno en todo el territorio, propendiendo fortalecer la confianza entre el Gobierno y la

ciudadanía que habita Bogotá y transita por ella, a partir de una relación fundamentada en el diálogo, el respeto, la participación y la corresponsabilidad. (Acuerdo 927 de 2024)

Fíjese como la administración plantea que se generen consensos entre el gobierno, la sociedad civil, la academia, el sector privado y en general la ciudadanía, con el fin avanzar hacia una gestión pública más inteligente, abierta y cercana a la ciudadanía. (Acuerdo 927 de 2024)

Esto confirmado por el programa 39 **“Camino Hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana incidente”**, que implementa un nuevo modelo de gobernanza democrática, **fortaleciendo las plataformas de participación ciudadana en las 20 localidades, en el marco de presupuestos participativos, Gobierno Abierto y audiencias ciudadanas y asambleas locales y consejos locales y distritales**. Espacios donde la ciudadanía tendrá la posibilidad de ser parte de las decisiones y actuaciones de la Administración Distrital. (Acuerdo 927 de 2024)

Por otra parte, el plan de desarrollo fija las siguientes metas a cumplir por parte de la presente administración distrital que complementan lo mencionado anteriormente:

413. Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles.

419. Implementar un (1) modelo de gobernanza democrática que amplíe el alcance de la participación de la ciudadanía organizaciones sociales y comunales de primer segundo y tercer grado en todas las decisiones públicas del gobierno distrital.

421. Implementar una (1) estrategia de participación ciudadana en las 20 localidades con enfoque de género, poblacional y diferencial en el marco de presupuestos participativos Gobierno Abierto de Bogotá.

IV. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

En cuanto a la competencia que tiene el Concejo de Bogotá para aprobar esta iniciativa, esta se ampara en el Decreto Ley 1421 de 1993, que establece al Concejo de Bogotá como la suprema autoridad del Distrito Capital y habilitado para dictar este tipo de normas:

Decreto Ley 1421 de 1993

ARTICULO 3o. OBJETO. *El presente estatuto político, administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio; y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.*

Las disposiciones del presente estatuto prevalecen sobre las normas legales de carácter general vigentes para las demás entidades territoriales.

Artículo 12: *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...)

10. Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la participación y veeduría ciudadanas.

(...)

25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.

V. IMPACTO FISCAL

Como lo establece el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es obligatorio esclarecer el impacto fiscal que tienen las normas sobre las finanzas públicas, lo que significa medir la carga fiscal que estas pueden tener tanto en el presupuesto anual y en el Marco Fiscal de mediano Plazo que deben observar las diferentes entidades del Estado. Ahora bien, esto no significa que los instrumentos normativos que pueda aprobar el Concejo de Bogotá estén limitados por este hecho, pues como lo aclara la Sentencia C-911 de 2007, el impacto fiscal no se puede convertir en una limitación absoluta para que las corporaciones públicas cumplan con sus funciones legislativas o de orden normativo. En este sentido, la sentencia establece:

En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

(...) el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.

Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto del proyecto y cómo este se alcanzará, se considera que **no se genera impacto fiscal** y los recursos con los que cuentan las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito son suficientes para su puesta en marcha.

VI. CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto y de conformidad con el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 2019, nos permitimos presentar a su consideración el presente proyecto de acuerdo, para su trámite y aprobación.

Respetuosamente,

PROYECTO DE ACUERDO NO 157 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA CREAR EL CONSEJO DISTRITAL Y LOS CONSEJOS LOCALES DE LOS MOTOCICLISTAS Y CONDUCTORES EN BOGOTÁ D.C.”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1, 10, 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 .

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Objeto: El presente Acuerdo Constituye el Consejo Distrital y los Consejos Locales de los Motociclistas y conductores, como una instancia de deliberación que fomenta y garantiza el derecho de participación ciudadana del gremio de los motociclistas y conductores en las decisiones, acciones, proyectos, programas y políticas públicas trascendentes en la visión, gestión y administración de la movilidad de la ciudad.

ARTÍCULO 2. Naturaleza Jurídica: El Consejo Distrital y los Consejos Locales de los motociclistas y conductores en Bogotá D.C. se constituirán como una instancia de participación, control social, deliberación y asesoramiento de las políticas territoriales, sectoriales, regionales y poblacionales que afectan la movilidad y el gremio de los motociclistas y conductores en Bogotá D.C.

PARÁGRAFO 1. La Administración Distrital y las Administraciones Locales consultarán al Consejo Distrital y a los Consejos Locales de los motociclistas y conductores en materias que versen sobre la gestión, administración, decisión y política de movilidad, propendiendo por generar concertación y acuerdos con los miembros que conformen los Consejos.

PARÁGRAFO 2. Los consejos de los motociclistas y conductores no tendrán personería jurídica ni patrimonio propio.

ARTÍCULO 3. Conformación de los Consejos Locales de los Motociclistas y Conductores: Cada una de las 20 localidades contará con su respectivo Consejo Local de Motociclistas y Conductores, el cual estará compuesto por un número de representantes principales y suplentes del gremio motociclista y de los conductores por cada una de las localidades. El número de consejeros locales se definirá en la fase de reglamentación e implementación, teniendo en cuenta las circunstancias sociales, demográficas y poblacionales de cada localidad.

A su vez harán parte de los Consejos Locales de los Motociclistas y Conductores los siguientes delegados de la Administración Distrital:

- I. Un delegado por parte de la alcaldía local.
- II. Un delegado por parte de la Junta Administradora Local.
- III. Un delegado por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.
- IV. Un delegado por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno.

- V. Un delegado por parte de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
- VI. Un delegado por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.
- VII. Un delegado por parte de la Oficina de Seguridad Vial de Secretaría Distrital de Movilidad.
- VIII. Un delegado por parte de la Empresa Tercer Milenio Transmilenio S.A.
- IX. Un delegado por parte de la Terminal de Transportes.
- X. Un delegado por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A.
- XI. Un delegado por parte del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

ARTÍCULO 4. Conformación del Consejo Distrital de los Motociclistas y Conductores: El Consejo Distrital de los Motociclistas y Conductores será conformado por 1 miembro de cada Consejo Local, los cuales serán elegidos por la mayoría de los Consejeros Locales de la respectiva localidad.

A su vez harán parte de los Consejos Locales de los Motociclistas y Conductores los siguientes delegados de la Administración Distrital:

- I. Un delegado por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.
- II. Un delegado por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno.
- III. Un delegado por parte de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
- IV. Un delegado por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.
- V. Un delegado por parte de la Oficina de Seguridad Vial de Secretaría Distrital de Movilidad.
- VI. Un delegado por parte de la Empresa Tercer Milenio Transmilenio S.A.
- VII. Un delegado por parte de la Terminal de Transportes.
- VIII. Un delegado por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A.
- IX. Un delegado por parte del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

ARTÍCULO 5. Periodo del Consejo Distrital y locales de los Motociclistas y Conductores. Los consejeros locales y distritales de los Motociclistas y conductores serán elegidos para un periodo de 4 años equiparados con el periodo de la administración distrital. Los consejeros distritales y locales de los Motociclistas y Conductores podrán ser reelegidos.

PARÁGRAFO. En caso de renuncia o de ausencia a las reuniones, el suplente respectivo asumirá las funciones del cargo por el tiempo restante.

ARTÍCULO 6. Lineamientos para la creación y reglamentación del Consejo Distrital de los Motociclistas y Conductores: Son competencias del Consejo Distrital y los Consejos Locales de los motociclistas y conductores en Bogotá D.C.

- I. Fungir como órgano consultor y asesor permanente de la administración local y distrital frente a la gestión, administración, planes, programas, estrategias, acciones y políticas de movilidad que tengan incidencia para el gremio motociclista y de los conductores en Bogotá D.C.
- II. Promover el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en la ciudad.
- III. Fomentar prácticas de conducción seguras, siendo uno de los promotores en seguridad vial de la ciudad.
- IV. Informar la gestión realizada por parte del Consejo Distrital y Local de los Motociclistas y Conductores a la ciudadanía.
- V. Fungir como órgano de control social de la gestión, administración y actuación de la administración distrital en lo que versa a los planes y políticas de movilidad en la ciudad.

- VI. Definir el lugar donde sesionarán de común acuerdo con el Alcalde Mayor de Bogotá y los alcaldes locales.
- VII. Definir su propio reglamento.

ARTÍCULO 9. ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA: La administración distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno, La Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto Distrital de La Participación y Acción Comunal y las alcaldías locales, brindarán apoyo logístico y asesoramiento estratégico a las actividades propias del Consejo Distrital y los Consejos Locales de los motociclistas y conductores en Bogotá D.C. Además, apoyarán y asumirán actividades para desarrollar el proceso de elección de los Consejos Locales de los motociclistas y conductores en Bogotá D.C.

PARÁGRAFO: la administración distrital y las locales garantizarán los recursos logísticos y de infraestructura para el cumplimiento de las funciones del Consejo Distrital y los Consejos Locales de los motociclistas y conductores en Bogotá D.C.

ARTÍCULO 10. REGLAMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN: La administración distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno, La Secretaría Distrital de Movilidad y el Instituto Distrital de La Participación y Acción Comunal en consenso con los líderes de los gremios motociclistas y de los conductores, tendrán un plazo de (12) meses para reglamentar el presente acuerdo desde la entrada en vigencia.

PARÁGRAFO: La administración distrital promoverá la participación incidente de los motociclistas y conductores de la ciudad, con el fin de incentivarlos a ser parte del Consejo Distrital y los Consejos Locales de los motociclistas y conductores en Bogotá D.C.

ARTÍCULO 11. INFORMES: Una vez al año la Secretaría Distrital de Gobierno, La Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto Distrital de La Participación y Acción Comunal y un delegado del Consejo Distrital de los motociclistas y conductores en Bogotá D.C. presentarán un informe integral ante el Concejo de Bogotá D.C. sobre la implementación, reglamentación y gestión del Consejo Distrital y los Consejos Locales de los motociclistas y conductores en Bogotá D.C.

ARTÍCULO 12. VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BIBLIOGRAFIA

Bamonte, L. (2008). El juego y el deporte como una herramienta para la inclusión social y educativa. Jornadas de Cuerpo y Cultura de la UNPL, 01-02.

- Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.-ANDI (2019) La industria automotriz es el 6,2% del PIB industrial.

[https://www.andi.com.co/Home/Noticia/13498-la-industriaautomotriz-es-el-62-del-pi#:~:text=La%20industria%20automotriz%20es%20el%206%2C2%25%20del%20PIB%20industrial&text=Posteriormente%](https://www.andi.com.co/Home/Noticia/13498-la-industriaautomotriz-es-el-62-del-pi#:~:text=La%20industria%20automotriz%20es%20el%206%2C2%25%20del%20PIB%20industrial&text=Posteriormente%20)

- Bogotá Cómo Vamos (2023) Cifras Encuesta de Percepción ciudadana 2023
<https://bogotacomovamos.org/datos/#cifras>
- Bogotá Cómo Vamos (2019) Bogotá Cómo Vamos (2019) “Preocupa crecimiento de parque automotor en Bogotá”
<https://bogotacomovamos.org/preocupa-crecimiento-de-parque-automotor/>
- Corte Constitucional (2015) M.P. Maria Victoria Sáchica Méndez “Sentencia C-150 del 2015”.
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-150-15.htm>
- Corte Constitucional (2014) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub “Sentencia T-232 de 2014”.
<https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2014/T-23214.htm#:~:text=El%20derecho%20a%20elegir%20y,a%20trav%C3%A9s%20de%20este%20mecanismo.>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2018) Departamento de Bogotá ¿Cuántos somos?, p 01.
https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/perfiles/11_infografia.pdf
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2020) "Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal total por área 1985-2020"
<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/conciliacenso/9ProyeccionesMunicipalesedadsexo.pdf>
- Hernando Gómez Buendía (2021) “Fin y comienzo del paro nacional”
<https://razonpublica.com/fin-comienzo-del-paro-nacional/>
- La Direccional (2022) "El vehículo: el motor que mueve a Colombia.", p24-25.
<https://publuu.com/flip-book/15659/78184/page/8>

- [RUNT \(2023\) “RUNT en cifras balance del sector de tránsito y transporte 2023”](https://www.runt.gov.co/sites/default/files/documentos/Balance%20de%20cifras%20del%20sector%202023%20RUNT.pdf)
<https://www.runt.gov.co/sites/default/files/documentos/Balance%20de%20cifras%20del%20sector%202023%20RUNT.pdf>
- [Red De Seguridad Vial \(2023\) “La motocicleta como herramienta de trabajo y su impacto en la seguridad vial.”](https://redempresarial.movilidadbogota.gov.co/sites/default/files/Taller%20La%20motocicleta%20como%20herramienta%20de%20trabajo%20y%20su%20impacto%20en%20la%20seguridad%20vial.pdf)
<https://redempresarial.movilidadbogota.gov.co/sites/default/files/Taller%20La%20motocicleta%20como%20herramienta%20de%20trabajo%20y%20su%20impacto%20en%20la%20seguridad%20vial.pdf>
- [Valora Analytik Paula Cuellar \(2023\) "En Colombia la cantidad de motos ya supera al número de habitantes de Bogotá.](https://www.valoraanalitik.com/en-colombia-son-mas-motos-que-habitantes-de-bogota/)
<https://www.valoraanalitik.com/en-colombia-son-mas-motos-que-habitantes-de-bogota/>

PROYECTO DE ACUERDO NO 158 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE PROTEGE LA VIDA Y SE PREVIENE LA SINIESTRALIDAD DE LOS TRABAJADORES EN VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS”*****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I OBJETO DEL PROYECTO**

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objeto implementar lineamientos para la prevención de la siniestralidad, fomentando mediante una política pública distrital de salud pública que promueva la defensa, protección y garantía de la vida de todos los actores que laboran o generan ingresos con vehículos de dos ruedas.

II SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA.**DE ORDEN INTERNACIONAL.****RESOLUCIÓN A/RES/74/299 del 2020 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS.**

“Mejora de la seguridad vial mundial”, proclamando el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, con el ambicioso objetivo de prevenir al menos el 50% de las muertes por accidentes de tránsito.

DE ORDEN CONSTITUCIONAL.**CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991.**

ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales.

ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;

(...)

ARTÍCULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

(...)

ARTÍCULO 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

DE ORDEN LEGAL.

LEY 105 DE 1993 *“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.”*

(...)

ARTÍCULO 2.- Principios Fundamentales.

(...)

b. De la intervención del Estado: Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.

(...)

e. De la Seguridad: La seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector Transporte.

LEY 769 DE 2002 *“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.*

ARTÍCULO 1:

(...)

Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, educación y descentralización.

ARTÍCULO 2: DEFINICIONES. Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

(...)

Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.

(...)

ARTÍCULO 4:

(...)

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Transporte deberá elaborar un plan nacional de seguridad vial para disminuir la accidentalidad en el país que sirva además como base para los planes departamentales, metropolitanos, distritales y municipales, de control de piratería e ilegalidad.

LEY 1702 DE 2013 “Por la cual se crea la agencia nacional de seguridad vial y se dictan otras disposiciones.”

(...)

ARTÍCULO 5. Definiciones. Para la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Seguridad Vial. Entiéndase por seguridad vial el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de conductores y los reglamentos de conductores, la educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas.

Plan Nacional de Seguridad Vial. Se tratará de un plan, basado en el diagnóstico de la accidentalidad y del funcionamiento de los sistemas de seguridad vial del país. Determinará objetivos, acciones y calendarios, de forma que concluyan en una la acción multisectorial encaminada a reducir de víctimas por siniestros de tránsito. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) será el órgano responsable del proceso de elaboración, planificación, coordinación y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial, que seguirá vigente hasta que se apruebe la ley y se promulgue un nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial.

Campañas de Prevención Vial. Decididos intentos de informar, persuadir o motivar a las personas en procura de cambiar sus creencias y/o conductas para mejorar la seguridad vial en general o en un público grande específico y bien definido, típicamente en un plazo de tiempo determinado por medio de actividades de comunicación organizadas en las que participen canales específicos de medios de comunicación con el apoyo interpersonal y u otras acciones de apoyo como las actividades de las fuerzas policiales, educación, legislación, aumento del compromiso personal, gratificaciones, entre otros.

LEY 2197 DE 2022 “Por medio del cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”

ARTÍCULO 58. Modifíquese el Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, el cual quedara así:

ARTÍCULO 7. CUMPLIMIENTO RÉGIMEN NORMATIVO. Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

LEY 2251 DE 2022 "Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones - ley Julian Esteban"

ARTÍCULO 2. Principios generales. Las Entidades del Estado, de acuerdo con sus competencias, deben garantizar la protección de la vida, la integridad personal y la salud de todos los residentes en el territorio nacional, promoviendo la circulación de las personas y los vehículos, la calidad de las infraestructuras de la red vial, la seguridad vehicular, para el libre movimiento, circulación y convivencia pacífica de todas las personas sobre las vías públicas, bajo los siguientes principios de seguridad vial:

a) Sistema Seguro: Este tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas a las lesiones graves causadas por accidentes de tránsito, y reconoce que el sistema se debería concebir para tolerar el error humano. La piedra angular de este enfoque son las carreteras y las bermas seguras, las velocidades seguras, los vehículos seguros y los usuarios de carreteras seguros, todo lo cual se deberá abordar con miras a poner fin a los accidentes mortales y reducir el número de lesiones graves.

b) Responsabilidad compartida. Serán responsables de la incidencia y de sus efectos resultantes, de acuerdo a su participación en el sistema: los planificadores y responsables de la gestión del sistema de tránsito y transporte y de la infraestructura vial; así como los usuarios de las vías; y la iniciativa privada relacionada con la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor y del diseño, la fabricación, importación, ensamblaje y comercialización de vehículos.

c) Seguridad Vehicular. Las reglas y normas técnicas en el diseño, la concepción, la fabricación, el ensamblaje, la importación, la comercialización y el mantenimiento de vehículos automotores, deben garantizar: i) la protección a la vida, ii) la integridad personal y iii) la salud, tanto a los usuarios de los vehículos, como a los usuarios vulnerables fuera de él (peatones, ciclistas y motociclistas).

d) Seguridad en las vías. Los cuerpos operativos de control de tránsito, del ámbito nacional, deben intervenir y ejercer el control de las normas de tránsito a los usuarios de las vías en todos los municipios del país; para garantizar un alto nivel de cumplimiento y luchar de forma determinada contra la transgresión generalizada de la misma.

DE ORDEN REGLAMENTARIO.**DECRETO 1430 DE 2022 “Por medio del cual se aprueba el “Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031”**

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto aprobar el Plan Nacional de Seguridad Vial para la vigencia 2022-2031, contenido en el Anexo que hace parte integral del mismo.

(...)

ARTÍCULO 4. Articulación con los Planes Locales de Seguridad Vial. Los Planes Locales de Seguridad Vial que diseñen e implementen las entidades territoriales deberán armonizarse con lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, aprobado en el presente Decreto. Dicha armonización deberá ser llevada a cabo dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición del presente Decreto.

PARÁGRAFO. En todo caso, cada una de las entidades territoriales deberán atender las acciones particulares definidas en el Anexo durante el diseño e implementación de sus Planes Locales de Seguridad Vial, a partir de las características de los niveles de siniestralidad y condiciones particulares de su territorio. Lo anterior, sin perjuicio de desarrollar las demás acciones generales definidas en el citado Anexo.

DE ORDEN DISTRITAL.**DECRETO DISTRITAL 185 DE 2012 “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial”.**

ARTÍCULO 1.- Creación. Créase la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial con carácter permanente.

ARTÍCULO 2.- Naturaleza. La Comisión Intersectorial de Seguridad Vial es una instancia que hace parte del Sistema de Coordinación de la Administración Distrital, encargada de articular y coordinar a las entidades y organismos responsables de la implementación y cumplimiento de las metas y/o programas contemplados en el Plan Distrital de Seguridad Vial para Bogotá, Distrito Capital y efectuar el seguimiento a la ejecución del mismo.

DECRETO DISTRITAL 813 DE 2017 “Por el cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial y de Motociclista 2017-2026”

ARTÍCULO 1. Adopción. Adóptese el Plan Distrital de Seguridad Vial y del Motociclista para Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia 2017 — 2026.

(...)

ARTÍCULO 4. *Objetivo general del Plan.* Reducir la accidentalidad vial en el Distrito Capital, focalizando las acciones hacia la disminución de la mortalidad y la morbilidad, especialmente de los usuarios vulnerables, así como promover la movilidad segura como prioridad en el sistema de movilidad.

PARÁGRAFO. Reducir en un 35% el número de víctimas (lesionados y fallecidos) por siniestralidad vial en el período 2017-2026.

ARTÍCULO 5. *Objetivos específicos.* Son objetivos específicos del Plan:

1. Posicionar la seguridad vial en el Distrito, incluyendo la política de Visión Cero para la movilidad segura en los procesos de toma de decisiones de las entidades encargadas de la seguridad vial y de la atención a víctimas por accidente de tránsito (siniestro vial).
2. Desarrollar procesos tendientes a fortalecer la educación y pedagogía vial, la promoción y la información a los diferentes usuarios del sistema de movilidad en el tema de la seguridad vial, encaminados a la adopción de comportamientos de autoregulación, solidaridad y corresponsabilidad que favorezcan la movilidad segura en la ciudad.
3. Realizar acciones que conlleven a la adecuación y construcción de infraestructura vial y de transporte para la movilidad segura de los ciudadanos.
4. Desarrollar acciones encaminadas a la protección de usuarios vulnerables y de personas con movilidad reducida.
5. Fortalecer los mecanismos y procesos de promoción, planeación, administración, gestión, divulgación y seguimiento de la información sobre seguridad vial en la Ciudad.
6. Mejorar la capacidad técnica y de gestión, en particular establecer mecanismos de coordinación para entidades de carácter público y privado encargadas del seguimiento y prevención de la accidentalidad.
7. Fortalecer el control de la operación del tránsito y el transporte, especialmente mediante el uso de tecnología aplicada al monitoreo y control sistemático y continuo de la operación del sistema de movilidad en la Ciudad.
8. Promover los mecanismos de financiamiento y gestión para la canalización de recursos para el sostenimiento del Plan Distrital de Seguridad Vial.

(...)

ARTÍCULO 9 Programas y acciones del Eje 1: Institucionalidad y gestión para la Seguridad Vial.

LA SEGURIDAD VIAL COMO PRIORIDAD EN LA AGENDA PÚBLICA: Promover el trabajo conjunto con las entidades a nivel local, distrital y nacional con el fin de fortalecer y dar sostenibilidad a las medidas, con la generación de sinergias administrativas para generar mayor impacto en las acciones de seguridad vial que redundan en un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

ARTÍCULO 10. *Programas y acciones del Eje 2:* Actores de la vía, comunicación y cultura vial. Los programas y acciones de éste eje son:

1. PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL MOTOCICLISTA - PSVM: Conjunto de acciones a desarrollar, como resultado de un trabajo participativo entre los motociclistas y demás actores que contribuyen a la seguridad vial de este usuario.

- Es acción particular para este programa desarrollar el Plan de Seguridad Vial del Motociclista dentro de la estrategia de seguridad vial del Distrito y disponer los recursos técnicos y financieros para su implementación.

2. USUARIOS INFORMADOS: Permitir que la ciudadanía conozca las diferentes medidas e intervenciones institucionales en seguridad vial que tienen como finalidad la protección de la vida.

Son acciones concretas de este programa:

- Comunicar de manera continua los avances en el Plan Distrital de Seguridad Vial por cada una de las instituciones involucradas y evaluar su resultado.

- Dar a conocer datos de siniestralidad vial para generar información, impacto y compromiso en la ciudadanía.

3. CAMBIO COMPORTAMENTAL: Generar campañas masivas y formar a ciudadanos en materia de seguridad vial.

-Son acciones concretas de este programa:

- Diseñar, implementar y evaluar campañas enfocadas a factores de riesgo.

- Formar en seguridad vial, a través de acciones pedagógicas, a los diferentes usuarios de la vía, empresas de transporte e instituciones educativas.

- Fortalecer el programa de Promotores Escolares en Seguridad Vial PESVI, en instituciones educativas públicas y privadas.

- Diseñar estrategias lúdico-pedagógicas de seguridad vial en diferentes escenarios y evaluar su impacto.

- Hacer seguimiento a los asistentes al curso de infractores e identificar reincidencias.

- Diseñar e implementar un curso especial para infractores reincidentes.

4. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN A CONDUCTORES EN SEGURIDAD VIAL Y EN ECO-CONDUCCIÓN: Formar a conductores con el fin de promover buenas prácticas orientadas a la seguridad vial y a la disminución de las emisiones contaminantes.

Son acciones concretas de este programa:

- Generar escenarios de capacitación dirigidos a todos los conductores de empresas de transporte de carga, transporte público individual, transporte público del SITP, transporte especial, escoltas, empresas de distribución, y evaluar su efectividad.

- Difundir buenas prácticas en eco-conducción y seguridad vial.

(...)

ARTÍCULO 16. Objetivos Específicos del Plan Distrital de Seguridad Vial del Motociclista.

a) Reducir el número de víctimas involucradas en accidentes de tránsito (siniestros viales) con participación de motocicletas.

b) Dar a conocer a la ciudadanía la situación actual de la siniestralidad vial con participación de motociclistas para hacer visible la problemática.

c) Aportar a la meta del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos (PDD), en su programa Mejor Movilidad para Todos, de disminuir un 15% las fatalidades a causa de accidentes de tránsito (siniestros viales).

d) Aportar a la meta del Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026, de disminuir un 35% las víctimas graves de accidentes de tránsito (siniestros viales).

e) Desarrollar acciones integrales desde los ejes propuestos: i) Institucionalidad y gestión de la seguridad vial, ii) Actores de la vía, comunicación y cultura vial, iii) Víctimas iv) Infraestructura segura, y iv) Controles para la seguridad vial, tecnología y vehículos.

f) Generar estrategias conjuntas con las instituciones gubernamentales y del sector privado, desde las diferentes líneas de acción, para disminuir la siniestralidad con participación de motociclistas, garantizando la inclusión de los actores involucrados.

g) Promover la participación de las asociaciones y clubes de motociclistas en la implementación de las diferentes acciones definidas dentro del plan.

h) Generar un mecanismo que permita evaluar las acciones fijadas dentro de cada uno de los ejes del plan.

DECRETO DISTRITAL 494 DE 2023 “*Por medio del cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial 2023-2032 y se dictan otras disposiciones*”.

ARTÍCULO 1.- Adopción. Adóptese el Plan Distrital de Seguridad Vial para Bogotá-PDSV, Distrito Capital, para la vigencia 2023 – 2032.

(...)

ARTÍCULO 3.- Régimen aplicable. El Plan Distrital de Seguridad Vial del Distrito Capital se estructura con base en las disposiciones del Decreto Nacional 1430 de 2022 Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 - 2031, del Plan Maestro de Movilidad o el instrumento de planeación de movilidad que haga sus veces y bajo las condiciones previstas en la regulación del tránsito y transporte, sus normas reglamentarias y, modificatorias, así como lo dispuesto en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO 4.- Objetivo general del Plan. Consolidar un Sistema de Movilidad seguro, protector de la vida e integridad de todos los actores viales mediante una estrategia de seguridad vial integral, basada en la protección de los más vulnerables, que permita avanzar hacia una Bogotá cuidadora, sostenible y consciente.

ARTÍCULO 5.- Meta estratégica. La meta del PDSV 2023-2032 es reducir en un 50% el número de víctimas fallecidas (indicador a 30 días) en siniestros viales para el año 2032, tomando como base la cifra definitiva del año 2022.

Dentro de los 3 años siguientes a la adopción del presente Decreto, la Secretaría Distrital de Movilidad en articulación con las entidades que sean pertinentes, establecerá la metodología para identificar la línea base de lesionados graves en siniestros viales y proyectar la meta de reducción correspondiente.

(...)

ARTÍCULO 11.- Programas y acciones del Eje 4: Cultura de Movilidad Segura. Adopción de medidas de tipo pedagógico y comunicativo cuyo propósito es formar e informar a la ciudadanía en y para la seguridad vial desde las perspectivas de la vulnerabilidad y el riesgo, base sobre la cual se busca hacer explícitas las relaciones entre velocidad, vehículos, infraestructura, actores viales y sus efectos en la seguridad vial en materia económica, productiva, social, de salud y el bienestar público; lo anterior, a fin de establecer bases que permitan comprender y fomentar el disfrute sostenible de los bienes colectivos y junto con ello la participación efectiva de la ciudadanía.

ARTÍCULO 12.- Programas y acciones del Eje 5: Cumplimiento de normas. Promover en la ciudad de Bogotá vías más seguras para todas las personas usuarias del Sistema de Movilidad, mediante el fortalecimiento del control sobre comportamientos de riesgo, como la conducción en embriaguez alcohólica y no alcohólica, cruce de semáforo en rojo, entre otros.

III. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

JUSTIFICACIÓN PARA DOMICILIARIOS

El presente Proyecto de Acuerdo busca implementar lineamientos para la restricción de las promesas de tiempos cortos de entrega en domicilios y envíos, a fin de mitigar la accidentalidad y siniestralidad vial de personas que trabajan con vehículos de dos ruedas. Es por esto que, en función de tal interés se presentará la importancia de tomar medidas preventivas de la accidentalidad vial como problema de salud pública; asunto esencial para este Proyecto de Acuerdo, pues fundamenta su sustentación y justifica la pertinencia del mismo, así:

Accidentalidad y Siniestralidad Vial

Es pertinente iniciar mencionando que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los accidentes viales se constituyen un problema de salud pública, en la medida en que anualmente mueren 1,19 millones de personas (entre peatones, motociclistas, ciclistas, entre otros) por siniestros viales, donde se destaca que estos siguen siendo una de las principales causas de muerte de niños y jóvenes de 5 a 29 años. Adicionalmente, la OMS resalta que, el 53% de las víctimas mortales por accidentes de tránsito son usuarios vulnerables, donde: el 23% son peatones, el 21% son motociclistas, 6% ciclistas y en el caso de estos dos últimos, la accidentalidad aumentó en un 20% en el último año (OMS 2023).

Lo anteriormente expuesto, pone de manifiesto que la problemática de salud pública de siniestralidad vial se presenta con mayor frecuencia en actores viales que se movilizan en dos ruedas, es decir, motociclistas y ciclistas: actores que son objeto del presente Proyecto de Acuerdo, teniendo en cuenta, que las personas que se emplean en el servicio de entrega de domicilios, mercancía y demás, utilizan como medio de transporte, principalmente, los vehículos de dos ruedas.

La siniestralidad suele ser causada por: la imprudencia de los conductores, el no respeto a la señalización, las fallas mecánicas y las deficiencias viales; no obstante, la CEPAL destaca que, especialmente en los casos de Colombia, Chile y Perú, la velocidad imprudente y el aumento de la velocidad constituyen dos de las mayores causas de la accidentalidad vial grave y fatal (CEPAL, 2012). Estos siniestros viales representan un costo personal y social que asumen las víctimas y sus parientes, generando impactos económicos realmente significativos por lesiones, atenciones médicas, discapacidades, rehabilitaciones, entre otros tratamientos, que finalmente se constituye en una carga que cae sobre el sector salud (AMM, 2022).

Esta narrativa sobre la siniestralidad como un problema de salud pública, también la ha sostenido la Organización de Naciones Unidas (ONU) en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) donde presenta el número tercero “Salud y bienestar”. Este objetivo propende por garantizar una vida saludable para todas las personas, pues argumenta que las personas sanas son la base de unas economías sanas. Para lograr esto, el objetivo insta a los países a tomar medidas inmediatas y decisivas para contrarrestar los desafíos de la salud (ONU, 2022).

Es por esto que, en concordancia con el asunto del presente Proyecto de Acuerdo, resulta determinante este objetivo pues, como se ha venido mencionando anteriormente, la accidentalidad vial constituye un problema de salud pública, asunto que se ve enfatizado mediante las metas de dicho objetivo, específicamente en la meta 3.6 que sustenta: “*para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones*”

causadas por accidentes de tráfico en el mundo” (ONU, 2022), reforzando de nuevo la problemática que la siniestralidad vial representa para la salud pública.

Por su parte, en esta misma línea argumentativa el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 “*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI*” en su logro 26 expone: “*Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad y costo con enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje estructurador la Red de Metro Regional y la de ciclorrutas*” donde explica que la siniestralidad vial no solo genera una afectación económica y social, sino que en Bogotá es un problema principal en la salud pública, pues suele cobrar entre 500 y 600 vidas anuales, representando además un costo anual equivalente del 2,9% del PIB de la ciudad, en promedio un billón de pesos (Alcaldía de Bogotá, 2020).

En razón a ello la administración distrital mediante el decreto 813 de 2017 sobre el Plan Distrital de Seguridad Vial y de motociclistas 2017 - 2026 en el capítulo 2 artículo 9, estableció que la seguridad vial debe ser una prioridad en la agenda pública; así mismo, en el artículo 16 expone la prioridad para la ciudad en materia de reducción de víctimas involucradas en accidentes de tránsito, especialmente aquellos donde se vea la participación de motociclistas (Alcaldía de Bogotá, 2017); esto, constituyéndose como un fundamento claro y esencial para la pertinencia del presente Proyecto de Acuerdo.

Problemática en Bogotá y Necesidad del Proyecto de Acuerdo

Ahora bien, para el interés de este Proyecto de Acuerdo, es menester mencionar que en Bogotá y en la sabana circularon un promedio de 1.518.603 motos para 2022, igualmente el pasado 27 de febrero de 2024, el Alcalde mayor de Bogotá aseguró que se encuentran matriculadas alrededor de 600 mil motocicletas en Bogotá de los cuales el 65% son utilizadas como medio de trabajo o generación de ingresos.(INFOBAE, 2023; Nuevo Siglo, 2022)

En cuanto a las bicicletas, según la Encuesta de Movilidad de 2022 se realizan 880.367 viajes diarios en bicicleta en Bogotá, adicionalmente este medio de transporte constituye un 68% como medio de trabajo y generación de ingresos extras. (PORTAFOLIO, 2018)

En estos dos tipos de actores viales: motociclistas y ciclistas, se han registrado con altos niveles de siniestralidad y accidentalidad en la ciudad. La siniestralidad en Bogotá, según el Observatorio de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad, se divide en dos variables: lesionados y fallecidos, que después se subdividen en cinco grandes grupos de actores viales: pasajero, conductor, motociclista, motociclista y ciclista. Teniendo en cuenta esto, las cifras de siniestralidad vial para 2022, 2023 y lo que va del 2024, han sido las siguientes:

Tabla 1. Siniestralidad vial de Bogotá 2022 - 2024

SINIESTRO	ACTOR VIAL	PERSONAS	PORCENTAJE
2022			

LESIONADOS	Pasajero	2.347	33%
	Motociclista	2.248	32%
	Peatón	1.374	20%
	Ciclista	673	10%
	Conductor	386	5%
TOTAL	7.028		
FALLECIDOS	Motociclista	235	44%
	Peatón	197	37%
	Ciclista	81	15%
	Pasajero	13	2%
	Conductor	10	2%
TOTAL	536		
2023			
LESIONADOS	Motociclista	2.736	36%
	Pasajero	2.341	31%
	Peatón	1.432	19%
	Ciclista	633	8%
	Conductor	444	6%

TOTAL	7.586		
FALLECIDOS	Motociclista	242	45%
	Peatón	209	38%
	Ciclista	65	12%
	Pasajero	16	3%
	Conductor	11	2%
TOTAL	543		
2024 (9/05/2024)			
LESIONADOS	Motociclista	1.007	40%
	Pasajero	714	28%
	Peatón	504	20%
	Ciclista	218	9%
	Conductor	106	4%
TOTAL	2549		
FALLECIDOS	Motociclista	97	48%
	Peatón	72	36%
	Ciclista	22	11%
	Conductor	8	4%

	Pasajero	3	1%
TOTAL	202		

Fuente: elaboración propia con base en Observatorio de Movilidad de Bogotá.

Lo anterior se puede resumir en que, para el año 2022 tuvimos un total de 7.564 de siniestros viales, es decir, un promedio de 20 diarios. En el 2023 donde hubo un total de 8.129 siniestros viales, un promedio de 22 diarios, evidenciando un aumento del 7,47%; sin embargo, hay que destacar que, aunque el 2024 lleve solo cuatro meses y 9 días de transcurrido, en la cifra de fallecidos lleva un 37.6% respecto del total de fallecidos de todo el 2022 y un 37.2% del total de fallecidos que se presentaron en todo el año 2023.

En el caso de Bogotá encontramos que, el promedio de velocidad es de 17,2 Km/h (Secretaría Distrital de Movilidad, 2024). Ahora bien, si dicho promedio de velocidad, se ve atravesado por el factor distancia y tiempo, hallamos que, un repartidor que debe entregar un paquete en un lugar entre 1 a 3 kilómetros de distancia, debe tomar 10 minutos a una velocidad de 18 km/h, sin embargo, si se promete un tiempo promedio de entrega máximo de 12 minutos en dicha distancia, lleva a que el repartidor deba aumentar un 17% la velocidad para cumplir con los tiempos de entrega. Este aumento de velocidad resultaría constituyéndose un grave riesgo de siniestralidad, pues no brinda un margen de tolerancia aceptable en caso de presentarse inconvenientes para el cumplimiento del tiempo pactado, teniendo en cuenta factores externos que se pueden presentar durante el recorrido.

Como expone la Asociación Médica Mundial en su declaración sobre los accidentes de tránsito, un aumento promedio de la velocidad de 1km/h se encuentra asociada con un 3% más de riesgo de accidentes con heridos y un 5% más de riesgo de un accidente grave o fatal (AMM, 2022). De acuerdo a lo anterior y basado en los datos obtenidos, la velocidad tendría que subir a 21,6 Km/h, dando así un incremento en la velocidad 4.4 Km/h aumentando el riesgo de accidentes a 13.2% y un aumento a 22% de probabilidad de riesgo de accidente grave o fatal.

De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario un promedio de 63,2% rappitenderos han sufrido un accidente laboral; del total de encuestados, más de un 80% de ellos expresan haber presentado caídas y más de un 25% han experimentado choques de tránsito durante su trabajo, así más del 50% de ellos manifiestan que los accidentes de tránsito se constituyen en un riesgo común de exposición (Jaramillo Jassir, 2020). Adicionalmente, en la medida pasan más tiempo en la labor, los repartidores se ven expuestos a experimentar accidentes de tránsito como variable de vulnerabilidad y riesgos laborales (Maldonado Castaneda, O. J., & Sanchez Vargas, D. Y., 2020).

Con base en lo anterior y de conformidad con el interés de este Proyecto de Acuerdo y la argumentación desarrollada hasta este punto, se puede sostener que, el riesgo de accidentalidad en los repartidores de Bogotá puede aumentar, debido a la promesa de cortos tiempos de entrega, en la medida en que esto requiera que los repartidores se vean en la necesidad de incrementar la velocidad para cumplir con las exigencias de los clientes y las expectativas de las empresas.

Gran parte de los accidentes de tránsito se pueden evitar en la medida en que se mejoren las medidas preventivas, pues finalmente se termina constituyendo en una responsabilidad mútua de distintos grupos, organizaciones, actores viales, entre otros. De acuerdo con esto se podría afirmar que, la tarea por disminuir la siniestralidad vial en los repartidores, no solo reside en la prudencia y adecuado comportamiento en la vía que estos deben llevar, sino que también constituye una corresponsabilidad con las empresas que los emplean y pactan tiempos de entrega reducidos a sus clientes, sin que estos conozcan los riesgos que constituye para la vida de los repartidores el aumento de la velocidad para el cumplimiento en el tiempo de entrega.

Para contrarrestar la siniestralidad vial, la administración distrital mediante el Decreto 494 de 2023 en su artículo 5 presentó la meta estratégica del Plan Distrital de Seguridad Vial 2023 - 2032 la cual busca reducir en un 50% el número de víctimas fallecidas en siniestros viales para 2032. Este esfuerzo además reconoce que la reducción de esta cifra depende en gran medida de unas condiciones de base que se tornan en objetivos del mismo decreto, en el artículo 6, las cuales son: el fortalecimiento de la seguridad de la infraestructura vial, la promoción de un comportamiento de cuidado y la corresponsabilidad que tienen los actores viales en la mitigación de los efectos de la siniestralidad (Alcaldía de Bogotá, 2023).

Por lo anterior, es necesario que Bogotá cuente con un acuerdo que brinde lineamientos para que las promesas de tiempos menores de entrega no se puedan pactar, por una expectativa meramente comercial, que finalmente se termine constituyendo en un riesgo para la vida de los repartidores, así como una causa de aumento de siniestralidad vial por choques o incidentes con otros actores en la vía. Es decir, que el presente Proyecto de Acuerdo procura la generación de una alternativa de prevención de accidentalidad en Bogotá y de protección de la vida de los repartidores que se movilizan en vehículos de dos ruedas.

IV. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

En cuanto a la competencia que tiene el Concejo de Bogotá para aprobar esta iniciativa, esta se ampara en el Decreto Ley 1421 de 1993, que establece al Concejo de Bogotá como la suprema autoridad del Distrito Capital y habilitado para dictar este tipo de normas:

Decreto Ley 1421 de 1993

ARTICULO 3o. OBJETO. *El presente estatuto político, administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio; y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.*

Las disposiciones del presente estatuto prevalecen sobre las normas legales de carácter general vigentes para las demás entidades territoriales.

Artículo 12: *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

(...)

19. *Dictar normas de tránsito y transporte.*

V. IMPACTO FISCAL

Como lo establece el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es obligatorio esclarecer el impacto fiscal que tienen las normas sobre las finanzas públicas, lo que significa medir la carga fiscal que estas pueden tener tanto en el presupuesto anual y en el Marco Fiscal de mediano Plazo que deben observar las diferentes entidades del Estado. Ahora bien, esto no significa que los instrumentos normativos que pueda aprobar el Concejo de Bogotá estén limitados por este hecho, pues como lo aclara la Sentencia C-911 de 2007, el impacto fiscal no se puede convertir en una limitación absoluta para que las corporaciones públicas cumplan con sus funciones legislativas o de orden normativo. En este sentido, la sentencia establece:

En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

(...) el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.

Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto del proyecto y cómo este se alcanzará, se considera que no se genera impacto fiscal, en la medida en que se enmarca en los Decretos 813 de 2017 Plan Distrital de Seguridad Vial y de Motociclista 2017 - 2026 y el Decreto 494 de 2023 que adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial 2023 - 2032 y los recursos con los que cuentan las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito son suficientes para su puesta en marcha.

VI. CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto y de conformidad con el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 2019, nos permitimos presentar a su consideración el presente proyecto de acuerdo, para su trámite y aprobación.

Respetuosamente,

EDISON JULIÁN FORERO CASTELBLANCO
Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 158 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE PROTEGE LA VIDA Y SE PREVIENE LA SINIESTRALIDAD DE LOS TRABAJADORES EN VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS”*****EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 y 19 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1 OBJETO. Implementar lineamientos para la seguridad vial y la prevención de la siniestralidad, fomentando mediante una política pública distrital de salud pública la promoción de la defensa, protección y garantía de la vida de todos los actores que laboran, colaboran, operan o se asocian mediante plataformas digitales para realizar actividades de delivery, mensajería, domicilio y en general la entrega y distribución de productos, artículos y mercancías mediante el uso de un vehículo en el Distrito Capital.

ARTÍCULO 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN. Los lineamientos y los mandatos aquí contenidos deberán aplicarse para todas las personas jurídicas y naturales que realicen actividades de economía colaborativa de delivery, mensajería, domicilios y en general toda actividad de distribución o entrega de productos, artículos o mercancías mediante plataformas digitales dentro de la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá

ARTÍCULO 3 RESTRICCIÓN DE PROMOCIONES QUE AMENAZAN LA SEGURIDAD VIAL. Se restringe la promoción y estímulos de tiempos cortos o mínimos de delivery, mensajería, domicilios y entrega de productos, mercancías, alimentos, entre otros en el Distrito Capital.

ARTÍCULO 4 CONSERVATORIO O MESAS DE TRABAJO . La Secretaría Distrital de Movilidad y la Comisión Intersectorial De Seguridad Vial, en conjunto con la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, generarán espacios o mesas de trabajo entre las sociedades, empresarios y corporaciones de plataformas digitales de delivery, mensajería, domicilios y en general toda actividad que implique la distribución y entrega de un producto. Con el objetivo de establecer tiempos de entrega razonables por cada tipo de pedido y zona de cobertura, teniendo en cuenta las condiciones de tráfico y distancia a recorrer.

Dichos espacios se deberán realizar 2 veces al año y estarán abiertos a todos los representantes de las empresas, sociedades, corporaciones, gremios, sindicatos, colaboradores, trabajadores, socios, asociaciones y sectores de las plataformas digitales de delivery, mensajería, domicilios y en general toda actividad que implique la distribución y entrega de un producto. Así como las veedurías ciudadanas, observatorios de universidades y expertos en movilidad.

Parágrafo 1: Dichos espacios o mesas de trabajo tendrán como finalidad la creación de una hoja de ruta para la Política Pública Distrital de la Seguridad vial y Prevención de Siniestralidad de los trabajadores, socios y colaboradores que realizan actividades económicas de delivery, mensajería, domicilios y en general toda actividad que implique la distribución y entrega de un producto.

ARTÍCULO 5 PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN DE SINIESTRALIDAD VIAL EN PLATAFORMAS DE DELIVERY.

La Secretaria Distrital de Movilidad en conjunto con las Corporaciones, Asociaciones y Empresas de plataformas digitales. Desarrollarán capacitaciones y programas de formación en seguridad vial y prevención de siniestralidad, estos programas deberán contener por lo menos los siguientes criterios:

- a) Capacitación en normas de tránsito.
- b) Capacitación y formación en manejo de emociones, estrés y hostigamiento o urgencia en la entrega de pedidos, productos, artículos o mercancías.
- c) Formación en la conducción preventiva y defensiva, desestimulando las conductas agresivas y apresuradas de entregas de pedidos, productos, artículos o mercancías.
- d) Capacitación y formación en el manejo de riesgos en la vía.
- e) Capacitación y concientización de empresarios, corporaciones y sociedades de plataformas digitales en la disminución de exposición de riesgos viales de sus colaboradores, repartidores independientes y socios en el cumplimiento de sus funciones.

PARÁGRAFO 1: Las capacitaciones y programas de formación y seguridad vial dictados por la Secretaria Distrital de Movilidad serán dirigidas tanto a los trabajadores, colaboradores, repartidores independientes y socios como a las empresas, asociaciones y corporaciones de plataformas digitales que realizan mancomunadamente las actividades de economía colaborativa.

ARTÍCULO 6. INCENTIVOS. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá, otorgará beneficios e incentivos fiscales a las personas jurídicas, corporaciones, sociedades y empresas de Plataformas Digitales que cumplan y demuestren compromiso con el presente acuerdo.

ARTÍCULO 7 IMPLEMENTACIÓN. La administración distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, en conjunto con la Secretaria Distrital de Salud y la Secretaria Distrital de Desarrollo económico, tendrá un año de la fecha de publicación para empezar a implementar y gestionar el presente acuerdo.

ARTÍCULO 8 INFORME ANUAL. La administración distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la Secretaria Distrital de Salud y la Secretaria Distrital de Desarrollo económico presentará un informe anual al concejo de Bogotá sobre el impacto del presente acuerdo y la hoja de ruta de la Política Pública Distrital de la Seguridad vial y Prevención de Siniestralidad,

ARTÍCULO 9. VIGENCIA. El presente acuerdo empieza a regir desde su fecha de publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BIBLIOGRAFÍA

Alcaldía de Bogotá (2017). Decreto 813 de 2017 “Por el cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial y de Motociclista 2017 - 2026”.

Alcaldía de Bogotá (2020). Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, P.P. 442 - 444, 450.

Alcaldía de Bogotá (2023). Decreto 494 de 2023 “Por medio del cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial 2023 - 2032 y se dictan otras disposiciones.

Asociación Médica Mundial - AMM (2022). Declaración de la AMM sobre los accidentes de tránsito. Obtenido de: <https://www.wma.net/es/polices-post/declaracion-de-la-amm-sobre-los-accidentes-de-transito/>

CEPAL (2012). Seguridad vial y salud pública: costos de atención y rehabilitación de heridos en Chile, Colombia y Perú. *Facilitación del transporte y el comercio en América Latina y el Caribe* (311 ed., Núm 7). Obtenido de: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/4b1086f1-6068-418c-acdf-b7aed995e2d2/content>

INFOBAE(2023) El parque automotor de Bogotá y la Sabana cambiará: la cantidad de motos sigue aumentando. Obtenido de <https://www.infobae.com/colombia/2023/11/19/el-parque-automotor-de-bogota-y-la-sabana-cambiara-la-cantidad-de-motos-sigue-aumentando/>.

Jaramillo Jassir, Iván (2020). Riders: entre el desvalor del trabajo y la superación del confinamiento (Trabajo y justicia social). Bogotá: fes. Obtenido de: https://pure.urosario.edu.co/ws/portalfiles/portal/38678078/Sanchez_Maldonado2020_Plataformas.pdf

Maldonado Castaneda, O. J., & Sanchez Vargas, D. Y. (2020). Obstáculos, resistencias y repertorios de movilización social de repartidores digitales en Colombia. En *Precarización laboral en plataformas digitales: Una lectura desde América Latina* (1 ed., Vol. 1, pp. 101-104). Friedrich-Ebert-Stiftung.

Nuevo Siglo (2022), En la ciudad circulan más de 1,2 millones de motos <https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/en-la-ciudad-circulan-mas-de-12-millones-de-motos>.

Organización de Naciones Unidas - ONU (2022). Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. Obtenido de: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>.

Organización Mundial de la Salud - OMS (2023). Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial. Obtenido de: <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/global-status-report-on-road-safety-2023>

Portafolio (2018) El 68% de los viajes que se hacen en 'bici' en Bogotá son por trabajo. <https://www.portafolio.co/economia/el-68-de-los-viajes-que-se-hacen-en-bici-en-bogota-son-por-trabajo-518622>

Secretaría Distrital de Movilidad (2024). Respuesta 202421001001661 al derecho de petición 202461200264302.

PROYECTO DE ACUERDO NO 159 DE 2025

PRIMER DEBATE

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS QUE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN QUE REALIZA ACTIVIDADES SEXUALES PAGAS DE ÉLITE EN BOGOTÁ EN LA MODALIDAD DE WEBCAM, PREPAGO, ACOMPAÑANTES, APLICACIONES, ENTRE OTRAS"

"Las ASP son una actividad económica compleja, que involucra la interacción de múltiples factores, identidades, actores y por ende, comprenden un amplio número de problemáticas derivadas de la heterogeneidad del tema y de las intersecciones que lo cruzan. Esto conlleva a que, en desarrollo de las ASP, se presenten de manera constante situaciones de vulneración de derechos de las personas que las realizan, lo que se refleja principalmente en escenarios de desigualdad, violencias, discriminación, barreras y dificultades para acceder a bienes y servicios. El abordaje de las ASP como se ha explicado anteriormente, ha implicado en el trasegar de la historia, el desarrollo por un lado, de acciones encaminadas a controles sanitarios, territoriales y administrativos (medidas higiénico sanitarias, de ordenamiento territorial y policivas); y por otro, de acciones dirigidas a atender la dimensión social y personal de quienes se dedican a estas actividades; es decir, reconocer que quienes ejercen libremente las ASP, suelen en muchas ocasiones estar expuestos a condiciones de vulneración que limitan el goce efectivo de sus derechos y atentan contra su calidad de vida."

Documentos CONPES DC #11 de 2019

"Un balance preliminar indica que las fuerzas que se mueven y que emergen de este negocio sexual virtual resultan contrarias y desproporcionadas en relación con los seres humanos involucrados, ya que cada vez hay más de aquellos inmersos laboralmente, mientras que sus condiciones de seguridad y de salud son casi ignoradas y olvidadas, demostrándose un preocupante desconocimiento sobre esta problemática tanto en Colombia, como en Latinoamérica, y en los diversos países del mundo."

"Trabajadoras 'Sexcam' en Colombia: una Impresión Diagnóstica sobre la Seguridad y Salud" Carlos Fajardo Guevara y Carlos Mesa Lorza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El origen de la webcam se remite a comienzos de los años 90 en cabeza de los ingenieros Quentin Stafford -Fraser y Paul Jardetzky, investigadores de la Universidad de Cambridge. Ambos personajes instalaron una cámara para vigilar una cafetera cercana a la sala de computo en la que trabajaban y luego la conectaron a un servidor el cual comenzó a transmitir imágenes intermitentes cada cierto lapso de tiempo de la cafetera. Tres años después, en 1993, el invento evolucionó y comenzó a transmitir imágenes de la cafetera por la red mundial (internet). En consecuencia, millones de personas en todo el mundo se conectaron por muchos años para ver la imagen de la icónica cafetera de la sala de cómputo de Cambridge. Lo que comenzó como una práctica primitiva con poca tecnología evolucionó con el tiempo hasta convertirse en una práctica muy popular con múltiples usos, entre ellos el del modelaje a través de la webcam.

Aunque no se tiene una fecha exacta sobre el inicio del modelaje webcam se cree que su práctica data de la última década y su auge o mayor exposición comenzó justo con el año de la pandemia del Covid-19 donde este modelo de trabajo sexual digital comenzó a crecer exponencialmente así como las y los modelos.

El modelaje webcam está catalogado una actividad en la que una persona (modelo) transmite en vivo durante promedios de 6 a 8 horas, conectado a un sitio web privado o público. Al otro lado de la transmisión está el cliente quien visita el sitio web y paga, puede ser a través de token virtual que se adquiere previamente, con el que tiene derecho a unirse a un chat privado con la modelo en la que se desarrolla una actividad sexual paga de manera de virtual.

La evolución del modelaje webcam, que es directamente proporcional a la evolución de las nuevas tecnologías, ha permitido desarrollar algunas modalidades como: modelo independiente siempre y cuando garantice una plataforma de transmisión idónea – modelo satélite que debe estar vinculada a un estudio webcam, pero puede realizar trabajo en casa – modelo de base vinculada a estudio webcam trabajando desde el estudio con los elementos proporcionados por el estudio.

En la actualidad la industria del modelaje webcam continúa expandiéndose y como modelo de negocio se calcula que genera al año ingresos por más de 600 millones de dólares lo que le representa al país, solo en impuestos unos 80.000 millones de pesos al año con una demanda de clientes que va en ascenso y cuya expansión y florecimiento va de la mano de la tecnología. Colombia esta ranqueada como el cuarto país en el mundo que más modelos webcam aporta a la industria de las ASP de élite

Según la Federación Colombiana de comercio electrónico para adultos a través del sistema webcam (Fenalweb) se estima en Colombia existen un poco más de 12.000 estudios entre Bogotá, Medellín y Cali y que puede haber entre 120.000 a 400.000 modelos dedicada a esta actividad. Así mismo, se estima que solo en Bogotá al menos 2 de cada 10 estudios webcam son legales, por lo que se cree que el 80% del total de estudios en la ciudad están fuera de cualquier regulación lo que abre la puerta a todo tipo de irregularidades y abusos como la explotación sexual.

En Colombia esta práctica que hace parte de las Actividades Sexuales Pagas (ASP) está en camino de ser regulada y a la espera que finalmente surta trámite un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la República que oficialice y que permita la regulación del trabajo de las modelos webcam, así como los estudios y empresas que las contratan.

En Bogotá, si bien es cierto que existe una política pública de actividades sexuales pagas 2020-2029 consagrada en el documento CONPES DC 11 de 2019, dicha política distrital no incluye actividades sexuales pagas de élite, líneas telefónicas eróticas, sexo virtual por webcam, servicios de acompañantes y por ende no se cuenta con una caracterización o censo de esta población dedicada exclusivamente al trabajo sexual virtual.

Desde el año 2013 Secretaría de la Mujer ha venido adelantando trabajos y estrategias como “casa de todas”, pero que solo incluye mujeres en situación de prostitución y no con personas que realizan actividades sexuales pagas. En 2015 se expidió la resolución 490 que establece la estructura del Plan de Acción para la Protección Integral de las Mujeres en Ejercicio de la Prostitución, como un instrumento de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. El objetivo general del plan, en su artículo 4 dice: “garantizar los derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución, reconociendo sus diversidades en razón a identidades de género, orientaciones sexuales, diversidades étnicas, raciales, culturales, religiosas, ideológicas, territoriales, de discapacidad, etarias, de origen

geográfico, condiciones socio-económicas, de afectación por el conflicto armado y otras, mediante el desarrollo de acciones afirmativas y de igualdad de oportunidades, con el fin de contribuir a la eliminación de la discriminación, la desigualdad y la subordinación en Bogotá D.C.”

Así mismo, existe jurisprudencia sobre las ASP como la Sentencia **T-594 de 2016** la cual protege los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales a la libre circulación, la libertad personal y la no discriminación por su actividad y que instó a la Administración Distrital a darle prioridad a la formulación de la política pública para las personas que ejercen trabajos sexuales; pero que no se ocupó de las denominadas ASP de élite en las que se enmarca el modelaje webcam, lo cual continúa dejando un vacío jurídico frente a las personas que hacen parte de la industria de este modelo de negocio asociado a una actividad laboral sexual virtual paga.

Sentencia **T 407 de 2018**... “Aunque la industria del entretenimiento para adultos no se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, esta Corte reconoce las tensiones y retos que este tema implica para un Estado social de derecho, alrededor del cual se han generado amplios debates que involucran distintas miradas sobre este fenómeno y que encuentran diferentes posturas”

Dicho lo anterior, a continuación, se analizará a profundidad la importancia de contar con una caracterización y censo de la población que hace parte de las Actividades Sexuales Pagas de élite como las y los modelos webcam, entre otros.

I. OBJETO DEL PROYECTO

Establecer lineamientos que garanticen los derechos de la población que realiza actividades sexuales pagas de élite en Bogotá en la modalidad de webcam, prepago, acompañantes, aplicaciones, entre otras similares.

Así mismo, se busca ejercer un mayor control sobre la industria de las actividades sexuales pagas de élite y la protección de los derechos tanto humanos como laborales de las personas que se benefician de este modelo de negocio sexual pago.

Así las cosas, urge a esta Corporación velar por la identificación y protección de los derechos de todos los actores involucrados en la industria de las Actividades Sexuales Pagas de élite.

II. CONSIDERACIONES Y JUSTIFICACIÓN

Afectación por falta de caracterización y censo poblacional

El sábado 8 de abril de 2017 la agenda mediática del país se ocupó de un hecho trágico en el Metro de Medellín. Las operaciones fueron suspendidas luego que una mujer se lanzara a las vías del tren. La persona que intentó terminar con su vida era una joven de 20 años que sufría de acoso por conocidos que se enteraron de que era modelo *webcam*. Este hecho puso en evidencia las

situaciones a las que se exponen estas personas y los inconvenientes que pueden traer para sus vidas y para la salud mental de cada una de estas modelos.

La ausencia de una caracterización de la población que se dedica a las ASP de élite (webcam) impide conocer los perfiles sociodemográficos de estas personas, así como la calidad de vida que llevan, las condiciones en las que laboran y las percepciones e imaginarios sociales (prostitución) que en su mayoría son negativos y discriminatorios. El siguiente testimonio es de una persona dedicada a las ASP que fue registrado en 2022 por la Secretaría de la Mujer y el Observatorio de mujeres y equidad de género de Bogotá durante uno de sus talleres participativos: *“Las ASP son una bendición o es una maldición, porque me otorga posiblemente estabilidad económica, estabilidad emocional porque puedo pagar mi salud, puedo ayudar a mi familia, pero como está mal visto no puedo tener una relación social normal, yo no me siento normal en la sociedad, yo me siento excluida, me siento criticada, juzgada, también asqueada, aburrida de tanto maltrato psicológico”*.

Esto evidencia esa dicotomía en la que la mayoría de la población ASP vive en la capital y todos los prejuicios y exclusión que trae consigo esta labor. En ese sentido es indiscutible que se produce una afectación emocional que está ligada a posibles trastornos de la salud mental. Por ende urge también una caracterización de la ASP de élite que permita conocer las afectaciones en términos de acceso a salud mental y general y que garantice ese derecho

Respecto de los perfiles sociodemográficos, en la capital solo se tiene identificación por parte del Observatorio de la Mujeres y Equidad de Género de Bogotá de las mujeres dedicadas a las ASP en general; pero se desconoce con certeza una bigdata que arroje cifras sobre la población ASP de élite en la que se pueda tener información sobre edades, género (mujeres/hombres) nivel socioeconómico – nivel de estudios, su identidad de género, orientación sexual y nacionalidad, tipo de vivienda, entre otros.

Igualmente, la falta de caracterización imposibilita identificar y contextualizar las dinámicas económicas que emergen de la industria de las ASP de Élite y las condiciones en las que los actores de este modelo de negocio se desenvuelven laboralmente y las zonas en las que más se están desarrollando el modelaje webcam (estudios). En ese sentido urge realizar una cobertura geográfica en la capital que incluya todas las localidades exclusivamente para las ASP de élite.

Vulneración de los derechos laborales

A pesar que existe una ausencia de regulación en Colombia frente a las ASP de élite, especialmente a las actividades asociadas a la industria del modelaje webcam, no es menos cierto que hay un precedente objeto de estudio de caso de Corte Constitucional y que sienta jurisprudencia. Para la alta corte la falta de regulación no es razón para que las ASP de élite como el modelaje webcam abran la puerta a escenarios de abusos y violación de derechos para las personas que hacen parte de la cadena laboral de este modelo de negocio.

Ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T-109 del 27 de febrero de 2021 que se reconoce derechos laborales a una modelo Webcam en razón a que la forma en que el gestor del

estudio webcam sistematizó la actividad del modelaje, permitiendo concluir que entre la modelo webcam y el gestor del estudio existía una relación laboral, por cuanto que se podía percibir las tres condiciones mínimas para que se constituya el contrato realidad. En ese sentido, la Corte ha establecido que: *“la realidad de muchas mujeres en estado de vulnerabilidad que ingresan a la industria del sexo condicionadas por situaciones de pobreza y ausencia de oportunidades, lo que en una cultura sexista, globalizada y movida por el afán de lucro abre paso a que algunos busquen tomar provecho de las circunstancias apremiantes de estas mujeres”*.

A partir de este caso, no solo se traza un precedente y se dicta jurisprudencia al respecto; sino que se ha instado al Congreso de la República a formular una ley que regule el modelaje webcam; así como al Ministerio del Trabajo en el mismo sentido. De hecho la única normatividad existente a las ASP de élite sobre el trabajo webcam es la **ley 2010 de 2019**, que añadió un parágrafo al artículo **368 del Estatuto Tributario** para indicar que tienen calidad de agentes de retención *“las personas jurídicas y naturales exportadoras de servicios de entretenimiento para adultos a través del sistema webcam”*

Sin embargo, hasta la fecha ambas corporaciones Congreso y Ministerio de Trabajo están en mora de formular una regulación contundente sobre las ASP de élite a través de los servicios del modelaje webcam. En consecuencia, es una realidad que en Colombia se cuenta con regulación en términos del derecho tributario y policivo, pero persiste la ausencia de una legislación que defina la situación jurídica de las personas que hacen parte de la industria de las ASP de élite en la modalidad de modelaje webcam.

Violencia

La falta de una regulación jurídica que proteja y garantice el ejercicio del trabajo webcam en condiciones dignas favorece situaciones de abuso y explotación dentro de las relaciones. Las mujeres tal y como lo reseña la socióloga Blanca Pedroza (2009) hacen parte del propio botín en el que están incluidos sus cuerpos y sus mentes. “de ahí la pertinencia del término (feminización de la pobreza). Para Pedroza (2009) “las mujeres tienen menor posibilidad de apropiación de la riqueza social y menores oportunidades de desarrollo. Las mujeres latinoamericanas, para no hablar de las mujeres de todo el mundo, suelen tener un estatus legal que las pone en desventaja frente a los hombres y todavía son excluidas de los espacios políticos. Las que logran entrar deben jugar con las reglas de un mundo de hombres”⁷

De la mano de esa vulneración de los derechos esta la desigualdad y los prejuicios que abren la puerta a hechos de violencia y discriminación. Desde esa perspectiva el modelaje webcam carga auestas con prejuicios sociales que no desligan esta práctica de la prostitución tal y como se le conoce.

En ese contexto, las modelos webcam se ven expuestas a una estigmatización que las asocia a la pornografía y es ahí donde se abre otra puerta, la de la explotación sexual y todos los peligros que esto acarrea. Dichos señalamientos atentan contra la integridad y vida emocional de las personas que se dedican a las ASP de élite y a su vez imposibilitan el acceso a la educación, servicios de salud, incluida la salud mental, y otros derechos que en su mayoría son vulnerados

⁷ Tomado de “Privatización y globalización: derechos humanos de las mujeres” – Pedroza Blanca 2009. Recuperado de: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20140611041303/10pedro.pdf>

constantemente. Todo ellos sucede cuando la misma sociedad legitima todos estos abusos a los que se ven expuestas las personas que hacen parte de la industria de las ASP por el simple hecho de realizar una actividad sexual remunerada, tal y como lo ha publicado The New York Times (2021) *“Legitimar el abuso sexual como un trabajo vuelve particularmente atractivos los sitios de cámaras web como OnlyFans para las personas con carencias económicas”*.⁸ Mientras esto siga sucediendo la industria del sexcam seguirá en ascenso así como la vulneración de derechos de las modelos que hacen parte de esta industria.

En este sentido, resulta necesario que el Concejo de Bogotá, como órgano competente para tomar medidas en relación con la protección de los derechos de la población dedicada a las ASP de élite, adopte las medidas pertinentes para dictar lineamientos sobre la caracterización y censo de las personas que hacen parte de la industria de la ASP de élite.

III. MARCO JURÍDICO

A. DE ORDEN CONSTITUCIONAL

- **Sentencia T-629 de 2010**

Acerca del **CONTRATO LABORAL ENTRE PERSONA QUE EJERCE LA PROSTITUCION Y ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO** y una conclusión inexorable desde los principios constitucionales de libertad, dignidad e igualdad. En ese sentido la Corte dice: *“Habrá contrato de trabajo y así debe ser entendido, cuando el o la trabajadora sexual ha actuado bajo plena capacidad y voluntad, cuando no hay inducción ninguna a la prostitución, cuando las prestaciones sexuales y demás del servicio, se desarrollen bajo condiciones de dignidad y libertad para el trabajador y por supuesto cuando exista subordinación limitada por las carácter de la prestación, continuidad y pago de una remuneración previamente definida. Una conclusión del juez constitucional que no pretende ni auspiciar la actividad, ni desconocer su carácter no ejemplificante, más sí proteger a quienes se ganan la vida y cumplen con su derecho deber al trabajo a través de la prostitución ejercida no de modo independiente sino al servicio de un establecimiento de comercio dedicado a ello. Más aún cuando desde el punto de vista del **juicio de igualdad** y la jurisprudencia constitucional que lo ha estructurado, no existe en la Constitución ninguna disposición que autorice una discriminación negativa para las personas que ejercen la prostitución.*

- **Sentencia T-594 de 2016**

Acerca de la vulneración de los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales a la libre circulación, la libertad personal y la no discriminación por su actividad. Al respecto la Corte ha dicho: *“Los trabajadores sexuales conforman un grupo discriminado y marginado por su actividad respecto a los cuales el Estado tiene un deber de especial protección bajo los mandatos constitucionales de la igualdad material. Es necesario enfatizar que existe una diferencia entre el trabajo sexual lícito que parte del ejercicio de la voluntad libre y razonada de su titular, así como de contextos de vulnerabilidad socioeconómica, y la prostitución forzada o la explotación de seres humanos por el lucro económico de terceros. Las*

⁸ Recuperado de [El mito de OnlyFans - The New York Times](#)

conductas de explotación sexual, trata de personas, inducción a la prostitución, estímulo a la prostitución de menores de edad, demanda de explotación sexual comercial de niños, niñas o adolescentes, pornografía con menores de 18 años, turismo sexual, prostitución de menores de 18 años y facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de edad, se encuentran penalizadas en Colombia, con el objetivo legítimo y deseable de suprimir y perseguir estas actividades ilegales y vulneratorias de derechos humanos.

- **Sentencia T407 de 2018**

Acerca de la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que actúan en producciones audiovisuales pornográficas. Al respecto la Corte ha señalado que: “Aunque la industria del entretenimiento para adultos no se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, esta Corte reconoce las tensiones y retos que este tema implica para un Estado social de derecho, alrededor del cual se han generado amplios debates que involucran distintas miradas sobre este fenómeno y que encuentran diferentes posturas”

- **Sentencia T109 de 2021**

Acerca de vulneración de los derechos fundamentales de una mujer que se desempeñaba como modelo webcam, como una medida para garantizar el derecho a la intimidad y la protección contra injerencias en la vida privada y familiar. Al respecto la Corte señala que: “la realidad de muchas mujeres en estado de vulnerabilidad que ingresan a la industria del sexo condicionadas por situaciones de pobreza y ausencia de oportunidades, lo que en una cultura sexista, globalizada y movida por el afán de lucro abre paso a que algunos busquen tomar provecho de las circunstancias apremiantes de estas mujeres”

CONSTITUCIÓN POLITICA:

- **Artículo 2:** Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
- **Artículo 53:** El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la

seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

B. DE ORDEN LEGAL Y NORMATIVO

- **Ley 2010 de 2019**

“Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.”

- **Ley 1801 de 2016**

“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”

NORMATIVIDAD DISTRITAL

- **Documentos Conpes DC 11 de 2019**

“Política pública de actividades sexuales pagadas 2020 – 2029”

- **Resolución 490 de 2015 de la Secretaría Distrital de la Mujer**

Por medio del cual se establece la estructura del Plan de acción para la protección integral de las mujeres en ejercicio de la prostitución, y se dictan otras disposiciones.

- **Acuerdo No. 79 de 2003 del Concejo de Bogotá**

Por la cual se expide el Código de Policía de Bogotá, D.C.

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO

La Constitución Política de 1991 consagra en el artículo 313 que:

Corresponde a los concejos:

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

El Decreto Ley 1421 expresa en el artículo 12, numeral 1, lo siguiente:

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

- 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

(...)

En ese sentido, a partir de La Constitución Política de 1991, artículo 313 numeral 9, el Decreto Ley 1421 expresa en el artículo 12, el principio de precaución y el principio de rigor subsidiario, es competente esta corporación para pronunciarse sobre el presente proyecto de acuerdo.

V. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento de la Ley 819 de 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones y que en su artículo 7 determina que:

“Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. (...)

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”

Aclaremos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, ya que las acciones deben estar enmarcadas en los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital.

Cordialmente,

MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA

Autora - Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 159 DE 2025

PRIMER DEBATE

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS QUE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN QUE REALIZA ACTIVIDADES SEXUALES PAGAS DE ÉLITE EN BOGOTÁ EN LA MODALIDAD DE WEBCAM, PREPAGO, ACOMPAÑANTES, APLICACIONES, ENTRE OTRAS"

EL CONCEJO DE BOGOTÁ

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la normatividad vigente,

ACUERDA

Artículo 1°. Objeto. Establecer lineamientos que garanticen los derechos de la población que realiza actividades sexuales pagas de élite en Bogotá en la modalidad de webcam, prepago, acompañantes, aplicaciones, entre otras similares.

Artículo 2°. Supervisión y Protección en el Comercio Electrónico para Adultos. La Administración Distrital implementará mecanismos de inspección, vigilancia y control que, desde un enfoque basado en derechos humanos, garanticen el desarrollo de la actividad y el servicio de comercio electrónico para adultos, tales como el modelaje webcam, bajo principios de dignidad y libertad humana. Además, promoverá acciones para la prevención, atención, asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas de trata de personas.

Artículo 3°. Caracterización. La Administración Distrital deberá realizar, en un plazo razonable, una caracterización y censo tanto de los estudios como de las personas que realizan actividades sexuales pagas de élite en Bogotá, incluyendo modalidades como el modelaje webcam, servicios de acompañantes, prepagos, aplicaciones digitales y otras similares.

Artículo 4°. Actualización de la Política Pública. La Administración Distrital, en un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, deberá actualizar la política pública relacionada con las actividades sexuales remuneradas, incorporando dentro de su marco regulatorio las Actividades Sexuales Pagadas (ASP). Esta actualización deberá incluir las modalidades realizadas a través de plataformas digitales, tales como el sistema webcam, y otras emergentes.

Dicha actualización deberá estar orientada por un enfoque de derechos humanos, garantizando la dignidad, el respeto y la protección de quienes desarrollan estas actividades, e incluyendo mecanismos para su regulación, supervisión y control.

Artículo 5°. Ampliación de la Oferta Educativa para Trabajadores de Actividades Sexuales. La Administración Distrital diseñará e implementará estrategias específicas para ampliar el acceso a la educación formal, técnica y superior de las personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas (ASP) en Bogotá. Estas estrategias deberán incluir modalidades educativas flexibles y programas adaptados a las necesidades y horarios de esta población, como formación técnica, competencias digitales y acceso a programas de educación superior, priorizando la promoción de su autonomía económica y el respeto de sus derechos fundamentales.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

PROYECTO DE ACUERDO NO 160 DE 2025

PRIMER DEBATE

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA DE TALENTOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, “BOGOTÁ, LA CAPITAL DEL TALENTO INFANTIL” EN EL DISTRITO CAPITAL"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto impulsar la participación activa y la visibilización de los talentos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diversos campos artísticos, culturales, científicos, deportivos y tecnológicos, para su desarrollo integral y reconocimiento en la sociedad se a través de la creación

de la Feria de Talentos "Bogotá, la Capital del Talento Infantil" como un evento de interés cultural de carácter distrital.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado. (...) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños. la vida, la integridad física, la salud, (...) la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. (...) Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Artículo 71. Expresión Artística. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

De orden legal:

Ley 1098 DE 2006. “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”

ARTÍCULO 17. DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA Y A UN AMBIENTE SANO. (...) La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano. **PARÁGRAFO.** El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia.

De orden Distrital:

DECRETO 340 DE 2020 POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES:

Artículo 1. Naturaleza. *La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, perteneciente al Sector Cultura, Recreación y Deporte, es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera.*

Artículo 2. Objeto. *La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte tiene por objeto orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y con la participación de las entidades a ella adscritas y vinculada y la sociedad civil.*

Artículo 3. Funciones. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, tendrá las siguientes funciones básicas:

a. Formular estrategias para garantizar la conservación y enriquecimiento de la creación y expresiones culturales propias de la ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural e histórica.

b. Diseñar estrategias de divulgación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible.

(...)

DECRETO 599 DE 2013 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO, LA EVALUACIÓN Y LA EXPEDICIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL, A TRAVÉS DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN PARA EL REGISTRO, EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL –SUGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”:

Artículo 1. Objeto. *El presente decreto tiene por objeto:*

1. Establecer el funcionamiento e integración del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital, en adelante y para efectos de lo previsto en este decreto se denominará - SUGA y se adopta la ventanilla única virtual.

2. Crear el Comité del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital - SUGA y establecer sus funciones.

3. Determinar las características y clasificación de las aglomeraciones de público, así como los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la realización de las actividades que impliquen aglomeraciones de público en el Distrito Capital, a través de la ventanilla del SUGA. Así como los procedimientos que se deben observar para la habilitación de escenarios de artes escénicas.

4. Establecer los requisitos y procedimiento para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados, en espacio público, en estadios y demás escenarios deportivos.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

A nivel nacional y distrital, se han implementado diversas estrategias para fomentar las habilidades y potencialidades de aquellos individuos destacados que, debido a sus características particulares, requieren de una orientación y apoyo específicos. En este contexto, la ciudad de Bogotá debe estimular estos talentos en niños, niñas y adolescentes para asegurar su pleno desarrollo.

“Todo colegio tiene estudiantes que poseen elevado potencial para el aprendizaje en niveles avanzados, la solución de problemas creativos y la motivación para seguir un trabajo de excelencia y rigor. Más que fuentes de adquisición de información, los colegios deben ser lugares para el desarrollo de talentos en todos sus estudiantes. (...) Los métodos tradicionales de escolaridad pueden llevar al fracaso la intención de hacer de los colegios lugares de desarrollo de experiencias enriquecedoras para el talento creativo de los jóvenes. (...) El Modelo de Enriquecimiento Escolar comprende estrategias para incrementar el esfuerzo del estudiante, su gozo y desempeño, así como para integrar un rango de experiencias de aprendizaje de nivel avanzado, junto con destrezas de pensamiento, en todas las áreas curriculares.”⁹

Las actividades lúdicas, cuando se integran en el ámbito distrital, se convierten en una herramienta fundamental para acercar a los niños a aprendizajes significativos en entornos agradables y atractivos. Esto favorece el desarrollo de sus habilidades de manera natural. Como resultado, se generan niños felices, con habilidades fortalecidas, afectuosos, dispuestos a participar en el aula, curiosos y creativos. Estos ambientes también promueven la ampliación del vocabulario y mejoran la convivencia, lo que, a su vez, capta el interés de las familias, incentivando su participación en eventos de la comunidad.

Es vital considerar la feria lúdico-pedagógica como un espacio adecuado para reflexionar sobre los métodos, significados y didácticas involucrados en los procesos educativos y de formación infantil. Además, ofrece una oportunidad para analizar críticamente los aprendizajes de los estudiantes de la licenciatura en educación. Bajo estas circunstancias, el análisis en torno a la feria lúdico-pedagógica permite profundizar en las competencias que deben desarrollar los futuros profesionales de la educación, entendiendo que una formación coherente de los educadores de la etapa infantil contribuye de manera significativa al desarrollo integral de la primera infancia.

En Bogotá, aunque existen numerosos eventos masivos que buscan integrar y destacar talentos y habilidades en diversas áreas, muchos de ellos carecen de una participación integral de niños, niñas y adolescentes. Estos eventos suelen centrarse en el público adulto o en competencias específicas que no siempre consideran el potencial y las capacidades de los más jóvenes.

La falta de inclusión de niños, niñas y adolescentes en estos eventos representa una oportunidad perdida para fomentar su desarrollo y visibilizar su creatividad, talento y habilidades. Bien lo ha señalado la Corte Constitucional en Sentencia C-449-03 al precisar la importancia que tiene la actividad recreativa y deportiva en el desarrollo integral del ser humano y en la promoción social de la comunidad, la cual se destaca en mayor medida el propio ordenamiento Superior al reconocer expresamente que dicha actividad reviste el carácter de derecho fundamental y prevalente en el caso de los niños. Por lo tanto, integrar a este grupo en la programación de eventos masivos no sólo enriquecerá la experiencia colectiva, sino que también permitirá

⁹ S. Renzulli, Joseph. (2008). *La educación del sobredotado y el desarrollo del talento para todos*. Revista de Psicología, vol. XXVI, núm. 1. Pontificia Universidad Católica del Perú Lima, Perú.

construir una sociedad más equitativa, donde se valore y promueva el aporte de las nuevas generaciones en todos los ámbitos de la cultura, el deporte, el arte y la tecnología.

Como sucede con el *Festival de Talentos ‘Jóvenes capaces’ con más de 10.000 estudiantes*. El evento se desarrolla en una jornada única con 210 instituciones educativas con una participación de 132.712 estudiantes, y la jornada extendida se implementa en 305 colegios con una participación de 281.691 niños y jóvenes. Alrededor de 30 actividades se desarrollarán en estos días en torno al arte, ciencia, cultura y deporte en 10 escenarios de la ciudad.

También es el caso de la Feria de Talentos para habitantes de calle, que cuenta con la participación de más de 40 habitantes de calle de la zona norte de la capital. Se desarrolla en medio de la “Jornada de Desarrollo Personal”, en la que se realizan diferentes actividades lúdicas, pedagógicas y rumba aeróbica entre otras actividades programadas en el Centro de Desarrollo Comunitario, de la subdirección local de la Secretaría de Integración Social, en Usaquén.

Por último, como sucede con la Feria de talentos y productividad con centenarios y personas mayores de Ciudad Bolívar. El evento se realiza en el marco de la celebración del “Mes del Envejecimiento y la Vejez”, en la localidad de Ciudad Bolívar.

En ese sentido, el proyecto busca integrar a niños, niñas y adolescentes de todas las localidades de Bogotá en la participación de un evento masivo, donde tengan la oportunidad de mostrar sus habilidades y talentos. Este enfoque inclusivo pretende no solo visibilizar las capacidades de los jóvenes, sino también proporcionarles un espacio seguro y significativo para expresar su creatividad y potencial.

El propósito principal de este proyecto es incentivar el crecimiento personal y profesional de los participantes, promoviendo un sentido de pertenencia y confianza en sus propias habilidades. Al brindarles la oportunidad de ser protagonistas en un evento de gran magnitud, se les motiva a seguir desarrollando sus talentos, lo cual contribuirá positivamente a su formación integral y a la construcción de un futuro lleno de oportunidades.

IV. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia realiza una descripción del derecho a desarrollarse desde la primera infancia con los ODS de la siguiente forma:

Los 17 ODS y sus 169 metas impactan de manera directa o indirecta en el bienestar de la infancia y su implementación representa una clara apuesta por un modelo social y político que ponga en el centro a los niños. Además, la Agenda 2030 ayuda a ampliar la mirada hacia nuevas dimensiones del bienestar infantil asociadas con la equidad, el desarrollo económico, el medio ambiente y el cambio climático, la promoción de la paz y la protección. Garantizar el bienestar y la realización de los derechos de la infancia no es sólo un compromiso de los países que han suscrito la CDN, sino también una condición esencial para alcanzar los ODS para todos. (UNICEF, 2024)

El bienestar infantil es un pilar fundamental para el éxito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La implementación de la Agenda 2030 no solo refuerza el compromiso global con los derechos de los niños, sino que también subraya que sin asegurar su bienestar, es imposible lograr un desarrollo sostenible integral. Los

ODS proporcionan un marco amplio que integra diversas dimensiones cruciales para el desarrollo infantil, lo que resalta la importancia de poner a los niños en el centro de las políticas y acciones globales.

- *El derecho a alcanzar el máximo potencial en la vida es igual para todos los niños y niñas del mundo.*
- *Hay contextos sociales y económicos que lo dificultan, más allá de las posibilidades de cada niño o niña y su familia.*
- *La pobreza y la dificultad de acceso a un trabajo decente impiden a muchas familias lograr un desarrollo pleno para sus hijos.*

Es importante que el distrito se acoja a la Agenda 2030 porque al hacerlo, se compromete a un conjunto de metas globales que no solo buscan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos en general, sino que también colocan un énfasis particular en el bienestar infantil. Adoptar esta agenda significa que el distrito prioriza la equidad, el desarrollo sostenible, la protección ambiental, la paz y los derechos humanos, con un enfoque especial en los niños como futuros ciudadanos. Esto no solo mejora el presente y futuro de los niños del distrito, sino que también asegura un desarrollo más equilibrado y sostenible para toda la comunidad. Además, al alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el distrito contribuye a los esfuerzos globales para combatir problemas como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, lo que tiene un impacto positivo tanto a nivel local como mundial.

V. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027”

El proceso pedagógico permite garantizar un fortalecimiento de ambientes educativos que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Esto implica contar con un equipo humano altamente cualificado que trabaje en condiciones de calidad y pertinencia, lo que asegura que cada niño y niña reciba una educación adaptada a sus necesidades y potencialidades. Un ambiente pedagógico y cultural bien diseñado no solo se enfoca en la transmisión de conocimientos, sino que también fomenta el crecimiento emocional, social y cognitivo de los NNA, creando una base sólida para su futuro desarrollo académico y personal.

Las propuestas curriculares y pedagógicas centradas en las capacidades y potencialidades de los niños y niñas son esenciales para el desarrollo de habilidades en áreas clave como el juego, el arte, la literatura y los lenguajes expresivos. Estas áreas permiten a los estudiantes explorar su creatividad, mejorar su capacidad de comunicación y fortalecer su pensamiento crítico. Así, el presente proyecto de acuerdo se alinea con el las metas y propuestas del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, creando una feria de talentos con el propósito de formar individuos más completos y capaces de enfrentar los desafíos del mundo moderno:

Artículo 12. Programas del objetivo estratégico “Bogotá confía en su potencial”. *Adóptense los siguientes programas del objetivo “Bogotá confía en su potencial”:*

12.1. Programa 16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano. (...)

En cuanto a jornadas complementarias, se adelantará un trabajo articulado con distintos aliados, como la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y sus entidades adscritas,

gracias al cual los niños, niñas y jóvenes de la ciudad tendrán acceso a espacios de formación artísticos y deportivos garantizando una formación integral.

(...)

16.5. Programa 36. Innovación Pública para la generación de la confianza ciudadana. (...) *Adicionalmente, en colaboración con IBO y las Secretarías de Planeación, Educación, Integración Social y Gobierno, se generarán líneas de trabajo con niños, niñas y adolescentes en espacios de cocreación y laboratorios de innovación que incentivan su participación incidente y formación en innovación pública.*

(...)

Artículo 122. Coordinación interinstitucional para la atención integral a la primera infancia. (...) *La gestión intersectorial para la atención integral tendrá como propósito orientar acciones conjuntas, articuladas e intencionadas por parte de todos los actores corresponsables en el territorio distrital, esto en función de garantizar que todos los niños y niñas entre los cero (0) y los cinco (5) años en Bogotá D.C. se vinculen en condiciones de igualdad, equidad y calidad a los distintos programas y modalidades de atención integral a la primera infancia (AIPI) de carácter oficial o privado que sean prestados por parte de la oferta del Distrito Capital o el ICBF.*

Proceso Pedagógico- *Diseño y fortalecimiento de ambientes educativos y pedagógicos que favorezcan el desarrollo de las niñas y niños con equipo humano cualificado y en condiciones de calidad y pertinencia. - Propuestas curriculares y pedagógicas centradas en las capacidades y potencialidades de los niños y niñas - Desarrollo de capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y los lenguajes expresivos. (...)*

VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

(...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

VII. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

El presente proyecto no genera ningún impacto fiscal adicional, solo traza una ruta adicional dentro del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” 2024-2027 y el Plan de Acción de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la cual puede llevarse a cabo con el presupuesto actual.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

H. Concejal de Bogotá D.C.

Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 160 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA DE TALENTOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, “BOGOTÁ, LA CAPITAL DEL TALENTO INFANTIL” EN EL DISTRITO CAPITAL”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto crear la Feria de Talentos "Bogotá, la Capital del Talento Infantil" como un evento de interés cultural de carácter distrital, cuyo propósito es impulsar la participación activa y la visibilización de los talentos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diversos campos artísticos, culturales, científicos y tecnológicos, promoviendo así su desarrollo integral y su reconocimiento en la sociedad.

Artículo 2. Aplicación. La Administración Distrital, en coordinación con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se encargará de la organización y logística de la Feria de Talentos "Bogotá, la Capital del Talento Infantil". Esta feria se llevará a cabo anualmente.

Artículo 3. Articulación con el Sector Privado. La Administración Distrital vinculará al sector privado y creará alianzas con diversos sectores, como el entretenimiento y el deporte, con el objetivo de captar ofertas educativas para los niños, niñas y adolescentes que por su talento se destaquen en la Feria.

Artículo 4. Reglamentación. La administración distrital reglamentará el presente acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a su promulgación, estableciendo los espacios, tipos de actividades y participación que permitan la realización de la Feria de Talentos "Bogotá, la Capital del Talento Infantil" en el Distrito Capital.

Artículo 5. Vigencia. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su promulgación.

Publíquese y Cúmplase

PROYECTO DE ACUERDO NO 161 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA SEGURIDAD EN LAS COPROPIEDADES SUJETAS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL DISTRITO CAPITAL”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El presente acuerdo tiene como objeto establecer medidas para promover y garantizar la seguridad en las copropiedades sujetas al régimen de propiedad horizontal en el Distrito Capital, con el fin de mejorar la protección de los residentes y sus bienes.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones jurídicas:

Del orden Constitucional:

- Artículo 2 – Constitución Política de Colombia: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y **asegurar la convivencia pacífica** y la vigencia de un orden justo.
- Artículo 11 – Constitución Política de Colombia: El Derecho a la vida es inviolable.
- Artículo 22 – Constitución Política de Colombia: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
- Artículo 23 – Constitución Política de Colombia: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.
- Artículo 42 – La familia es el núcleo fundamental de la sociedad (...) El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia (...) Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.
- Artículo 58 – Constitución Política de Colombia: garantizará la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.

Bloque de constitucionalidad:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre considera que *“Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros (...) Todo individuo tiene Derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona”*.

- La Convención Americana de Derechos Humanos - Pacto de San José – Artículo 22. *Derecho de Circulación y de Residencia 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás*
- Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para” indica que *“toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado (...) toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y contará con total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los estados partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio contra sus derechos”*

De orden Nacional:

- **Que la Ley 062 de 1993:**

ARTÍCULO 4°. Inmediatez. *Toda persona tiene derecho a recibir inmediata protección contra cualquier manifestación delictiva u contravencional y el deber de cooperar con las autoridades.*

- **Ley 675 de 2001:**

ARTÍCULO 1o. OBJETO. *La presente ley regula la forma especial de dominio, denominada propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad.*

- **Ley 1801 de 2016:**

ARTÍCULO 1. Objeto. *Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de Policía, de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.*

Del orden Distrital:

- Acuerdo 652 de 2016: Por medio del cual se crea El Consejo Distrital de Propiedad Horizontal.

ARTÍCULO PRIMERO. *Créase el Consejo Distrital de Propiedad Horizontal como ente consultivo y asesor de la Administración Distrital en las políticas, planes de desarrollo, proyectos e iniciativas, que involucren los temas concernientes a las comunidades vinculadas con la propiedad horizontal del Distrito Capital. Adicionalmente, se podrá articular con sistemas, entidades u organismos nacionales, que implementen acciones para la protección, educación y desarrollo de la Propiedad Horizontal, y con las demás instancias y sistemas de participación Distrital.*

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

i. Contexto histórico del régimen de propiedad horizontal.

El régimen de propiedad horizontal en Colombia tiene su origen a partir de la Ley 182 de 1948. Esta norma fue expedida, con el objetivo de abordar el problema de escasez de vivienda originado luego de los sucesos del 9 de abril de 1948 que dejaron una buena parte de la ciudad de Bogotá destruida (Nader, 2002, p. 28)¹⁰. La precitada ley tuvo como objeto estipular un “régimen de la propiedad de pisos y departamentos de un mismo edificio” y aunque no estipuló una definición concreta frente a lo que consistía la propiedad horizontal, en su artículo primero establecía las condiciones en las que se podría hacer parte de dicho régimen.

Artículo 1. *Los diversos pisos de un edificio, y los departamentos en que se divida cada piso, así como los departamentos de la casa de un solo piso, cuando sean independientes y tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común, podrán pertenecer a distintos propietarios, de acuerdo con las disposiciones de esta ley.*

El título podrá considerar como piso o departamento los subsuelos y las buhardillas habitables, siempre que sean independientes de los demás pisos y departamentos. (Congreso de la República, L.182/1948)

Esta norma incorporó nociones cruciales que actualmente son ampliamente abordadas y estudiadas, como los bienes comunes y el reglamento de copropiedad. Ambos conceptos comparten un factor característico y particular: **la seguridad y tranquilidad de los copropietarios**. Los bienes comunes, como los cimientos, muros, techos e instalaciones generales, según el artículo 3 de la mencionada

¹⁰ [1 ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL EN COLOMBIA LINA MARGARITA NADER DANIES PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA](#)

ley, se constituyen como elementos esenciales para garantizar la estabilidad y funcionalidad del edificio, previniendo riesgos estructurales y operativos. Por otro lado, el artículo 7 establecía que el reglamento de copropiedad funciona como un instrumento obligatorio (Art.19) que establece el uso adecuado de cada unidad y las áreas comunes, prohibiendo actividades que puedan comprometer la seguridad o causar perturbaciones.

LEY 65 DE 1985

Después de 37 años de vigencia de la Ley 182 de 1948 y ante la necesidad de modificar y actualizar ciertos aspectos de la normativa, se expidió la Ley 16 de 1985. Esta Ley no buscaba derogar aspectos establecidos en la Ley 182 sino por el contrario, buscaba complementar aspectos no regulados en ella.

Los principales aspectos novedosos que traía la norma, de acuerdo con Lina Margarita Nader (2008)¹¹, son los siguientes:

1. **Definición de Propiedad Horizontal:** La propiedad horizontal se define como un tipo de dominio en el que ciertas partes del inmueble son de propiedad exclusiva de los propietarios individuales, mientras que las áreas comunes están sujetas a la propiedad de una persona jurídica creada por la ley para administrar estos espacios comunes. (p.50)
2. **Creación de una Persona Jurídica Especial:** Bajo esta ley, la propiedad horizontal da lugar a una persona jurídica distinta de los propietarios individuales. Esta entidad sin ánimo de lucro se encarga de la administración y el cumplimiento de las normas y el reglamento de la propiedad horizontal, gestionando eficientemente los bienes comunes. (p.50)
3. **Desafectación de Bienes Comunes:** Los bienes comunes son, en principio, indivisibles e inenajenables. Sin embargo, la ley permite su desafectación si estos bienes ya no son necesarios para el uso común, siempre que esta decisión sea aprobada por al menos cuatro quintas partes de los votos en la asamblea general. (p.51)

A pesar de que esta norma no hizo hincapié en los aspectos de seguridad y convivencia, como sí lo hacía la Ley 182 de 1948, estableció un régimen sancionatorio a través del artículo 9, el cual señalaba lo siguiente:

***Artículo 9. Sanciones.** El Juez, a petición del administrador del inmueble o de cualquier propietario, podrá aplicar al infractor del reglamento o de las normas que rigen la propiedad horizontal, multa de cinco mil pesos (\$ 5.000) a cien mil pesos (\$ 100.000), sin perjuicio de las indemnizaciones y demás sanciones a que hubiere lugar (...)*

¹¹ Ibidem

Este artículo, subrayaba la necesidad de establecer consecuencias para las acciones que contravengan la convivencia y seguridad en las propiedades sometidas a este régimen, tal como se prevé en el respectivo reglamento de la copropiedad, con el fin de preservar la tranquilidad de los copropietarios.

LEY 675 DE 2001 (Regulación Vigente)

La Ley 675 de 2001 marcó el cierre del proceso de consolidación del régimen de propiedad horizontal en Colombia. Esta ley surgió para unificar el tratamiento de la propiedad que se había venido dando desde 1948, poniendo fin a la vigencia de normas divergentes sobre el mismo tema. De esta manera, se puede afirmar de manera concreta que la legislación actual define la propiedad horizontal como un modelo que combina derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados con derechos de copropiedad sobre el terreno y otros bienes comunes, **con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sujetos a este régimen.**

Así, la Ley 675 de 2001 establece una regulación especial para la propiedad horizontal en el ordenamiento jurídico colombiano, funcionando como una mezcla entre la propiedad individual o privada y la propiedad comunal; la primera corresponde a los bienes específicos de cada propietario registrados con matrícula inmobiliaria, y la segunda abarca las áreas comunes dentro del régimen de propiedad horizontal. (Ponencia Primer Debate, PL 397/2024)¹²

Finalmente, es menester señalar que la norma antes referenciada se encuentra actualmente en proceso de modificación y actualización a través del proyecto de Ley 397 de 2024 en el Congreso de la República. De este proyecto de reforma a la propiedad horizontal, se destaca el artículo 58 B, que establece la obligatoriedad de implementar un protocolo para los casos de violencia intrafamiliar que se presenten dentro de las copropiedades. El objetivo de este protocolo es contribuir a la sensibilización de los residentes y administradores acerca de las posibles situaciones de violencia que puedan ocurrir, así como también tener conocimiento de las rutas de atención de este tipo de violencias.¹³

ii. Seguridad en copropiedades sujetas al régimen de propiedad Horizontal

En el análisis de la Ley 675 de 2001, en relación con las condiciones de seguridad de los habitantes de las copropiedades, se evidencian algunos aspectos en particular:

En primer lugar, el artículo 5 de la ley de propiedad horizontal establece que el reglamento de propiedad horizontal debe incluir, como mínimo, las especificaciones de construcción y las condiciones de seguridad y salubridad del edificio o conjunto.

¹² [INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY No. 397 de 2024 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA LA LEY 675 DE 2001, REFERENTE AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.](#)

¹³ *Ibidem*

Por su parte, el artículo 18, que trata las obligaciones de los propietarios con respecto a los bienes de dominio privado, se señala que deben abstenerse de realizar actos que comprometan la seguridad o solidez del edificio o conjunto. Además, deben evitar producir ruidos, molestias o actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes, así como afectar la salud pública.

Finalmente, el artículo 29 establece que los propietarios de bienes privados en un edificio o conjunto están obligados a contribuir al pago de las expensas necesarias. Estas expensas se generan por la administración y la prestación de servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal.

En ese sentido, la ley de propiedad horizontal, al abordar aspectos relacionados con la seguridad y convivencia, se limita exclusivamente a las condiciones de seguridad de las estructuras y al mantenimiento de las áreas comunes. Sin embargo, esta normativa carece de estrategias y protocolos para atender casos en los que se presenten circunstancias delictivas dentro de las copropiedades, y que requieran algún tipo de articulación con las autoridades.

De acuerdo con cifras del Instituto Distrital de la Participación y de la Acción comunal, actualmente la ciudad de Bogotá D.C., cuenta con 14.063 copropiedades sujetas al régimen de propiedad horizontal. Adicionalmente, según la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) en Bogotá (2018), cada vez hay más propiedades horizontales, incluso en barrios donde antes no era común. Estas propiedades horizontales también ofrecen un equipamiento cada vez mejor. Estos equipamientos, que generalmente corresponden a bienes de uso común a los que hace referencia la UAECD, contribuyen a una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Por supuesto, para preservarlos y aumentar esa calidad de vida, es fundamental establecer medidas que promuevan la seguridad. Estos datos revelan una ciudad en crecimiento con una considerable densidad de vivienda en propiedad horizontal, lo que plantea oportunidades y desafíos en términos de administración, seguridad y convivencia.

CANTIDAD DE COPROPIEDADES EN BOGOTÁ	
LOCALIDAD	CONTADOR
USAQUEN	3942
CHAPINERO	2687
SUBA	2456
TEUSAQUILLO	1153
ENGATIVÁ	689
KENNEDY	603
FONTIBÓN	546
SANTA FE	486
BARRIOS UNIDOS	278
BOSA	260
PUENTE ARANDA	160
SAN CRISTOBAL	147
RAFAEL URIBE URIBE	118
LOS MARTIRES	117
CANDELARIA	116
CIUDAD BOLIVAR	112
ANTONIO NARIÑO	77
USME	60
TUNJUELITO	56
TOTAL	14063

Fuente: IDPAC (2024)

En adición a lo anterior, según cifras de la Policía Nacional en Bogotá para el año 2024 se han presentado más de 192 casos de hurto a residencia en propiedades horizontales, siendo las localidades más afectadas Usaquén con 51 casos y un incremento del 65% frente al 2023 y Suba con 29 casos, la modalidad más frecuente usada en este delito es el uso de llave maestra.

La situación es aún más compleja si observamos los datos de **violencia intrafamiliar** de la ciudad pues según la Policía Nacional por medio del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo – SIEDCO el cual documenta los hechos delictivos como violencia intrafamiliar, lesiones personales y otras conductas punibles registró en un periodo del 01 de enero al 30 de junio de los años 2023 y 2024 los siguientes datos relacionados con violencia doméstica y lesiones personales, buscando en ese sentido analizar la frecuencia de estos hechos en Bogotá.

La violencia intrafamiliar se refiere a cualquier tipo de abuso, maltrato o agresión que ocurre dentro del entorno familiar. Puede manifestarse en diferentes formas, incluyendo física, emocional, psicológica, sexual y económica. Esta violencia puede ser ejercida entre miembros de una misma familia, como parejas, padres e hijos, hermanos, u otros parientes que conviven en el mismo hogar. El SIEDCO registró un aumento de 114% de violencia intrafamiliar en Bogotá con una variación absoluta de 15.156 hechos, es decir que para el 2024 se presentaron 28.448 casos y en el 2023 se registraron 13.292 hechos, las localidades con mayor participación son Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias para las víctimas, tanto a corto

como a largo plazo, afectando su bienestar físico y emocional. El incremento de estos casos en la Ciudad Capital refleja la falta de herramientas de prevención y atención dispuestas por las autoridades.

Frente a estas circunstancias, donde los residentes de las copropiedades se vuelven más vulnerables, es indispensable implementar y repensar las estrategias de seguridad al interior de las copropiedades. Estas estrategias deben ir más allá del cuidado de las estructuras y las áreas comunes, y enfocarse principalmente en consolidar una política que fortalezca la seguridad de los habitantes. Es crucial desarrollar e implementar protocolos para la prevención de la violencia y garantizar una correcta articulación entre administradores, residentes y autoridades, de manera que pueda prevenir y abordar adecuadamente los escenarios delictivos que puedan llegar a presentarse.

iii. Necesidad del proyecto

En la ciudad de Bogotá, no existe ningún acuerdo distrital destinado a aminorar los escenarios delictivos que, de acuerdo con las cifras presentadas anteriormente, con frecuencia ocurren en las copropiedades sujetas al régimen de propiedad horizontal. Además, como se mencionó, la Ley 675 de 2001 no contempló este tipo de situaciones. Por lo tanto, ante esta ausencia normativa, surge la necesidad de este proyecto de acuerdo.

El proyecto de acuerdo tendrá como objetivo establecer medidas para promover y garantizar la seguridad en las copropiedades sujetas al régimen de propiedad horizontal, con el fin de mejorar la protección de los residentes y sus bienes. un Protocolo de atención ante los hechos que constituyen violencia intrafamiliar, coordinación entre copropiedades y autoridades distritales, interoperabilidad de Sistemas de Videovigilancia en Conjuntos Residenciales, entre otras, son algunas de las medidas propuestas para la materialización del objeto del presente proyecto de acuerdo. La Administración distrital, en específico el Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal (IDPAC) y la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia de acuerdo con su respectiva misionalidad, serán las entidades responsables de la implementación del proyecto.

De esta manera, la Ciudad de Bogotá contará con una reglamentación sólida que permita no solo prevenir los posibles escenarios delictivos que se presenten al interior de las copropiedades, sino principalmente reaccionar de forma oportuna a tales incidentes.

Por otra parte, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia actualmente cuenta con 5.828 cámaras de videovigilancia distribuidas en las localidades de Bogotá. Sin embargo, un número significativo de estas cámaras lleva en funcionamiento más de cinco años, y algunas han quedado fuera de servicio debido a daños en componentes y repuestos de alto costo y difícil obtención en el mercado por estar descontinuados. Este sistema de videovigilancia es estratégico para enfrentar los fenómenos criminales que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana, y es fundamental para el monitoreo, control y supervisión del servicio policial brindado por los cuadrantes. No obstante, las cámaras tipo domo PTZ actuales no cubren los 360 grados en la escena de monitoreo y grabación, lo

que impide registrar algunos eventos e incidentes de seguridad, dificultando la reacción, el control y la investigación oportuna por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG).

Ante esta situación, es necesario implementar cámaras pertenecientes a conjuntos residenciales que operan de manera efectiva y que pueden integrarse al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4). Esta integración no solo mejorará la cobertura y el alcance del sistema de videovigilancia, sino que también fortalecerá la confianza ciudadana en la seguridad y las instituciones. Al incorporar las cámaras de los conjuntos residenciales, se podrán registrar más eventos de manera oportuna, permitiendo una reacción y control más efectivos por parte de las autoridades, y promoviendo una mayor colaboración entre la comunidad y la policía en la lucha contra la criminalidad y la mejora de la convivencia ciudadana.

IV. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El Objetivo 16 pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Las medidas para fortalecer la seguridad en los conjuntos residenciales de Bogotá contribuyen significativamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente al Objetivo 16, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Al integrar las cámaras de videovigilancia de los conjuntos residenciales con el sistema central del C4, se mejora la capacidad de monitoreo y respuesta ante incidentes delictivos, promoviendo así una sociedad más segura y pacífica. Esta integración también facilita la justicia al permitir una reacción más rápida y efectiva por parte de las autoridades, lo cual es esencial para la resolución de delitos y la protección de los derechos de los ciudadanos.

16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Las iniciativas que fomentan la colaboración entre los copropietarios y las instituciones distritales y la Fuerza Pública, así como los programas de vigilancia comunitaria y capacitaciones en seguridad, promueven la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas. Estos programas garantizan que las decisiones de seguridad respondan a las necesidades reales de la comunidad, alineándose con la meta 16.7 del ODS.

16.8. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial

Además, fortalecer la participación comunitaria y mejorar la articulación con las autoridades locales contribuye a la construcción de instituciones más eficaces, responsables e inclusivas a nivel local, lo

que a su vez fortalece las bases para una gobernanza más robusta y participativa en todos los niveles, incluyendo la meta 16.8 de ampliar y fortalecer la participación en las instituciones de gobernanza. De esta manera, estas medidas no solo mejoran la seguridad local, sino que también contribuyen al desarrollo sostenible y a la creación de sociedades más justas y equitativas.

V. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO.

El artículo 24, del Acuerdo 927 de 2024, Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, establece una evaluación de las capacidades instaladas del C4, con el objetivo de proponer e implementar un plan de fortalecimiento tecnológico. Este plan se enfoca en el fortalecimiento del modelo integrado de gestión de la convivencia y seguridad en los territorios, incluyendo redes colaborativas de seguridad como los frentes de seguridad local o conjuntos residenciales. La colaboración de los conjuntos residenciales con la Secretaría de Seguridad, mediante la integración de sus sistemas de videovigilancia al C4, se enmarca en este modelo de gestión y anticipación del delito. Este enfoque promueve una mayor participación ciudadana, incrementando la confianza en la seguridad y en las instituciones, y fomentando una comunidad más segura y cohesionada.

Artículo 24. Enfoque de lucha contra la criminalidad. El Distrito Capital destinará recursos para el mantenimiento de las cámaras de videovigilancia que se encuentran fuera de servicio, dotación, estructura física y aumento de personal para el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), con el fin de aumentar su capacidad operativa, de anticipación y respuesta a eventos críticos, delincuenciales y emergencias. Asimismo, el Distrito estudiará y revisará la posibilidad de rentar y alquilar servicios de videovigilancia, que incluyan analítica de datos y uso de herramientas de inteligencia artificial, para fortalecer al Sistema.

Adicionalmente se hará una evaluación de las capacidades instaladas de Comando y Control local con el fin de proponer e implementar un plan de fortalecimiento tecnológico que contribuya al fortalecimiento del modelo integrado de gestión de la convivencia y seguridad en los territorios y las redes colaborativas de seguridad dentro de las que se incluyen los frentes de seguridad local.

La lucha contra la criminalidad está estrechamente relacionada con los conjuntos residenciales. Los conjuntos residenciales, al ser espacios donde conviven numerosas familias, son áreas cruciales para la implementación de medidas de seguridad y prevención del delito coadyuvando a detectar y responder de manera más efectiva a incidentes delictivos dentro de estas.

Además, la colaboración entre los conjuntos y las autoridades de seguridad del Distrito fortalece el modelo de gestión de la convivencia y seguridad. Esta colaboración crea una red de vigilancia y respuesta más robusta, integrando recursos privados y públicos para una cobertura más completa. Al

participar activamente en este esquema, no solo mejoran su propia seguridad, sino que también contribuyen a la seguridad del barrio y la ciudad en general. Este enfoque colaborativo aumenta la confianza de los residentes en las instituciones de seguridad y fomenta un sentido de comunidad y responsabilidad compartida en la lucha contra la criminalidad.

VI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

En las diferentes localidades de Bogotá, como Usaquén, Suba y Teusaquillo, a lo largo del presente año se han llevado a cabo más de 40 consejos de seguridad, revelando que la seguridad en los conjuntos residenciales se ha vuelto cada vez más crítica. Los copropietarios han manifestado preocupaciones recurrentes sobre la demora en la respuesta de los cuadrantes policiales, la falta de articulación con las autoridades en casos de robos y la inseguridad al realizar actividades cotidianas como sacar a pasear a sus perros. Estas inquietudes subrayan la necesidad urgente de implementar medidas que fortalezcan la seguridad en estos entornos residenciales, ya que la percepción de inseguridad afecta la calidad de vida y el bienestar de los residentes.



Ante esta problemática, es esencial buscar medidas que refuercen la seguridad en los conjuntos residenciales para mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes delictivos y fortalecer la colaboración entre la comunidad y las fuerzas policiales. Integrar las cámaras de videovigilancia de los conjuntos residenciales al sistema central del C4 puede proporcionar una vigilancia más eficaz y una respuesta más rápida de las autoridades ante situaciones de emergencia. Además, establecer programas de vigilancia comunitaria y capacitaciones en seguridad para los residentes puede aumentar la conciencia y la cooperación en la prevención del delito. Estas acciones no solo mejorarán la seguridad, sino que también incrementarán la confianza de los residentes en las instituciones de seguridad, creando un entorno más seguro y cohesionado.

VII. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1° del artículo 12:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

“Artículo 12. Atribuciones. *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:*

1.Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.”

De igual forma, el numeral 4 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 confiere al alcalde Mayor la atribución de *“Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos”*. De esta manera, el presente Proyecto de Acuerdo establece un marco general, dejando a cargo del gobierno distrital, en el ejercicio de su capacidad reglamentaria, desarrollar y poner en práctica lo dispuesto en esta iniciativa normativa.

VIII. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

El presente proyecto no genera ningún impacto fiscal adicional, solo traza una ruta adicional dentro del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” 2024-2027 y el Plan de Acción de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, la cual puede llevarse a cabo con el presupuesto actual.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
H. Concejal de Bogotá D.C.
Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 161 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA SEGURIDAD EN LAS COPROPIEDADES SUJETAS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL DISTRITO CAPITAL”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 1 y 7 del artículo 12, del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. Objeto del Acuerdo. El presente acuerdo tiene como objeto establecer medidas para promover y garantizar la seguridad en las copropiedades sujetas al régimen de propiedad horizontal en el Distrito Capital, con el fin de mejorar la protección de los residentes y sus bienes.

Artículo 2. Coordinación. La Administración Distrital, encabezada por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, propenderá por establecer un mecanismo de articulación y coordinación entre las copropiedades y las autoridades distritales, con el objetivo de mejorar los aspectos de seguridad en las áreas residenciales.

Este mecanismo incluirá la colaboración continua entre instituciones como la Policía Metropolitana de Bogotá y la Unidad Administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos, en aras de coordinar esfuerzos, brindar asesoramiento en materia de seguridad y promover la implementación de medidas preventivas y correctivas al interior de las copropiedades.

Artículo 3. Campañas de Difusión. El Instituto para la Participación y la Acción Comunal, en colaboración con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, promoverá la conciencia sobre la importancia de la seguridad en las copropiedades. Para lograrlo, se llevarán a cabo campañas de difusión de información y se implementarán iniciativas específicas dentro de las copropiedades, con el objetivo de sensibilizar a los residentes y fomentar prácticas seguras.

Artículo 4. Diagnóstico de seguridad. La administración Distrital fomentará la participación de las autoridades en la revisión y actualización de las políticas de seguridad y en la capacitación de los residentes, con el fin de fortalecer la seguridad y el bienestar en las copropiedades.

Además, la Secretaría Distrital de Seguridad, en colaboración con las Alcaldías locales, realizará un diagnóstico de las medidas de seguridad y capacitación con las que cuentan las copropiedades de propiedad horizontal en el Distrito Capital.

Artículo 5. Interoperabilidad de Sistemas de Videovigilancia en Conjuntos Residenciales. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en coordinación con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), promoverá la interoperabilidad entre los sistemas de videovigilancia pertenecientes a los conjuntos residenciales sujetos al régimen de propiedad horizontal y el sistema de videovigilancia de la ciudad, administrado por el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Artículo 6. Protocolo de Violencia Intrafamiliar. La Administración Distrital establecerá un protocolo de articulación con las entidades competentes para activar la ruta adecuada en caso de presentarse situaciones de violencia intrafamiliar dentro de las propiedades horizontales del distrito.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en coordinación con la Secretaría Distrital de la Mujer, deberá reglamentar la implementación de los protocolos de atención de violencia intrafamiliar en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir de la sanción del presente acuerdo.

Artículo 7: Reglamentación. La administración distrital reglamentará el presente acuerdo dentro de los cuatro (6) meses siguientes a su promulgación.

Artículo 8: Vigencia. El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación.

Publíquese y Cúmplase

PROYECTO DE ACUERDO NO 162 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR OBRAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo establecer beneficios tributarios para los propietarios o poseedores de inmuebles comerciales afectados por la ejecución de obras públicas en el Distrito Capital de Bogotá. A través de la exención del impuesto predial durante el período de afectación, se busca aliviar las cargas económicas que dichas obras generan en los contribuyentes, brindando un alivio fiscal mientras persista la afectación.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

ARTÍCULO 1: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”

ARTÍCULO 317. Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización. La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. (...)

ARTÍCULO 338: “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.”

De orden legal:

LEY 1386 DE 2010: *por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones*

LEY 788 DE 2002: *Las entidades territoriales pueden disminuir las sanciones y simplificar*

De orden Distrital:

DECRETO 352 DE 2002 *"por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital".*

DECRETO 807 DE 1993 *"por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y se dictan otras disposiciones".*

DECRETOS DISTRITALES 601 DE 2014 y 777 DE 2019: (...)

RECAUDA: *Registra y legaliza los recaudos de ingresos corrientes tributarios y no tributarios, recursos de capital y transferencias al D.C. a las cuentas bancarias que administra, para generar información oportuna y confiable, así como establecer la disponibilidad de los recursos.*

PAGA: *Realiza la disposición y el giro de recursos para cumplir con compromisos distritales según la orden que le imparten las entidades distritales ejecutoras.*

ADMINISTRA EL PORTAFOLIO DISTRITAL: *Realiza el manejo y negociación de las inversiones según las normas vigentes, nacionales y distritales y las políticas hacendarias."*

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La construcción de obras civiles tiene un impacto significativo en la vida diaria de los ciudadanos y comerciantes de una comunidad. Desde la planificación hasta la finalización de un proyecto de construcción, las personas se ven afectadas de diversas maneras. El propósito de este trabajo es analizar en detalle cómo estas obras impactan en la vida de los ciudadanos y comerciantes, considerando aspectos como la movilidad, el acceso a servicios, el medio ambiente, la economía local y la calidad de vida en general.

Se explorarán casos específicos de obras civiles y cómo éstas han afectado a las comunidades circundantes, destacando tanto los aspectos positivos como los desafíos y dificultades que enfrentan los residentes y los empresarios. Además, se examinarán posibles soluciones y buenas prácticas que puedan minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios para todos los involucrados con exención de impuestos al contribuyente. Este análisis permitirá comprender mejor la complejidad de las obras civiles y cómo estas influyen en la vida cotidiana de los ciudadanos y comerciantes en una comunidad.

Ahora bien, en la actualidad las obras que se encuentran en ejecución no tienen un avance significativo, a pesar de haber tenido el Plan de Desarrollo de Claudia Lopez, lo único que se logró completar fue la firma

de los contratos. Por tanto, este es el caso de las metas relacionadas con la construcción de espacio público y ciclorrutas, las cuales se ejecutan mayormente dentro de proyectos de intervención integral, como las troncales y vías de la malla vial principal. En estos proyectos, se realizan obras que abarcan dentro el avance de otros proyectos. Por tanto, el progreso físico de estas metas depende de la finalización y entrega de las obras viales. En consecuencia, continuarán en ejecución al concluir la presente administración y el Plan de Desarrollo.

No Meta PDD	Meta PDD	Unidad	Meta PDD- IDU	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA PDD (corte jun-2023)	% EJECUCIÓN ACUMULADA PDD (corte jun-2023)	Proyección Ejecución (corte 2023)	% Proyección Ejecución (corte 2023)	Proyección Total Contratado PDD (31 May 2024)	% Proyección Total Contratado PDD (31 May 2024)
240	240 Conservar 1.505.155 m2 espacio público (IDU 1.405.155, UMV 1.000.000)	M2	1.405.155,00	1.295.098,56	92%	1.729.910,49	123%	1.931.303,57	137%
241	241 Construir 2.718.592 m2 espacio público para el disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto.	M2	2.718.592,00	582.950,73	21%	1.092.979,73	40%	2.910.650,69	107%
242	242 Construir o reforzar 135 Puentes peatonales	Pte P. Construido	15,00	2,00	58%	5,00	83%	26,00	107%
		Pte P. Mantenido	120,00	76,00		107,00		119,00	
376	376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables	Cable	0,60	-	0%	0,02	78%	0,60	100%
		Estructuración	2,00	-		2,00		2,00	
377	377 Conservar 190 km de cicloinfraestructura (IDU 110, UMV 80)	Km ciclorrutas	110,00	61,02	55%	76,90	70%	92,96	85%
378	378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km. de malla vial (IDU938) (UMV1370)	Km-carril	938,00	678,01	72%	852,45	91%	1.008,67	108%
380	380 Construir 146 km-carril de malla vial. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto.	Km-carril	146,00	91,58	63%	153,07	105%	440,68	302%
381	381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura (224 IDU, 56 SDM)	Km ciclorrutas	224,00	26,38	12%	48,50	22%	170,40	76%
382	382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel	Pte V. Construido	17,00	1,00	3%	6,00	52%	33,00	152%
		Pte V. Reforzado	12,00	-		9,00		11,00	
383	383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	Estrategias	0,25	-	0%	0,25	100%	0,25	100%
388	388 Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos	Cicloparqueadero	5.000,00	1.703,00	34%	4.327,00	87%	7.024,00	140%
392	392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal	Km-carril	360,00	359,00	100%	378,56	105%	457,56	127%
393	393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio	Estaciones	43,00	26,00	60%	32,00	74%	42,00	98%
396	396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	Patios	6,00	3,00	50%	4,00	67%	6,00	100%
397	397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo	Km	29,60	6,90	23%	16,81	57%	46,03	156%
398	398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	Km	20,00	-	0%	-	0%	20,00	100%
402	402 Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur	Implementación	1,00	-	67%	1,00	100%	1,00	100%
		Estructuración	2,00	2,00		2,00		2,00	
482	482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales.	%	93,59	94,78	101%	93,59	100%	93,59	100%
483	483 Aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional para la entidades del sector Movilidad, en el marco de la Política de MIPG.	%	84,40	91,50	108%	84,40	100%	84,40	100%

Fuente: Informe de gestión y resultados del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 2023

Frente a esta situación, en Bogotá, las obras civiles ejecutadas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tienen un impacto significativo sobre la propiedad privada de los ciudadanos y comerciantes, particularmente en términos de adquisición y reubicación de predios. Durante los últimos años, el IDU ha avanzado en la compra de más de 3,800 predios para la construcción de proyectos viales estratégicos, de los cuales 2,896 ya han sido adquiridos. Estos incluyen áreas claves como la Avenida 68 y la Avenida Ciudad de Cali, que concentran un alto volumen de expropiaciones necesarias para el avance de la infraestructura de movilidad. El proceso afecta a propietarios y comerciantes, quienes deben ceder sus terrenos, en muchos casos con la promesa de compensaciones económicas basadas en avalúos comerciales.

Sin embargo, la expropiación de predios puede tener consecuencias negativas para los afectados, en particular para los pequeños comerciantes, quienes ven afectadas sus fuentes de ingresos debido a las demoliciones y alteraciones del entorno comercial. En varios casos, como en los tramos de Transmilenio, se ha reportado una disminución del comercio local y un incremento en la percepción de inseguridad debido a la falta de planeación adecuada en la reutilización de los espacios. Estos problemas se agravan cuando los terrenos expropiados no se utilizan de inmediato, generando áreas abandonadas que empeoran la dinámica comercial y social.

El IDU ha intentado mitigar estos efectos mediante compensaciones justas y la planeación a largo plazo de los usos de los predios. Sin embargo, se requiere un esfuerzo adicional para asegurar que la adquisición de los predios, que puede afectar más de 1,300 propiedades, se lleve a cabo de manera equitativa y con planes claros para la reactivación de las zonas afectadas.

La implementación de descuentos en el impuesto predial para los inmuebles afectados por obras civiles en Bogotá es una medida viable para compensar los impactos negativos que estas intervenciones pueden generar en propietarios y comerciantes. Las obras de infraestructura, como la construcción de troncales o ampliaciones viales, a menudo implican alteraciones significativas en el entorno urbano, que pueden afectar tanto el valor comercial de las propiedades como la calidad de vida de sus residentes. Establecer descuentos en el impuesto predial para los inmuebles que se encuentran dentro de los polígonos de intervención no solo sería una forma de aliviar la carga financiera de los afectados, sino también de generar un mayor sentido de justicia en los procesos de renovación urbana.

La propuesta de descuentos en el impuesto predial se puede fundamentar en la lógica de compensación por los perjuicios temporales derivados de las obras. Durante el tiempo en que una zona está intervenida, los inmuebles suelen ver afectada su valorización debido a la reducción en la accesibilidad, el ruido y la disminución de clientes para los comercios. En muchos casos, el valor del inmueble baja mientras se realizan las obras, pero los propietarios continúan pagando un impuesto predial calculado con base en un valor catastral que no refleja estas circunstancias. Reducir este impuesto hasta la finalización de las obras permitiría equilibrar las cargas y proteger la estabilidad económica de los propietarios afectados.

Además, esta medida incentivaría un mayor apoyo ciudadano a los proyectos de infraestructura pública, los cuales, si bien son necesarios para el desarrollo de la ciudad a largo plazo, pueden enfrentar resistencia debido a los inconvenientes que causan durante su ejecución. Al ofrecer descuentos en el impuesto predial, las autoridades demostrarían una mayor sensibilidad ante las preocupaciones de la ciudadanía y contribuirían a generar una percepción más favorable de estos proyectos. Esto, a su vez, podría acelerar los procesos de adquisición de predios y disminuir las tensiones entre la Administración Distrital y los contribuyentes afectados, promoviendo una mayor colaboración en la ejecución de los proyectos de ciudad.

IV. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Los ingresos fiscales son fundamentales para que Bogotá pueda llevar a cabo proyectos clave que impulsen el desarrollo urbano y social, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La recaudación proveniente de la tributación directa e indirecta permite a la administración distrital financiar obras de infraestructura, movilidad, espacio público y programas sociales. En los últimos años, Bogotá ha implementado acuerdos y políticas fiscales que buscan no solo mejorar la recaudación a través de los pagos de valorización, sino también garantizar que estos ingresos se inviertan en proyectos sostenibles y equitativos.

Entre estas políticas destacan iniciativas que promueven el desarrollo sostenible, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos a través de la modernización de la infraestructura vial, la construcción de ciclorrutas y la expansión de sistemas de transporte público más eficientes y amigables con el medio ambiente.

“Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”

“Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros”

“Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países”

“De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional”

“Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad”

Sin duda, los proyectos de infraestructura en Bogotá deben procurar el menor impacto posible en la calidad de vida de los ciudadanos mientras se desarrollan. Para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, al mismo tiempo, salvaguardar el bienestar de los habitantes afectados por estas obras, es necesario implementar mecanismos que proporcionen alivios fiscales. Estos alivios tributarios, como descuentos en el impuesto predial o reducciones en otros tributos locales, permitirían que los propietarios y comerciantes afectados por las intervenciones mantuvieran una estabilidad económica durante la ejecución de las obras.

Propuestas como la exoneración parcial de impuestos a quienes se vean directamente afectados por demoras, ruidos, cierres viales u otros inconvenientes temporales contribuirían a equilibrar el impacto negativo de las intervenciones urbanísticas. Este tipo de incentivos permitiría que los proyectos avanzaran de manera óptima, mitigando las tensiones entre la administración y los ciudadanos, y garantizando que la ciudad avance hacia el cumplimiento de los ODS sin sacrificar la calidad de vida de quienes habitan las áreas intervenidas.

V. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027”

ARTÍCULO 316. Alivios tributarios para obligaciones tributarias susceptibles de discusión. Reglamentado por el art. 1, Acuerdo Distrital 236 de 2024. Los contribuyentes, responsables, agentes retenedores, garantes y deudores solidarios de los tributos distritales, que a la fecha de publicación del presente acuerdo tengan obligaciones tributarias en mora y respecto de las cuales no se haya proferido liquidación oficial o que, habiéndose proferido no se encuentren en firme, podrán descontar el ochenta por ciento (80%) de los intereses y sanciones causados, siempre que, a más tardar el 13 de diciembre de 2024, paguen el ciento por ciento (100%) del capital adeudado y el veinte por ciento (20%) de los intereses y sanciones causados a la fecha de pago.

Tratándose de sanciones por no envío de información, el responsable podrá descontar el ochenta por ciento (80%) del valor adeudado siempre que, a más tardar el 13 de diciembre de 2024, pague el veinte por ciento (20%) de la sanción liquidada a esa fecha. Tratándose de sanciones propuestas o determinadas por la Administración Tributaria Distrital que no se encuentren en firme, deberá acreditarse el pago del veinte por ciento (20%) señalado en el respectivo acto administrativo.

(...)

Implementar un beneficio de exención tributaria para quienes estén al día con sus pagos incentivaría tanto el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales como la cancelación de deudas pendientes, fortaleciendo las finanzas del distrito. Esta estrategia actuaría como un incentivo directo, motivando a los contribuyentes a mantenerse al corriente para aprovechar la exoneración de ciertos tributos o parte de ellos, lo que podría aliviar su carga financiera.

Al ofrecer este tipo de incentivos, se estimularía el flujo de ingresos tributarios que son esenciales para alcanzar las metas propuestas en el Plan de Desarrollo. El distrito contaría con más recursos de manera constante, lo que permitiría financiar proyectos de infraestructura, programas sociales y obras públicas, como aquellas relacionadas con el espacio público y la movilidad.

VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

(...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

VII. IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 7o, establece que el impacto fiscal de todo Proyecto de Acuerdo debe ser explícito y compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para lo cual en la respectiva Exposición de Motivos deberán incluirse expresamente los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional que se generaría para financiar tales costos.

Conforme lo anterior, este proyecto de acuerdo tendría un impacto fiscal toda vez que las disposiciones propuestas se refieran específicamente a beneficios tributarios mediante descuentos en el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio, lo cual afectaría el recaudo programado para las vigencias fiscales 2024-2027. En este caso, los costos relacionados con la implementación de esta iniciativa requieren ser cuantificados y evaluados previamente por parte de la Administración Distrital. Sobre este asunto, se sugiere que la Secretaría Distrital de Hacienda pueda pronunciarse durante la discusión de esta iniciativa con el fin de conocer el respectivo impacto fiscal y el concepto previo de viabilidad de las respectivas propuestas, toda vez que esta iniciativa es competencia de la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. al tratar asuntos de carácter tributario.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

H. Concejal de Bogotá D.C.

Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 162 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR OBRAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene como objeto establecer beneficios tributarios a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles comerciales afectados por la ejecución de obras públicas en el Distrito Capital de Bogotá, mediante la exención del pago del impuesto predial durante el tiempo que dure la afectación.

Artículo 2. Definición de afectación por obras públicas. Para los efectos de este acuerdo, se entenderá como inmueble afectado aquel que, por motivo de la ejecución de obras públicas, enfrente limitaciones en su uso, acceso y/o aprovechamiento económico, y que cuente con una declaración de afectación expedida por la entidad competente mediante acto administrativo.

Artículo 3. Alcance. Los beneficios establecidos en este acuerdo serán aplicables a todos los inmuebles comerciales ubicados en el Distrito Capital de Bogotá que se vean afectados por obras públicas, según lo determine la autoridad competente.

Artículo 4. Procedimiento. Los propietarios o poseedores de inmuebles comerciales afectados por obras públicas deberán presentar una solicitud escrita ante la Secretaría Distrital de Hacienda para acceder a la exención del impuesto predial. Esta solicitud deberá incluir el acto administrativo expedido por la entidad competente que declare la afectación del inmueble. La Secretaría Distrital de Hacienda verificará la validez de la documentación presentada y, de cumplirse los requisitos, expedirá una resolución de exención aplicable al período fiscal correspondiente.

La Administración Distrital reglamentará los requisitos que deben acreditar los contribuyentes para acceder a esta exención.

Parágrafo. La exención se renovará automáticamente cada año mientras permanezca vigente el acto administrativo que certifique la afectación. En caso de que la situación de afectación cese, la exención será revocada de manera inmediata.

Artículo 5. Reconocimiento de exenciones. La Secretaría Distrital de Hacienda, deberá verificar si el contribuyente cumple con los requisitos para acceder al beneficio del no pago del impuesto predial unificado, siempre y cuando se encuentre al día en el pago por concepto de impuestos distritales o demás obligaciones tributarias.

Parágrafo. Los pagos efectuados antes de declararse la exención no serán objeto de devolución o compensación.

Artículo 6. Tiempo. La exención del impuesto predial será aplicable durante el período en el que la afectación permanezca vigente, conforme lo determine el acto administrativo expedido por la autoridad competente.

Parágrafo. El plazo para presentar la solicitud de exención será de 90 días contados a partir de la expedición del acto administrativo de afectación. En caso de que el solicitante no presente la solicitud dentro de este plazo, perderá el derecho a solicitar la exención para el período fiscal en curso.

Artículo 7. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 163 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FESTIVAL DE INTERCAMBIO CULTURAL, DEPORTIVO, GASTRONÓMICO Y DE DISTINTOS SECTORES CON LA POBLACIÓN COREANA EN BOGOTÁ”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO**

Este proyecto de acuerdo tiene como objeto potencializar la cultura, la lectura, el deporte y la educación por medio de un festival distrital que permita realizar un intercambio cultural, de acuerdo a las nuevas tendencias, con empresas, miembros de la sociedad civil, fundaciones u organizaciones que trabajen, se interesen o tengan influencia con la cultura coreana en el distrito.

Esto con el fin de fomentar la diversidad cultural garantizando los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, como: la libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad, información y comunicación.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

La diversidad cultural es un tema que ha sido abordado en distintos campos, incluyendo el discurso jurídico. La Constitución Política, las leyes y jurisprudencia han sido un campo de reflexión de la diversidad cultural, y se ha explorado cómo se ha incorporado esta diversidad en el discurso jurídico, tanto así, que la Constitución de 1991 le atribuyó a la sociedad colombiana, una sociedad de tipo pluriétnica y multicultural, con el fin de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional, tal como lo establece el artículo 70 de la Constitución Política de Colombia.

En 1997 fue creado el Ministerio de Cultura, a través de la Ley General de la Cultura, para contribuir al desarrollo social y económico del país en materia de prácticas culturales, industrias, gestiones culturales y acervos patrimoniales.

Como bien se señaló, el Ministerio de Cultura tiene como objetivo promover, revitalizar y apoyar la cultura a través de distintos eventos y estrategias, entre ellos los festivales, éstos son vistos como eventos que permiten que la cultura se reinvente a sí misma y se despliegue lúdicamente, lo que contribuye a la promoción y salvaguarda de los saberes y tradiciones asociados a ella.

El gobierno colombiano ha utilizado la diplomacia cultural como estrategia para fortalecer sus relaciones con distintos Estados, incluso con los países de Asia-Pacífico, incluida Corea.

En septiembre de 2011, el gobierno colombiano realizó una visita en donde se estableció una Asociación de Cooperación Estratégica para fortalecer la relación bilateral entre ambos Estados en diferentes temas, entre ellos la cultura.

En 2021, el presidente de turno y Moon Jae-in, asistieron a la firma de seis importantes instrumentos de cooperación entre los dos países. Se trató de un acuerdo sobre cooperación en salud pública y de cinco memorandos de entendimiento relacionados con industrias creativas y culturales, las Mipyme, agricultura, veteranos de guerra y repatriación de cuerpos de militares colombianos caídos en combate durante la Guerra de Corea.

En cuanto al tema de Cultura, se estableció el “*Memorando de entendimiento sobre cooperación en industrias creativas*”:

“Este instrumento bilateral busca estimular el intercambio y la cooperación en industrias creativas y culturales entre Colombia y Corea, así como en materia de manifestaciones artísticas y su participación en actividades, festivales y eventos culturales de los dos países.

Para ello, los ministerios de Cultura de Colombia y de Cultura, Deportes y Turismo de Corea pondrán en marcha mecanismos como los siguientes:

- Intercambio de expertos y de información sobre la programación cultural y artística.
- Iniciativas conjuntas de cooperación técnica en materia de industrias creativas.
- Fomento del intercambio de grupos artísticos y de la participación en ferias y exposiciones que promuevan las asociaciones empresariales del sector de las industrias creativas en los dos países”.

Según el Ministerio de Cultura, para este fin se llevarían a cabo cuatro acciones: la promoción de los incentivos tributarios creados en Colombia para promover la producción audiovisual y de videojuegos. También un programa de enseñanza del español para coreanos en 2022, con el Instituto Caro y Cuervo. Igualmente, el impulso a las Ferias del Libro de Bogotá y Seúl, y las exposiciones conjuntas de museos de las dos naciones.”

Podríamos concluir señalando que la cultura coreana se ha venido difundiendo en Colombia de diversas maneras, entre las que quisiéramos destacar:

- Música K-pop: el K-pop se ha vuelto cada vez más popular en Colombia, con muchos jóvenes escuchando música coreana y asistiendo a conciertos y eventos de K-pop.
- Televisión y cine: Los dramas y películas coreanos también han ganado popularidad en Colombia, y muchos jóvenes los ven en línea o en la televisión.
- Comida: la cocina coreana se ha vuelto más disponible en Colombia, con la apertura de restaurantes coreanos y camiones de comida en las principales ciudades.

- Lectura: en 2022 Corea fue país invitado en la Feria Internacional del Libro en Bogotá (FILBO) y fue posible que los asistentes pudieran disfrutar de un pabellón dedicado a su cultura, historia y literatura.
- Programas de intercambio cultural: Ha habido programas de intercambio cultural entre Corea del Sur y Colombia, con eventos y talleres destinados a promover la cultura coreana en Colombia.

En general, la cultura coreana ha sido adoptada por colombianos, quienes han mostrado un gran interés en la música, la televisión, el cine, la literatura y la comida coreana. La popularidad del K-pop ha jugado un papel importante en la difusión de la cultura coreana en Colombia, y los programas de intercambio cultural también han ayudado a promover una mayor comprensión y apreciación de la cultura coreana.

La cultura se observa como un elemento que debe ser gestionado, es decir que a partir de estrategias y proyectos puede llegar a incidir en el bienestar de la sociedad y por lo tanto empieza a ser visto como parte de las agendas gubernamentales.

Entendiendo que la cultura hoy en día tiene un papel trascendental en las relaciones internacionales, es que nace esta iniciativa, de estimular el intercambio de manifestaciones artísticas y su participación en actividades, festivales y eventos culturales de Corea y Colombia.

III. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

Bogotá y Corea del Sur comparten más de lo que convencionalmente podría llegar a imaginarse, aún con los miles de kilómetros que las separan. Según un estudio de la Pontificia Universidad Javeriana, “con el propósito de comparar el sistema de planificación urbana de Bogotá con el de países ya experimentados y proyectar su crecimiento, el arquitecto David Burbano (...) seleccionó a Seúl por ser una ciudad semejante a la capital colombiana en materia de crecimiento poblacional, demográfico y económico, pero disímil en cuanto a la formulación de proyectos de infraestructura.”¹⁴ De este modo, como contempla el ABC del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, la consolidación de los tratamientos urbanísticos “regula las actuaciones urbanísticas en zonas de la ciudad en las cuales se busca mantener y reforzar sus actuales condiciones (...). Los proyectos en este tratamiento buscan fortalecer dinámicas urbanas existentes y conectarlas a infraestructuras de espacio público y equipamientos existentes o planeados.”¹⁵ Lo anterior, nos permite entrever que, en aras de promover el aprovechamiento sostenible de los suelos, la infraestructura y los equipamientos vigentes, es posible diseñar un evento de intercambio cultural entre Corea del Sur y Bogotá.

Ello, implica un impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía al contar con espacios de distensión que rompan con el imaginario de que la cultura solo se encuentra en occidente y, asimismo, lograr que los aprendizajes que tiene el país oriental por ofrecernos, se ancle en nuestra cultura y le apostemos a formas innovadoras de habitar la ciudad.

¹⁴ <https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/bogota-y-seul-bajo-el-lente-del-crecimiento-metropolitano/>

¹⁵ https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/generales/abc_pot.pdf

3.1 Sector de la sociedad

Bogotá agrupa distintos sectores sociales y ha sido lugar de encuentro y convergencia de diferentes culturas y tendencias. La ola coreana, también conocida en su neologismo *hallyu*, no ha sido excluida de este fenómeno propio de la globalización en la ciudad. De hecho, la cultura coreana ha ganado mucha importancia y se ha vuelto muy popular, originalmente a través de la música, programas de televisión, comida y arte coreano en las redes sociales y plataformas de *streaming*, cautivando fundamentalmente a la generación Z.¹⁶

Una de las formas culturales coreanas más exitosas en Colombia es el K-pop, que es música pop coreana influenciada por géneros como el soul, el rap y el rock. El K-pop ha conquistado a los jóvenes debido a sus canciones virales, coreografías y talentosos artistas.

Incluir a los, las y les jóvenes amantes de la cultura coreana en espacios de participación en una ciudad como Bogotá, que ha enfrentado problemas de violencia generacionales, es importante por varias razones¹⁷:

- Promoción de la diversidad cultural: la cultura coreana, a través del K-pop, dramas coreanos, comida, tecnología, danza y más, representa una forma diferente de ver y experimentar el mundo. Incluir a los, las y les jóvenes interesados en esta cultura en espacios de participación, enriquece la ciudad al promover una comprensión más amplia y abierta de diferentes culturas.
- Generación de vínculos sociales: al reunir a jóvenes con intereses culturales similares, se crean vínculos y conexiones entre ellos, ellas y ellos. Esto ayuda, potencialmente, a romper barreras sociales y generar una sensación de pertenencia en una ciudad donde la violencia puede haber causado fragmentación y aislamiento en algunas comunidades.
- Fomento de la creatividad y la expresión: la cultura coreana es conocida por su creatividad y expresión artística. Al proporcionar a los, las y les jóvenes un espacio para explorar y compartir sus propias expresiones creativas, potencialmente se estimula la innovación y la autoexpresión.
- Promoción de valores positivos: La cultura coreana a menudo promueve valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal. Estos valores pueden ser inspiradores y motivadores para los jóvenes, alentándolos a adoptar actitudes más positivas y constructivas hacia la vida y la comunidad.
- Construcción de una nueva narrativa: Al reunir a jóvenes de diferentes orígenes y experiencias en torno a intereses comunes, se puede crear una nueva narrativa para la ciudad. Esta narrativa puede centrarse en la colaboración, la coexistencia pacífica y la creación colectiva, en contraposición a la narrativa histórica de la violencia y la división.
- Fomento de la ciudadanía activa: Incluir a los, las y les jóvenes en espacios de participación, les empodera como parte activa de la ciudadanía y les brinda la oportunidad de contribuir al desarrollo y

¹⁶ Nombre que se da a los nacidos entre mediados de la década de 1990 y principios de la de 2000.

(<https://economia3.com/generacion-z-que-es/>)

¹⁷ <https://www.redalyc.org/pdf/310/31048483009.pdf>

la transformación de Bogotá de manera positiva. Esto, potencialmente, ayuda a construir una sociedad más comprometida y responsable con la cultura y la construcción del tejido social.

Adicionalmente, es importante que en estos espacios de participación también se incluya la promoción de la lectura. Dada la importancia que está teniendo la cultura coreana en este lado del mundo y la acogida que tuvo este país en la FILBO del 2022, es posible evidenciar que hay un público al que este tema le puede interesar, al mismo tiempo que se incentiva a la gente a leer y conocer un país con el que Colombia comparte tanto en común.

De igual manera, la literatura coreana era desconocida, y apenas hasta hace unas décadas empezaron a traducirse los libros de este país al español. El auge de la ola coreana ha influido en que cada vez sean más los títulos disponibles para que así los interesados en el mencionado país asiático puedan entender de primera mano la visión que tienen los autores coreanos acerca del mundo¹⁸. Algunas de los libros más famosos traducidos al español son:

- Bari, la Princesa Abandonada, de Hwang Sok-Yong
- La Ola, de Suzy Lee
- Actos Humanos, de Han Kang
- Kim Ji-young, nacida en 1982, de Cho Nam-joo

De este modo, la apuesta de incluir a jóvenes amantes de la cultura coreana en espacios de participación en Bogotá es valiosa, pues no solo puede enriquecer la ciudad desde el punto de vista cultural, sino que también puede ser una poderosa herramienta para sanar heridas históricas, fomentar la coexistencia pacífica y construir un futuro más positivo y colaborativo para la comunidad.

3.2 La importancia del intercambio

Colombia y Corea del Sur llevan más de 60 años de relaciones diplomáticas entre los dos países, en donde se han destacado la cooperación e intercambio de distintas índoles como la política, la cultura, la economía y la sociedad. Llevando no solo ayudar a Bogotá en momentos difíciles como la pandemia, en donde se recibieron donaciones para poder enfrentar y superar la crisis generada por el COVID-19¹⁹.

La cooperación y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Bogotá y Corea del Sur se pueden potencializar por medio de distintos intercambios culturales, eventos que permitan traer y compartir parte de su cultura dentro del distrito. Permitiendo así afianzar los lazos que se han construido con el país por más de 60 años.

Es importante recalcar que “la diplomacia cultural se considera como una piedra angular de la diplomacia pública, y hace referencia a los programas gubernamentales patrocinados cuyo objetivo es informar o influir

¹⁸ <https://www.radionacional.co/cultura/literatura/filbo-recomendaciones-libros-coreanos>

¹⁹ <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/bogota-recibe-donacion-de-corea-para-la-atencion-poscovid#:~:text=Con%20esta%20firma%2C%20la%20Rep%C3%ABlica,Bogot%C3%A1%3B%20y%20el%20fortalecimiento%20del>

en la opinión pública de otros países”²⁰. Es así que por medio de espacios de intercambio o encuentro culturales se pueden: potencializar las relaciones de confianzas entre las partes, aumentar la visibilidad, ser puentes de conexiones para distintos actores y un facilitador que permite el impulso de proyectos innovadores.

3.3 Aprovechamiento de los espacios públicos

El arte y la cultura son elementos importantes en el espacio público y pueden ser utilizados como herramientas educativas y de transformación social.

Por ejemplo, el artículo "Arte en el espacio público de Bogotá como elemento educador" de la revista Colombiana de educación de la Universidad Pedagógica Nacional²¹, destaca cómo el arte en el espacio público puede ser utilizado para informar y educar a la población sobre temas sociales y culturales relevantes. De igual forma, éste, sostiene que el arte público puede contribuir a la formación de ciudadanos críticos y puede ayudar a crear un sentido de identidad y pertenencia entre los ciudadanos.

Por otra parte, la Sentencia de Unificación 00157 de 2018 del Consejo de Estado ²² establece la obligación de las autoridades de darle un carácter de espacio público con énfasis en lo ecológico, cultural y educativo a los lugares que se utilicen para la realización de eventos culturales. En dicha sentencia se establece que el espacio público es un bien común que debe ser protegido y preservado para el disfrute de toda la sociedad.

Además de esto, reconoce la importancia de la cultura y el arte en la sociedad y establece que los espacios públicos pueden ser utilizados para la realización de eventos culturales que promuevan la educación, la creatividad y la diversidad cultural.

3.4 Adaptabilidad e innovación

Valorar la cultura es uno de los pilares que ha hecho de Bogotá la ciudad cosmopolita que hoy se da a conocer en la región como uno de los destinos más importantes a nivel artístico y empresarial. Esto se evidencia en alianzas multilaterales con otras ciudades del mundo que han estado emergiendo durante las últimas décadas, como: Brasilia, Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de México, entre otras.²³

De este modo, se demuestra que la importancia de los intercambios culturales no debe solo expresarse en un sentido *réspice polum*, es decir, mirando hacia el norte²⁴ de los lugares más desarrollados, sino también fortaleciendo las relaciones con otros actores del sistema internacional. En el caso de Colombia, la historia del siglo XX ha estado determinada por un atractivo en la cultura occidental, fuertemente impulsada e influenciada desde Estados Unidos; sin embargo, la capacidad de Bogotá para adaptarse a otras realidades, entenderlas a profundidad y fortalecer el arte que estos intercambios inspiran, también ha permitido que la ciudad expanda sus horizontes hacia la cultura oriental.

²⁰ EL PAPEL DE LA DIPLOMACIA CULTURAL EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES.

²¹ <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413635251008>

²² <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=84485>

²³ <https://bogota.gov.co/internacional/participacion-de-bogota-en-la-cumbre-del-g-20#:~:text=Los%20miembros%20fundadores%20de%20la,y%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%2C%20M%C3%A9xico.>

²⁴ <https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/view/721>

Por esta razón, desde los últimos cuatro años la ciudad ha ofrecido eventos como la celebración del Año Nuevo Chino, la cual “tuvo más de 596 visitantes en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. En el 2022, contó con la presencia de 772 y en el 2023, con 1042 visitantes (aclarando que se desarrollaron actividades en la Bibliotecas Pública Virgilio Barco, y también, en las bibliotecas Públicas del Deporte y del Parque.”²⁵

En el mismo sentido, los sectores privados han jugado un rol determinante en el auge de este fenómeno de nuevos intercambios culturales. Por ejemplo, la empresa de tecnología Samsung impulsó el evento “K-Pop Galaxy”²⁶ para amantes e intérpretes del K-Pop, permitiéndole a la ciudadanía ser parte de diferentes categorías y, asimismo, ser parte activa de la nueva construcción del arte en la Bogotá movida por el *hallyu*.

En este orden de ideas, queda en evidencia la urgencia de impulsar los espacios, medios, eventos y tecnologías que permitan un acercamiento provechoso entre las, les y los bogotanos, especialmente jóvenes, y las nuevas tendencias que, más allá de ser visibles en redes sociales, han marcado una generación apasionada por los procesos creativos de oriente.

3.5 Participación ciudadana

Este Proyecto de Acuerdo nace por iniciativa de la organización Hallyu Colombia que trabaja por la promoción de la cultura y el entretenimiento coreano en Colombia y el intercambio entre los dos países con el fin de seguir manteniendo buenas relaciones.

Dicha organización está presente en Colombia desde el 2010 y trabaja constantemente en la creación de espacios de K-Pop, cine, K- Style, Cultura, deportes, entre otros. Su objetivo es hacer que la ola coreana siga creciendo cada día.

Hallyu manifiesta que en Colombia existe una comunidad grande y organizada alrededor de estas tendencias, quienes en sus registros de manera organizada, estiman que los seguidores y afiliados a comunidades Hallyu en Colombia, son alrededor de 18.976 personas, y su mayor concentración es en la ciudad de Bogotá, con 13.820 personas, que pertenecen a Fan Clubs, a grupos incluso dentro de universidades, a comunidades culturales, a medios de comunicación alternativos, a organizaciones, e incluso existen varias entidades y empresas privadas que tienen como actividad económica ofrecer servicios alrededor de la gastronomía, eventos, cultura, deporte, entre otros, relacionados a la cultura coreana.

3.6 Relación Plan Distrital de Desarrollo

En el Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá, adoptado por el Acuerdo 927 de 2024, se puede encontrar relación con el presente Proyecto de Acuerdo en:

- **Programa 15. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural:** busca promover la cultura y el deporte en la ciudad, aprovechando la oferta de espacios públicos con los que cuenta la ciudad.

²⁵ Secretaría Distrital de Cultura. (2023). Radicado : 20231000144081.

²⁶ <https://news.samsung.com/co/la-cultura-surcoreana-se-toma-colombia>

IV. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

4.2 ÁMBITO LEGAL

MINISTERIO DE CULTURA

LEY 397 DE 1997. Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. En especial los siguientes artículos:

Artículo 1º.- De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones:

1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.
2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y

colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas.

3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana.

(...)

8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el Plan Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social.

9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales y base esencial de una cultura de paz.

(...)

11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma.

(...)

13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y psíquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados.

(...)

Artículo 17º.- Del fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica.

Artículo 18. De Los Estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo.

VI. IMPACTO FISCAL

De acuerdo con la Ley 819 de 1993 en su artículo 7, “Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo”. El presente proyecto de acuerdo no presenta un impacto fiscal, por tanto, ponemos a consideración del Honorable Concejo de Bogotá D.C., la presente iniciativa.

De esta manera, pongo a consideración y estudio de los Honorables Concejales el presente Proyecto de Acuerdo.

Atentamente,

Julián Felipe Triana Vargas

Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

VII. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 163 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FESTIVAL DE INTERCAMBIO CULTURAL, DEPORTIVO, GASTRONÓMICO Y DE DISTINTOS SECTORES CON LA POBLACIÓN COREANA EN BOGOTÁ”****El Concejo de Bogotá**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, las que le confieren los numerales 1 y 13 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

Considerando

Que el artículo 2 de la Constitución política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Que el artículo 70 de Constitución política de Colombia, señala que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Que el artículo 71 de la Constitución Política señala que, la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

Que la Ley 397 de 1997, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, creó el Ministerio de la Cultura.

Que el artículo 1 la Ley 397 de 1997, señala los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones, en los cuales se destaca:

1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.
2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas.
3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana.
8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el Plan Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social.
9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales y base esencial de una cultura de paz.
11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma
13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y psíquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados.

Que el artículo 17 de Ley 397 de 1997, señala que el Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica.

Que el artículo 18 de la Ley 397 de 1997, consagra los Estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo.

Que el artículo 10.8. Programa 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural del Acuerdo 927 de 2024 “por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, busca promover la cultura y el deporte en la ciudad, aprovechando la oferta de espacios públicos con los que cuenta la ciudad.

Acuerda:

Artículo 1. La Administración Distrital, por medio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, así como de las demás entidades competentes, realizarán un festival que permita el intercambio cultural, de lectura,, deportivo, académico, gastronómico y entre otros sectores con la comunidad, empresas, fundaciones, equipos o sociedad civil en general que les interese la cultura e influencia coreana.

Parágrafo 1. Esta actividad estará dirigida a las personas nacionales y extranjeras y se realizará mínimo una vez al año, promoviendo la articulación del sector privado.

Artículo 2. La Administración distrital promoverá la creación de espacios en torno a este evento que permita a las y los artistas, deportistas y empresarios potencializarse en cada una de sus disciplinas.

Artículo 3. La Administración Distrital por medio del festival de intercambio cultural, promoverá la realización de diversos concursos que exaltan la gastronomía, cultura, lectura y deporte con influencia coreana dentro de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta las nuevas tendencias.

Artículo 4. La Administración Distrital, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y demás instituciones encargadas dentro del marco de sus competencias, realizará esta actividad cultural de la que trata el presente acuerdo con la participación activa de la comunidad interesada, organizaciones, empresas, fundaciones o actores de índole público y privado, definiendo una posición en la organización del evento.

Artículo 5. Vigencia. El presente acuerdo entrará a regir a partir de su aprobación y publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 164 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA Y TERRITORIOS CAMPESINOS AGROALIMENTARIOS (TCAM) EN LA RURALIDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

OBJETO DEL PROYECTO

“ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA Y TERRITORIOS CAMPESINOS AGROALIMENTARIOS (TCAM) EN LA RURALIDAD DE BOGOTÁ”

I. SUSTENTO JURÍDICO

DE ORDEN CONSTITUCIONAL

- **Artículo 64 de la Constitución Política:** Garantiza el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra en condiciones de equidad.
- **Artículo 65:** Reconoce la especial protección a la producción de alimentos.
- **Artículo 79:** Derecho a un ambiente sano y participación comunitaria en la protección de los recursos naturales.
- **Acto Legislativo 01 de 2023:** Reconoce al campesinado como sujeto de derechos y establece medidas de protección y apoyo al desarrollo rural.

DE ORDEN LEGAL

- **Ley 160 de 1994:** Establece la figura de las Zonas de Reserva Campesina como mecanismo para proteger la economía campesina y evitar la concentración de tierras.
- **Ley 1776 de 2016:** Crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES).
- **Ley 1931 de 2018:** Fortalece la gestión integral del cambio climático y el ordenamiento ambiental.
- **Ley 2294 de 2023:** Incluye disposiciones sobre la constitución de Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) y planes de desarrollo sostenible.

- **Decreto 780 de 2024:** Reglamenta la constitución, reconocimiento y fortalecimiento de los TECAM y establece procedimientos para su implementación.
- **Decreto 1777 de 1996:** Define objetivos para las Zonas de Reserva Campesina, como el control de la expansión de la frontera agropecuaria y la promoción de la equidad en la propiedad de la tierra.

NORMATIVIDAD DISTRITAL

- **Acuerdo 927 de 2024 (Plan Distrital de Desarrollo):**
 - **Artículo 48. Transformaciones Rurales Integrales:** Establece la territorialización del Acuerdo de Paz en Bogotá mediante Transformaciones Rurales Integrales y la Hoja de Ruta PDET-BR, con medidas de inclusión social y productiva, buscando cerrar brechas de exclusión y promover el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz.
 - **Artículo 114. Articulación de la vida campesina:** Dispone la implementación de un programa integral de protección y fortalecimiento de la vida campesina en los ámbitos productivo, social, cultural y territorial, con enfoque diferencial y multisectorial.
- **Acuerdo 742 de 2019:** Política Pública para la Ruralidad de Bogotá.
- **Acuerdo 546 de 2013:** Promueve la gestión territorial y la participación comunitaria.
- **Plan de Ordenamiento Territorial (POT) – Decreto 555 de 2021:** Establece las áreas de protección, producción y conservación en la ruralidad de Bogotá.

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

El propósito de este Proyecto de Acuerdo es establecer lineamientos para consolidar Zonas de Reserva Campesina y Territorios Campesinos Agroalimentarios (TCAM) en la ruralidad de Bogotá, reconociendo la función social y ambiental del campesinado y promoviendo una gobernanza local participativa. Este enfoque busca fortalecer la producción agroalimentaria, la permanencia en el territorio y la protección de los ecosistemas estratégicos.

Diagnóstico y Cifras Relevantes

- **Población rural:** Bogotá cuenta con más de 30.578 habitantes en áreas rurales, distribuidos principalmente en Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar.
- **Extensión territorial:** El suelo rural del Distrito corresponde al 75% del área total de Bogotá. La ZRC de Sumapaz abarca 23.007 hectáreas y comprende 16 veredas.
- **Vulnerabilidad social:** La pobreza multidimensional en zonas rurales de Bogotá alcanza el 35%, con desafíos en acceso a servicios básicos y vías terciarias.
- **Producción agrícola:** Más del 70% de los productos provienen de unidades productivas familiares, con una proporción significativa de prácticas agroecológicas.
- **Biodiversidad:** Sumapaz alberga el páramo más grande del mundo, con 92.000 hectáreas de extensión, y es un área clave para la producción hídrica que abastece a Bogotá y Cundinamarca.
- **Observación de fauna silvestre:** Un 67% de la fauna avistada en la ruralidad corresponde a aves, incluidas especies endémicas como el soche y los conejos silvestres.
- **Educación rural:** Solo un 52% de los niños en la ruralidad de Bogotá culminan su educación secundaria debido a la falta de infraestructura adecuada.
- **Inversiones:** Más de 72 mil millones de pesos invertidos en vías terciarias y 42 mil millones en proyectos de conectividad.
- **Acceso a servicios públicos:** El 65% de las viviendas rurales tienen acceso a agua potable, pero solo el 40% cuentan con redes de saneamiento básico adecuadas.

Fundamentación Técnica

La consolidación de Zonas de Reserva Campesina y TCAM responde a la necesidad de implementar mecanismos efectivos de gestión territorial y desarrollo rural sostenible. La Política Pública de Ruralidad de Bogotá (Acuerdo 742 de 2019) destaca la importancia de integrar estrategias de producción sostenible, preservación cultural y participación comunitaria.

El **Documento de Diagnóstico y Factores Estratégicos de la Política Pública de Ruralidad** señala la relevancia de promover políticas de permanencia territorial, con énfasis en la articulación interinstitucional y la gestión sostenible de ecosistemas como el páramo de Sumapaz, que representa el 42% del territorio distrital. La política resalta la disminución

de la tasa de desempleo rural a través de la diversificación productiva y la mejora de infraestructura comunitaria.

Los enfoques de género, derechos y cuidado también son ejes prioritarios en las acciones rurales, evidenciando un 40% de participación de mujeres campesinas en los procesos productivos y organizativos. La participación activa de estas comunidades refuerza la gobernabilidad y genera escenarios de cohesión social.

El **Decreto 780 de 2024** establece la necesidad de formular planes de vida digna, diseñar programas de crédito accesibles y promover el acceso a servicios esenciales. Asimismo, impulsa la reforestación con especies nativas y fomenta actividades económicas sustentables mediante circuitos de comercio justo.

La Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital busca armonizar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y promover estrategias inclusivas para superar brechas sociales y económicas. Esto se alinea con las acciones derivadas del Acuerdo de Paz, que resaltan la importancia de la Reforma Rural Integral y el fortalecimiento de las comunidades campesinas como actores clave para la construcción de paz.

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta a la Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.
Art. 12. Atribuciones. *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:*

1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

Este marco legal otorga al Concejo de Bogotá la autoridad para crear programas y proyectos que mejoren la gestión de riesgos a nivel comunitario, asegurando una administración pública eficiente y participativa.

IV. IMPACTO FISCAL

La implementación de este proyecto se financiará con recursos de cooperación internacional, fondos distritales asignados a la política rural y convenios con organizaciones

campesinas y ambientales. Se priorizarán las inversiones en infraestructura rural, conservación de ecosistemas y programas de comercialización de productos agroecológicos.

DONKA ATANASSOVA IAKIMOVA

Concejala de Bogotá

Partido Polo Democrático Alternativo Coalición Pacto - Histórico

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 164 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA Y TERRITORIOS CAMPESINOS AGROALIMENTARIOS (TCAM) EN LA RURALIDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.

VI. ARTICULADO

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. Establecer los lineamientos para la puesta en marcha de Zonas de Reserva Campesina y Territorios Campesinos Agroalimentarios en la ruralidad de Bogotá, con el propósito de garantizar la gestión sostenible del territorio y fortalecer la economía campesina.

Artículo 2. Definiciones.

1. **Zona de Reserva Campesina:** Área destinada a proteger la economía campesina y promover el uso adecuado del suelo.
2. **Territorios Campesinos Agroalimentarios (TCAM):** Espacios rurales donde se desarrollan actividades agroecológicas y de preservación cultural.
3. **Soberanía alimentaria:** Derecho de los pueblos a producir y consumir alimentos saludables y culturalmente apropiados.

Artículo 3. Lineamientos generales. La Administración Distrital propenderá por:

1. La identificación de áreas prioritarias para la conformación de Zonas de Reserva Campesina y TCAM.
2. La promoción de procesos de formación y capacitación en gestión territorial y producción agroecológica.
3. El fomento de proyectos de restauración y conservación de ecosistemas rurales.

4. La articulación interinstitucional para garantizar el acceso a servicios básicos.

Artículo 4. Consejos de Gestión Campesina. Se conformarán Consejos de Gestión Campesina en las localidades rurales, integrados por:

- Representantes de asociaciones campesinas.
- Delegados de entidades distritales.
- Organizaciones de base comunitaria.

Artículo 5. Funciones de los Consejos.

1. Participar en la formulación y monitoreo de los planes territoriales.
2. Proponer estrategias de comercialización de productos agroecológicos.
3. Coordinar acciones de manejo y conservación del suelo.
4. Organizar encuentros comunitarios y campañas de sensibilización.

Artículo 6. Restauración de ecosistemas. La Administración Distrital implementará proyectos de restauración de ecosistemas y reforestación con especies nativas.

Artículo 7. Infraestructura rural. La Administración Distrital impulsará proyectos de adecuación y mantenimiento de vías rurales y espacios comunitarios.

Artículo 8. Evaluación y seguimiento. La Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Económico presentarán informes anuales sobre los avances del programa.

Artículo 9. Participación comunitaria. La Administración Distrital garantizará la participación activa de la comunidad en la definición y seguimiento de las políticas de desarrollo rural.

Artículo 10. Vigencia. Este acuerdo regirá a partir de la fecha de su publicación.

PROYECTO DE ACUERDO NO 165 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS SOBRE EL USO Y MANIPULACIÓN DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS, SE PROHÍBE LA DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA SU COMPRA Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS, CON EL FIN DE PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES, DE LOS SERES HUMANOS Y DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL.”

I. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente Acuerdo es establecer lineamientos sobre el uso y manipulación de artículos pirotécnicos, así como prohibir la destinación de recursos públicos para su compra y adquisición de servicios relacionados, con el fin de promover el bienestar y la protección de los animales domésticos y silvestres, de los seres humanos y de la estructura ecológica principal y se dictan otras disposiciones.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

Desde la promulgación de la Constitución Política de Colombia en 1991, se ha impulsado la inclusión de los animales como sujetos de protección por parte del Estado, contra el sufrimiento y el dolor causados directa o indirectamente por los seres humanos.

Si bien es cierto la Constitución Política no reconoce expresamente derechos de protección y bienestar a favor de los animales, también lo que es que, desde la interpretación de sus artículos 8, 79 y 95, se consagra que es un objetivo del Estado Social de Derecho en el que reposa la llamada “Constitución Ecológica”, la protección de los animales como un deber para todos los individuos, la sociedad y el Estado.

Por lo tanto, la norma superior incluye la protección de los animales ante el maltrato y la crueldad, en el que se les debe garantizar una vida libre de maltrato innecesario e injustificado, lo cual refleja un contenido de respeto que deben tener todos los seres humanos hacia a los animales, como lo señala la Corte Constitucional en sentencia C-032 del 2019. Se deduce así, el alcance de la protección y bienestar de la que tienen derecho los animales en el ámbito nacional.

Como norma precedente, el Estatuto de Protección Animal (Ley 84 de 1989), se les otorgó especial protección a los animales silvestres, bravíos o salvajes y a los domésticos o domesticados, contra el sufrimiento y el dolor causado por las personas, por lo cual dicha

norma significó *“un avance sustancial en la relación animal humano-animal no humano, en tanto que este último ya no solo era un bien apropiable que generaba responsabilidades a sus propietarios, sino que su sufrimiento entró a ser una variable relevante para el ordenamiento jurídico tal que implicaba sanciones si se causaba injustificadamente”*

Posteriormente con la expedición de Ley 1774 de 2016, se reconoció *“la relevancia moral del sufrimiento y la existencia animal”*, como consta en su artículo primero, norma que modificó el artículo 655 del Código Civil, reconoce a los animales como seres sintientes.

Al ser reconocidos los animales como seres sintientes, la protección y bienestar animal se fundamentan en que el Estado Colombiano y sus entidades territoriales, como los departamentos, municipios, distritos, deben implementar actividades para su protección, evitando causarles cualquier tipo de sufrimiento innecesario, y promover en la sociedad, acciones, actividades y lineamientos, basados en el respeto y cuidado de los animales.

A pesar de la existencia y vigencia de un extenso marco normativo en el país, el maltrato hacia los animales sigue siendo evidente, por cuanto persisten situaciones de maltrato, abandono y tráfico al que los animales están expuestos en el día a día, sin que se haya logrado una atención y protección efectiva.

Es por eso que la protección y el bienestar animal se ha convertido en un tema de interés relevante en la sociedad y que debe ser prioridad en la agenda distrital. En este contexto, es esencial implementar prácticas que promuevan la protección y bienestar en los animales, tanto silvestres como domésticos, evitando sufrimientos innecesarios como por ejemplo el uso de la pólvora y artículos pirotécnicos con fines recreativos y/o lúdicos, que puede ocasionarles Pérdida de la capacidad auditiva, afectaciones al sistema respiratorio, extravíos o accidente por huidas, abandono de nidos, miedo intenso, trastornos de ansiedad, Alteraciones de comportamiento y muerte súbita.

Bajo estas premisas la administración distrital, en el marco de su autonomía, tiene la obligación de garantizar la protección y bienestar a todos los animales que habitan en la ciudad, como domésticos, de fauna silvestre, de granja y demás especies, para así implementar prohibiciones que conlleve a un sufrimiento innecesario a los animales, otorgarles protección contra el sufrimiento y el dolor causado directa o indirectamente por, los humanos, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés, que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor como lo señala el artículo 3 de la

Ley 1774 de 2016 y a ejecutar programas destinados al respeto de toda forma de vida, con fundamento en el principio de Solidaridad social, que se fundamenta en que el Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física.

III JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

En Colombia, actualmente, el uso y de la pólvora está regulado por la **Ley 2224 DE 2022** “por medio de la cual se garantizan los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación de todos los habitantes en especial los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional mediante la regulación del uso, la fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”.

Asimismo, se establecen los requisitos para poder ejercer la fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra, venta de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales, es menester autorización previa certificada de los alcaldes municipales o distritales de conformidad con lo dispuesto en la **Ley 670 de 2001** y la **Ley 1801 de 2016**. Por lo cual, se señala el procedimiento para la solicitud del permiso para las demostraciones públicas, cual, en el marco de la autonomía de las entidades territoriales, corresponderá a las alcaldía municipal o distrital. Por otra parte, se establecen las condiciones técnicas de seguridad, resaltando, entre otros aspectos que, se deberán cumplir con las normas nacionales e internacionales vigentes en Colombia. Con relación al transporte, se señala que los transportadores de pólvora, productos pirotécnicos, o fuegos artificiales, además de las normas nacionales e internacionales vigentes en Colombia, deberán cumplir con requisitos técnicos, con el fin de garantizar los derechos a la vida, la integridad física, la salud y la recreación.

Sin embargo y a partir de dicha reglamentación de orden nacional, año tras año continúan las afectaciones en la ciudad de Bogotá tanto a los seres humanos, los animales y la estructura ecológica principal por causa de la pirotecnia.

Ante esta realidad es que se presenta este proyecto cuyo propósito central establecer lineamientos sobre el uso y la manipulación de artículos pirotécnicos en Bogotá, entre otras cosas, prohibiendo el uso de recursos públicos para su adquisición con fines recreativos. Su enfoque es proteger el bienestar de los animales domésticos y

silvestres, salvaguardar la salud y tranquilidad de las personas, especialmente aquellas con condiciones de neuro- divergencia o alta sensibilidad, y preservar la estructura ecológica principal de la ciudad. Además, busca promover alternativas sostenibles y de bajo impacto sonoro como tecnolo- gías lumínicas y musicales.

La relevancia de esta iniciativa radica en su contribución a la construcción de una ciudad más respetuosa con el medio ambiente y los derechos de todos los seres vivos. Al desin- centivar el uso de pólvora, se busca reducir los daños físicos, psicológicos y ambientales

asociados a su manipulación, al tiempo que se fomenta la adopción de prácticas innovado- ras que minimicen los impactos negativos. Este proyecto también establece un marco para la inspección, el control, el reporte de daños y el acompañamiento al sector productivo, fortaleciendo la capacidad de la administración distrital para implementar políticas públicas inclusivas y sostenibles.

Afectación al ser humano

La pólvora afecta gravemente la salud humana, tanto externa como internamente. Según el protocolo de vigilancia de salud pública del Instituto Nacional de Salud (2020), las lesio- nes más comunes incluyen quemaduras, lesiones oculares y laceraciones, a menudo pro- vocadas por la penetración de cuerpos extraños en los ojos. También se reportan ampu- taciones, especialmente en dedos y genitales de niños, lesiones auditivas por explosiones cercanas y contusiones en tejidos blandos. En 2018, el Sivigila notificó 1.233 casos de le- siones por pólvora, un 36,2 % de los cuales afectaron a menores de edad. Las quemaduras (88,6 %) y laceraciones (70,5 %) fueron las más comunes, mientras que 140 personas su- frieron amputaciones, el 21 % menores de edad. Los dispositivos más peligrosos incluyen petardos, cohetes y bengalas, estas últimas peligrosas para los niños debido a su alta tem- peratura, que puede alcanzar 2.000 °F, suficiente para causar quemaduras de tercer grado. Según la Circular Conjunta Externa 042 de 2017, las festividades entre diciembre y enero incrementan estas lesiones, dejando profundas secuelas emocionales, sociales y económi- cas, afectando especialmente a niños y adolescentes.

Afectación a la fauna silvestre y animales domésticos

La convivencia en los espacios urbanos plantea un desafío crucial: la coexistencia armo- niosa entre seres humanos y otras especies. Sin embargo, muchas prácticas humanas, arraigadas en tradiciones, costumbres y espectáculos recreativos, generan un impacto ne- gativo en la fauna local que habita espacios urbanos y rurales. Entre

estas prácticas, el uso de pólvora durante celebraciones destaca por sus efectos perjudiciales en animales silvestres y domésticos.

La detonación de pólvora produce una serie de efectos adversos en la fauna urbana. Las aves, por ejemplo, son especialmente sensibles a los ruidos fuertes y repentinos. La explosión de pólvora causa desorientación, pánico y, en casos extremos, la muerte de estos animales. Asimismo, los perros y gatos, compañeros fieles del ser humano, experimentan un gran estrés y ansiedad durante estas celebraciones, lo que puede llevar a comportamientos agresivos, fugas y, en algunos casos, a problemas de salud a largo plazo.

Además de los impactos directos en la fauna, el uso de pólvora también tiene implicaciones económicas significativas. La inversión en pólvora representa un gasto público considerable que podría destinarse a otras prioridades más urgentes, como la educación, la salud o la infraestructura.

Para abordar esta problemática, es fundamental que las entidades públicas asuman un rol protagónico y promuevan activamente el abandono del uso de pólvora en celebraciones. Al ser el Estado el principal garante del bienestar animal y de la protección del medio ambiente, debe liderar iniciativas que fomenten prácticas más seguras y respetuosas con la fauna urbana.

Animales domésticos y silvestres, a pesar de sus distintos hábitats, comparten una característica común: son seres sintientes, vivos, con necesidades propias y órganos sensibles, adaptados para diversas necesidades. Al igual que nuestros perros y gatos; las aves, por ejemplo, tienen una tolerancia al volumen por debajo 50 dB en algunas aves y menos de 80db. De acuerdo a las cifras del DANE, el 60% de los hogares colombianos tienen al menos un perro, la ciudad que lidera la tenencia de mascotas es Bogotá, en donde al menos el 25% de los hogares tienen un perro o gato. Los animales domésticos, como los perros o gatos, apenas tienen una tolerancia por debajo de los 70 decibeles. Por esta razón, el uso indiscriminado de artefactos pirotécnicos de gran envergadura, como los de categoría tipo 3 son perjudiciales para ellos.

Estos artefactos pirotécnicos de categoría tipo 3 que de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 5045-1 clasifican como: aplicable para ser usados en exhibiciones públicas tanto en interiores como en exteriores, tienen en común que sus rangos explosivos deben ser usados mínimo a 30 metros de distancia, pero su onda explosiva con sus respectivos decibeles que pueden llegar a un promedio de intensidad de sonido de entre 140 y 170 decibeles (dB).

La pólvora y los artículos pirotécnicos generan un impacto negativo en los animales, especialmente los domésticos como perros y gatos. Los fuertes ruidos y destellos de luz causan estrés, miedo y desorientación, lo que puede llevar a reacciones adversas como huir, lastimarse o desarrollar problemas de comportamiento. Incluso, se han reportado casos de animales que han fallecido debido al miedo o al estrés generado por estos eventos.

Por ende, el uso de pólvora también impacta negativamente a la fauna silvestre y a los animales domésticos. Según la Alcaldía de Bogotá, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, se reportaron 170 animales afectados por pólvora, 162 domésticos y 8 silvestres. Engativá lideró con 75 casos.

En 2022, el IDPYBA registró 48 casos, incluidos 44 perros, 3 gatos y una lechuza. Según el médico veterinario Julio Oyola, las aves son especialmente vulnerables, pues su oído es hasta diez veces más sensible que el humano, lo que puede causar desorientación, colisiones y abandono de nidos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) advierte que el ruido y las explosiones pueden ocasionar pérdida auditiva, ansiedad, extraños e incluso muerte súbita en los animales. Además, la contaminación atmosférica generada por la pólvora afecta tanto a la fauna como a los ecosistemas, causando pérdida de biodiversidad y alterando procesos reproductivos y migratorios.

Afectación al medio ambiente

El impacto ambiental de la pólvora es significativo. Según UdeA Noticias, las detonaciones liberan monóxido de carbono, partículas contaminantes (PM2.5) y químicos como arsénico, cromo y cobre, que afectan la calidad del aire y la salud humana, causando enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. También contribuyen a la lluvia ácida, que daña ecosistemas acuáticos, terrestres e infraestructura. Aunque la topografía de Bogotá ayuda a renovar el aire, la OMS señala que los niveles de PM10 y PM2.5 superan los límites recomendados, comprometiendo la salud pública. A pesar de los esfuerzos del Distrito para reducir contaminantes, el material particulado sigue siendo una amenaza significativa, asociada con enfermedades crónicas como cáncer de pulmón y accidentes cerebrovasculares.

Estas partículas y sustancias se quedan suspendidas en el aire y pueden ser inhaladas, afectando la calidad del aire y la salud respiratoria de las personas, particularmente aquellas con enfermedades como el asma o la EPOC.

Los gases y partículas liberados en el aire pueden afectar la calidad del aire en Bogotá, incrementando los niveles de contaminación y contribuyendo a problemas respiratorios en la población.

Es crucial establecer normativas y estrategias que minimicen el uso de la pólvora para proteger la salud humana, el bienestar animal y el medio ambiente, garantizando condiciones equitativas para todos los asociados de la sociedad.

Este conjunto de razones justifica la prohibición de la utilización de pólvora con recursos públicos en Bogotá, fomentando una ciudad más amigable con los animales, las personas y el entorno. Bogotá, una ciudad que sorprende por su riqueza natural, alberga más de 60 especies de mamíferos y entre 160 y 390 especies de aves. Estos valiosos habitantes encuentran refugio en sus parques, humedales y cerros orientales. Preservar esta biodiversidad única es un desafío que exige el compromiso de todos, para garantizar las conexiones ecosistémicas, además del disfrute para que otras generaciones puedan seguir disfrutando de este tesoro natural en el corazón de la ciudad.

A pesar de las normativas existentes, el uso indiscriminado de pólvora continúa generando un sufrimiento y afectando a nuestra fauna, la administración pública no puede permitirse reproducir estos actos. Estudios científicos, como los llevados a cabo en Nueva Zelanda, han demostrado el impacto negativo de los fuegos artificiales en mascotas y aves. Estas últimas, al ser especialmente sensibles al ruido, abandonan sus nidos y hábitats, desorientándose y poniendo en riesgo su supervivencia. Es urgente tomar medidas más efectivas para hacer cumplir las leyes y promover alternativas más seguras y respetuosas con el medio ambiente. La educación y la sensibilización de la población son clave para lograr un cambio real y proteger a nuestra fauna urbana.

Un monitoreo realizado en el 2023 por el Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) para analizar y verificar la afectación por el uso de la pólvora a animales de compañía, de granja o silvestres y así georreferenciar los casos, se evidenció que fueron detectados 48 casos, de los cuales 44 eran perros, tres gatos y una lechuza.

En cuanto a las afectaciones, los animales presentaron susto permanente o extremo daño (23), traumatismo o intranquilidad (8), escape y huida momentánea (6), afectación en su estado mental (4), ocultamiento en lugares anormales (2), escape y pérdida total (2), agresividad, taquicardia, aturdimiento, desubicación (1), entre otros.

Es nuestro deber, como sociedad, promover un cambio que beneficie no solo a nuestra fauna, sino también a nuestra calidad de vida. Juntos, podemos optar por celebraciones que enriquezcan nuestra cultura sin poner en riesgo el bienestar de los más vulnerables.

Este enfoque no solo subraya la responsabilidad pública, sino que también busca apelar al compromiso social. En conclusión, el uso de pólvora representa una amenaza para la fauna urbana y un gasto innecesario para la sociedad. Es fundamental que las entidades públicas tomen medidas enérgicas para prohibir esta práctica y promover alternativas más seguras y respetuosas con el medio ambiente. Al hacerlo, no solo estaremos protegiendo a los animales, sino también mejorando la calidad de vida de toda la comunidad.

Por otra parte, este proyecto de acuerdo se encuentra en línea, con las recomendaciones internacionales en torno al bienestar animal y la protección del medio ambiente, además de contribuir a los compromisos adquiridos por Colombia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente, los objetivos:

- **ODS 3: Salud y Bienestar:** Este objetivo promueve la garantía de una vida saludable y el bienestar para todos. El uso de pólvora impacta negativamente la salud pública, aumentando las lesiones, el estrés y las enfermedades respiratorias, lo que hace que prohibir su uso recreativo con fondos públicos esté en línea con la búsqueda de mejorar el bienestar general.
- **ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles:** Prohibir el uso de pólvora recreativa por parte de las entidades públicas contribuye a la creación de ciudades más sostenibles, seguras e inclusivas. Al reducir la contaminación acústica y ambiental, y minimizar los riesgos de accidentes y daños a la salud, esta medida promueve un entorno más saludable y habitable.
- **ODS 13: Acción por el Clima:** Este objetivo busca reducir el impacto del cambio climático y sus efectos. El uso de pólvora recreativa contribuye a las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, por lo que su prohibición apoya los esfuerzos para mitigar el cambio climático, alineándose con los compromisos ambientales internacionales de Colombia.
- **ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres:** Este objetivo promueve la protección, restauración y uso sostenible de los ecosistemas terrestres. La pólvora afecta de

manera adversa a la fauna y flora locales, por lo que su prohibición es una medida que contribuye a la conservación de los ecosistemas en Bogotá, protegiendo la vida silvestre y reduciendo la contaminación.

En cuanto a la participación ciudadana para la elaboración de este proyecto de acuerdo, El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), a través de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, habilitó una encuesta de reporte ciudadano, disponible de manera permanente durante el mes de diciembre, para que la ciudadanía pueda reportar eventos relacionados con el uso de pólvora y ruidos fuertes, y las presuntas afectaciones ocasionadas a animales, tanto domésticos como silvestres, involucrados.

Desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2024, el IDPYBA registró 1.901 animales presuntamente afectados por el uso de pólvora en Bogotá, incluyendo 702 animales de compañía y 1.199 animales silvestres, siendo afectaciones más comunes

estrés, desorientación, temblores, taquicardia, accidentes por huida, pérdida del animal y, en casos extremos, muerte súbita. reportadas, junto con traumatismo o intranquilidad, agresividad y aturdimiento.

Estas consecuencias se reportaron principalmente durante las festividades de diciembre, con un pico significativo en fechas como el 24 y 31 de diciembre.

Aunque la pólvora es una tradición en muchas celebraciones, su uso tiene un impacto negativo en los animales.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA QUE PUEDEN ASUMIR LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL:

1. Secretaría Distrital de Salud:

Es la entidad rectora en salud en Bogotá D.C. responsable de garantizar el derecho a la salud a través de un modelo de atención integral e integrado y la gobernanza, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito Capital. En este sentido, la SDS es responsable de los estudios y actuaciones correspondientes a la salud pública, formulando acciones de prevención y atención a los posibles daños a la salud de los Bogotanos.

2. Secretaría de Ambiente:

La Secretaria Distrital de Ambiente, como autoridad ambiental del Distrito Capital propende por el desarrollo sostenible de la ciudad, formulando promoviendo y orientando políticas,

planes y programas que permitan la conservación, protección y recuperación del ambiente y de los bienes y servicios naturales de la Estructura Ecológica Principal y de las áreas de interés ambiental; para mejorar su calidad de vida, la relación entre la población y el entorno natural, el disfrute de los derechos fundamentales y colectivos del ambiente, respondiendo a las acciones encaminadas a la adaptación y mitigación al cambio climático, reverdeciendo a Bogotá y promoviendo la participación de la ciudadanía en todas sus dimensiones y el cambio de los hábitos de vida.

Así las cosas, y en concordancia con lo dispuesto en la legislación colombiana, la SDA como autoridad ambiental del Gran Centro Urbano, debe dar aplicación a los principios

consagrados en la Ley 99 de 1993, así como a toda la normativa internacional incorporada a través del bloque de constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Política Nacional.

3. Secretaría Distrital de Planeación

Diseñar y liderar la planeación territorial, económica social y ambiental, y la articulación de las políticas públicas en el Distrito Capital en búsqueda del bienestar de todos, en un territorio equitativo, sostenible, competitivo e integrado con la región. De esta manera, deberá incorporar como determinante ambiental para la ciudad, las presuntas consecuencias del funcionamiento de los hornos al interior de las ciudades.

Como sector, deberá propender por la actualización de los planes maestros y de su compatibilidad con las nuevas realidades, así como con las consecuencias adversas que equipamientos como los presentados mediante este proyecto, puedan causar en la población.

4. Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal tiene por objeto la elaboración, ejecución, implementación, coordinación, vigilancia, evaluación y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protección y el bienestar de la fauna silvestre y doméstica que habita en el Distrito.

5. Secretaría Distrital de Educación

La Secretaría de Educación del Distrito tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral.

6. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá tiene como objeto proteger la vida, el ambiente y el patrimonio, a través de la gestión integral de

riesgos de incendios, atención de rescates en todas sus modalidades e incidentes con materiales peligrosos en Bogotá y su entorno.

IV. MARCO JURÍDICO

A. DE ORDEN INTERNACIONAL

- Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 1977
- Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992
- Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 1978.
- Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres de 1983
- Convenio europeo para la protección de animales de compañía de 1987.
- Tratado de Ámsterdam de 1997 (con el cual se modifica el tratado de la Unión Europea) se les concedió a los animales el estatus de seres sintientes, es decir capaces de sentir placer, dolor y temor.
- Declaración A/66/750 de 2012 adoptada por la Asamblea General de la ONU hizo énfasis en la necesidad de proteger el bienestar animal para las generaciones presentes y futuras

B. CONSTITUCIÓN POLITICA:

- **Artículo 8.** Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación
- **Artículo 79.** Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
- **Artículo 94:** La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.
- **Artículo 366.** El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

C. DE ORDEN LEGAL Y NORMATIVO

Ley 5 de 1972 “Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de Juntas Defensoras de animales”

Esta ley crea las Juntas Defensoras de Animales en cada uno de los Municipios del país, la cual gozarán de personería jurídica, y señala que Corresponde a las Juntas Defensoras de Animales promover campañas educativas y culturales tendientes a despertar el espíritu de amor hacia los animales, evitar actos de crueldad, los mal- tratamientos el abandono injustificado de tales animales

- Ley 9ª de 1979 establece que: "En la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo o disposición de sustancias peligrosas deberán tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana, animal o al ambiente"
- Ley 84 de 1989 “*Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia*”

Esta ley establece que, los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre y señala en su artículo 2 consagra que su objeto es:

- a) Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales;
- b) Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia;
- c) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales;
- d) Desarrollar programas educativos a través de medios de comunicación del Estado y de los establecimientos de educación oficiales y privados, que promuevan el respeto y el cuidado de los animales;
- e) Desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre.

- Ley 99 de 1993: se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones
- Resolución 601 de 2006 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible– “Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.”
- Resolución 2153 de 2010 Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo territorial - “Por la cual se ajusta

el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”

- Decreto 4481 de 2006 (diciembre 15) “Por medio de la cual se desarrolla parcialmente el artículo 44 de la Constitución Política para garantizar la vida, la integridad física y la recreación del niño expuesto al riesgo por el manejo de artículos pirotécnicos o explosivos”.
- Ley 1801 de 2016 (Julio 29) “Por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.”: Otorga competencia a los alcaldes municipales, distritales o locales para autorizar actos o eventos que involucren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de categoría tres, previo concepto de la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos o unidades especializadas y el consejo municipal o distrital para la gestión del riesgo o quien haga sus veces, quienes determinarán los sitios y lugares autorizados y las condiciones técnicas que se requieran”.
- La ley 1774 de 2016 “ Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”

Esta Ley señaló que los animales son seres sintientes de conformidad con su artículo 1 menciona que: *“Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial.”* Y que por tanto las autoridades locales y distritales, deben proteger a los animales como seres sintientes y otorgar especial protección contra el sufrimiento y dolor de las actividades humanas.

Así mismo, en la citada ley, en su artículo 3, establece los principios de la protección animal, el bienestar animal y la solidaridad social. El tratamiento de los animales debe basarse en el respeto, la solidaridad, la compasión y la ética, evitando cualquier forma de abuso, maltrato o violencia. Para garantizar su bienestar, se deben cumplir ciertos estándares mínimos, incluyendo la prevención del hambre, la sed, el malestar físico, el dolor, las enfermedades, el miedo y el estrés, así como permitirles expresar su comportamiento natural. Tanto el Estado como la sociedad tienen la responsabilidad de proteger a los animales y tomar medidas para prevenir y eliminar el maltrato y la crueldad hacia ellos, así como denunciar cualquier acto de violencia injustificada.

- Ley 2224 de 2022 (junio 30) Por medio de la cual se garantizan los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación de todos los habitantes en especial los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional mediante la regulación del uso, la fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.
- CIRCULAR CONJUNTA EXTERNA 042 de 2017 (noviembre 27): “Los Alcaldes deben regular, vigilar y controlar la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, manipulación y uso de la

pólvora con base en lo dispuesto en la Ley 670 de 2001 y en el ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y control, para lo cual se trabajará de manera articulada con la Policía Nacional y las unidades de bomberos”.

- Resolución 2254 de 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible– “Por medio del cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones”

D. NORMATIVIDAD DISTRITAL

- Decreto 512 de 1989: "Por el cual se reglamenta la venta y uso de artículos pirotécnicos en el Distrito Especial de Bogotá"

Artículo 16. Prohíbese dentro del Distrito Especial de Bogotá, la quema de llantas u otros elementos que contaminen el medio ambiente y pongan en peligro la vida e integridad de las personas.

- DECRETO 936 DE 1988 (noviembre 23)
"Por el cual se reglamenta la venta y uso de artículos pirotécnicos y similares en el Distrito Especial de Bogotá.

Artículo 15º. Prohíbese dentro del Distrito Especial de Bogotá la quema de llantas u otros elementos que contaminen el medio ambiente y pongan en peligro la vida e integridad de las personas.

- Decreto Distrital 109 de 2009 – “Por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”

E. ACUERDOS LOCALES:

Acuerdo Local 001 de 2024: “Por medio del cual se prohíbe la destinación de recursos públicos para la compra y adquisición de servicios, utilización de pólvora y artículos pirotécnicos con fines recreativos y/o lúdicos por parte del fondo de desarrollo local de Teusaquillo – alcaldía local de Teusaquillo y se dictan otras disposiciones”

Este fue el primer Acuerdo Local de la ciudad y del país que logró prohibir la destinación de recursos públicos para la compra y adquisición de servicios, la utilización de pólvora y artículos pirotécnicos con fines recreativos y/o lúdicos por

parte del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo – Alcaldía Local de Teusaquillo, con el fin proteger la integridad del ambiente y la salud de los seres humanos y de los animales

Acuerdo Local 005 de 2024 “Por medio del cual se prohíbe la compra, adquisición de servicios y utilización de pólvora, fuegos artificiales y artículos pirotécnicos con fines recreativos por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy”

Este Acuerdo Local busca prohibir la compra, adquisición de servicios y la utilización de pólvora, fuegos artificiales y artículos pirotécnicos con fines recreativos por parte de la Alcaldía Local de Kennedy, con el fin proteger el ambiente y la salud de los seres humanos y de los animales.

Acuerdo Local 003 de 2024 “Suba cuida la vida y territorio de sus animales. Se brindan orientaciones base para el Bienestar y Protección Animal en la Localidad de Suba y se dictan otras disposiciones”

Artículo 10. restricción para la destinación de recursos públicos para la adquisición y utilización de pólvora y artículos pirotécnicos. Se establece la restricción para la destinación de recursos públicos en la compra, adquisición de servicios y utilización de pólvora y artículos pirotécnicos con fines recreativos y/o lúdicos por parte del Fondo de Desarrollo Local de Suba - Alcaldía Local de Suba - con el propósito de proteger la integridad y la salud de los animales.

Acuerdo Local 009 de 2024 “Por medio del cual se prohíbe la compra, adquisición de servicios y utilización de pólvora, fuegos artificiales y artículos pirotécnicos con fines recreativos por parte del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero”

Acuerdo Local 005 de 2024 “Por medio del cual se prohíbe la compra, adquisición de servicios y utilización de pólvora, fuegos artificiales y artículos pirotécnicos con fines recreativos por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén”

F. Plan Distrital de Desarrollo - Acuerdo 927 de 2024

“Artículo 10.9. Programa 15. Bogotá protege la vida animal. Se trabajará por convertir a Bogotá en la ciudad amiga de todos los animales, tanto domésticos, como silvestres y sinantrópicas, materializando el enfoque de bienestar animal mediante una oferta de servicios de atención médica veterinaria para los más vulnerables, de esterilización de perros y gatos como una medida ética de control poblacional y ampliando la capacidad de respuesta para salvar a los que son víctimas de maltrato y abandono. Se aumentarán los operativos de control al tráfico de la fauna silvestre, se buscarán sanciones más severas y disuasivas con

el propósito de desalentar esta práctica. Paralelamente, se materializa la perspectiva de bienestar animal en los pro-

tolos de atención y rehabilitación de la fauna silvestre rescatada, buscando brindar- les una segunda oportunidad a estos animales. Se promoverá el conocimiento y apro- piación de la fauna silvestre nativa que habita en la región y se consolidarán alianzas con centros de custodia y rehabilitación de la sociedad civil mediante programas de colaboración que contribuyan a la conservación y a la investigación. El bien-estar pasa por seguir transformando la relación humano-animal, promoviendo entre la ciu- dadanía un vínculo basado en el respeto y cuidado hacia todas las formas de vida, sus hábitats y su forma de moverse en la ciudad. La administración distrital en cabeza del IDPYBA y alcaldías locales, trabajaran conjuntamente por medio de planes, pro- yectos, estrategias, acciones e iniciativas para prevenir y atender el maltrato y la cruel- dad animal, así como, fomentar la adopción de animales domésticos en condición de calle y de hogares de paso. Igualmente, en aras del entendimiento del impacto en pro del bienestar animal, del control de natalidad de perros y gatos, se fortalecerá el pro- grama de Captura, Esteriliza y Suelta como estrategia proactiva y humanitaria que no solo ayuda a controlar la población de caninos y felinos sin hogar, sino que también promueve su bienestar. Se impulsará una transformación cultural fomentando la em- patía y la participación ciudadana en la protección de los animales y se promoverán actividades colaborativas para mejorar su cuidado, además de regular los servicios para y con los animales asegurando estándares éticos y de calidad. La Administración Distrital buscará alianzas estratégicas y convenios con actores claves para la atención de animales. Igualmente, teniendo en cuenta la necesidad de robustecer la toma de decisiones para la protección y el bienestar animal, se buscará la integración de sis- temas de información para la gestión y análisis de la información y la realización de investigaciones estratégicas. Así mismo este fortalecimiento también irá en dirección a la territorialización de la información que permita tener en alerta la atención oportuna en materia de maltrato animal e identificación de focos de animales ferales y semife- rales. El gobierno trabajará de la mano con el sector privado y el social para aunar esfuerzos y brindar soluciones innovadoras que respondan al mandato ciudadano de proteger a los animales. Se profundizará en el enfoque territorial, con una mirada ur- bana y rural, para diseñar intervenciones efectivas y de alto impacto, reconociendo que la gestión interinstitucional y con las localidades es fundamental para hacer reali- dad la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal”

Artículo 59. Fortalecimiento de las capacidades para el bienestar de los anima- les. “Se fortalecerá el escuadrón anticrueldad, las brigadas médicas, urgencias vete- rinarias y el centro de atención jurídica PYBA. Igualmente, en

aras del entendimiento del impacto en pro del bienestar animal, del control de natalidad de perros y gatos, la Administración Distrital buscará alianzas estratégicas y convenios con actores claves para la atención de animales. Igualmente, teniendo en cuenta la necesidad de robustecer la toma de decisiones para la protección y el bienestar animal, se buscará la integración de sistemas de información para la gestión y análisis de la información y la realización de investigaciones estratégicas. (...)”

G. Políticas Públicas

Decreto Distrital 242 de 2015 -Política Pública Distrital de Bogotá de Protección y Bienestar Animal 2014-2038-

Su objetivo es transformar en el Distrito Capital la relación entre animales humanos y no humanos, hacia una cultura del buen trato y respeto por estos últimos, basada en su reconocimiento como seres sintientes y en su propia valía, que es independiente de los intereses humanos del ambiente y la salud de los seres humanos y de los animales como seres sintientes.

H. Jurisprudencia.

Consejo de Estado.

El Consejo de Estado se pronunció en la Sentencia del 26 de noviembre de 2013. rad. 250000-23-24-000- 2011-00227-01(AP), sobre la protección animal, señalando lo siguiente: “En otros términos, no es necesario que los animales o las especies vegetales sean consideradas personas jurídicas o morales para que puedan comparecer a la administración de justicia en busca de que se protejan sus derechos reconocidos por la propia comunidad, ya que existen los mecanismos procesales constitucionales idóneos para garantizar el amparo de los respectivos derechos”

En igual sentido, en la misma providencia se expresó: “(...) los humanos pueden servirse de los animales para su supervivencia, para su compañía, para investigación, en actividades laborales o recreativas, pero sin vulnerar los derechos que les asisten, en especial de no ser tratados simplemente como objetos o cosas, de no ser sometidos a tratos crueles, degradantes, a ser mantenidos en malas condiciones de salud y libertad, a su sacrificio con el menor dolor y sufrimiento posible, a jornadas laborales adecuadas con condiciones que respeten su integridad y descanso, a no ser objeto de sufrimientos innecesarios cuando se experimente con ellos en el campo científico, a garantizar un mínimo de libertad y espacio, a garantizar su adecuada alimentación y cuidado (...)”

Corte Constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia C-666 de 2010, señaló que, “(...) una concepción integral del ambiente incluye de forma necesaria a los animales, como parte del concepto de fauna que encuentra protección y garantía en la Carta Política. Desde esta visión, se excluye cualquier tipo de concepción meramente utilitarista “que valore a los animales exclusivamente en cuanto recurso, es decir, como elemento de explotación por parte de los seres humanos” (...)

Corte Suprema de Justicia

Dentro de las acciones en la protección y bienestar de los animales, esta corporación se refirió en la Sentencia del 16 de agosto de 2017, señaló lo siguiente: “(...) la defensa de los animales ante el maltrato, o ante la extinción o abuso, no se resuelve adscribiéndoles el carácter de persona, sino fundamentalmente mediante otro tipo de mecanismos, que incluso prevé la reseñada Ley 1774 de 2016, cuyo objeto es el de otorgarles protección contra el sufrimiento y el dolor, causado directa o indirectamente por los humanos, conductas por las cuales se establece un procedimiento tanto policivo como judicial, pero además, vistos en sintonía con la Constitución Política, y con su propio artículo 3 de principios, entre los que se cuenta que «el trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del castigo y el abandono, así como de cualquier otra forma de abuso, maltrato, violencia y trato cruel» permite sostener que si estos se presentan y si, además se trasgreden los lineamientos de bienestar animal allí incorporados como que no deben sufrir «hambre, ni sed, que no sufran injustificadamente malestar físico, ni dolor, que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés», es el Estado quien tiene función preferente de hacerlo efectivo, pero así mismo, por razón del principio de «solidaridad social», que en esa misma normativa se precave, es la sociedad la legitimada para «asistir y proteger a los animales con acciones diligentes que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física»

Como se logró vislumbrar, la Jurisprudencia de las Altas Cortes del país, permite evidenciar los importantes avances en materia de protección y bienestar de los animales como obligación del Estado y sus individuos y su reconocimiento como seres sintientes.

V. COMPETENCIA DEL CONCEJO

La Constitución Política de 1991 consagra en el artículo 313 que:

Corresponde a los concejos:

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

El Decreto Ley 1421 expresa en el artículo 12, numeral 1, lo siguiente:

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

- 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)*
- 5. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.*

Por su parte, la Ley 1774 2016 por medio de la cual se modifican el código civil, la ley 84 de 1989, el código penal, el código de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones estableció que:

Esta norma determino en el numeral C, del artículo 3° el principio de Solidaridad social que establece que "El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física." Adicionalmente el mismo numeral se estableció que: "Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales; también es su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de las que se tenga conocimiento"

La Corte Constitucional en sentencia C-535 de 1996, sostuvo que la Constitución atribuye a los concejos municipales, como competencia propia, la facultad de dictar las normas para la protección del patrimonio ecológico municipal (CP art. 313 ord 9°), por

lo cual la Corte considera que existen unos fenómenos ambientales que terminan en un límite municipal y pueden ser regulados autónomamente por el municipio.

Según la Corte en dicho pronunciamiento, estos asuntos ecológicos que se agotan en un límite local determinado, y que por su naturaleza guardan una conexidad estrecha con la identidad y diversidad cultural de los municipios, constituyen lo que la Constitución ha denominado "patrimonio ecológico", y por lo tanto es al concejo municipal al que le corresponde de manera prioritaria su regulación.

Para la Corte, esta autonomía de las entidades territoriales en este campo es así una expresión del deber del Estado de favorecer la diversidad cultural de la Nación, por ser desarrollo del pluralismo, como valor fundante del Estado Social de Derecho (CP. art. 7o.) y por considerarse riqueza nacional (CP. art. 8o.). Dentro de esta diversidad se debe respetar la especial concepción que algunas comunidades tienen del medio ambiente, por lo cual su

regulación corresponde prioritariamente al municipio, pues la relación de cada comunidad con algunos aspectos del medio ambiente puede ser diferente.

En ese mismo sentido, el Consejo de Estado en sentencia de 24 de mayo de 2012, expediente número 2003-00379, M.P. Antonio Velilla Moreno, sostuvo que si bien es cierto que el Concejo Distrital de Bogotá cuenta con competencia de poder de policía equivalente a la de las asambleas departamentales, además de gozar el Distrito Capital de un régimen especial, el ámbito competencial que se debate en el sublite no se basa primordialmente en dicha normativa, sino en el artículo 313 de la C.N., numeral 9° que al efecto dispone: "Corresponde a los concejos: (...) 9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio..." (Subrayado fuera de texto)

Así mismo, el Consejo de Estado en dicha providencia manifestó que en el campo ecológico, tal y como lo ha señalado la doctrina y lo ha recogido el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, rige entonces un principio de **rigor subsidiario** (CP art. 288), según el cual las normas nacionales de policía ambiental, que limitan libertades para preservar o restaurar el medio ambiente, o que por tales razones exijan licencias o permisos para determinadas actividades, pueden hacerse más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes de los niveles territoriales inferiores, por cuanto las circunstancias locales pueden justificar una normatividad más exigente.

Para la Sala, el caso del patrimonio ecológico local, este principio es aún más claro, pues al ser una competencia propia de los concejos municipales y los territorios indígenas, su potestad reglamentaria no puede ser limitada por la ley, al punto de vaciarla de contenido, por cuanto el Congreso desconocería la garantía institucional de la autonomía territorial. Pero sí puede la ley dictar aquella normatividad básica indispensable a la protección del patrimonio ecológico en todo el territorio nacional.

En este orden de ideas, del principio de rigor subsidiario se desprende que si la regulación o las medidas de superior jerarquía, con un ámbito de competencia territorial más amplio, son adecuadas y suficientes para la protección integral del medio ambiente y los recursos naturales renovables, las autoridades regionales o locales de inferior jerarquía no tendrían competencia para darle aplicación, por sustracción de materia. Por el contrario, si la regulación o las medidas de superior jerarquía no son adecuadas y suficientes, dichas autoridades sí tendrían competencia para aplicarlo, en ejercicio de su autonomía, por tratarse de la

gestión de un interés propio, que desborda la competencia de las autoridades superiores” (Sentencia C-554 de 2007).

Está íntimamente relacionada con la necesidad de preservar la diversidad de concepciones que las comunidades tienen en relación con el medio ambiente, lo que permite a las personas participar en las decisiones que los afectan de manera más directa e inminente. En esa medida, el constituyente previó un ámbito de protección medioambiental acorde con la división política del territorio y con la diversidad cultural colombianas, en el que asambleas, concejos y autoridades indígenas, cumplen un papel determinante (C 894 de 2003).

Por su parte, el Consejo de Estado en Sentencia 00230 de 2018, Sala de lo contencioso administrativo sección primera, Expediente AP 85001-23-33-000-2017-00230-01, aclara la diferencia entre el principio de precaución y el de prevención. Para el efecto, explicó que el primero opera ante la falta de certeza científica o cualificada sobre distintos aspectos riesgosos o nocivos de una actividad, pues, precisamente, la imposibilidad de demostrar plenamente los peligros de una actividad, producto o tecnología es lo que justifica la aplicación de dicho postulado.

Mientras que, el de prevención aplica en los eventos en que se tiene claridad y certeza respecto de los impactos o implicaciones de una determinada actividad, producto o proceso, razón por la que resulta necesario anticiparse para evitar o mitigar los efectos nocivos.

Sobre el particular, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 2016¹³, expuso lo siguiente:

“[...]Sobre el primer aspecto, destaca la Sala que resulta desacertado exigir certeza sobre los riesgos e implicaciones como condición para la aplicación del principio de precaución, toda vez que es justamente la incertidumbre sobre distintos aspectos riesgosos o nocivos de una actividad (sus efectos, las condiciones de tiempo, modo y lugar de su producción, etc.) lo que cualifica el ámbito de aplicación de este principio y permite distinguirlo del principio de prevención, también fundamental para la protección de los ecosistemas.”

En efecto, de acuerdo con lo explicado por esa misma Corporación en el auto de 20 de mayo de 2016¹⁵:

“Habida consideración de los notables avances experimentados por la humanidad en materia científica y tecnológica en el curso del último siglo y del incomparable poder de afectación y destrucción de la vida y el entorno de sus desarrollos actuales, resulta imperioso admitir que no obstante ser mayores las amenazas que suscitan sus progresos son cada vez menores las certezas que ofrece la ciencia en cuanto a los riesgos que éstos comportan. Corolario de lo anterior es la necesidad de asumir como un postulado propio de la denominada sociedad del riesgo que la acción del Estado en defensa de los intereses colectivos no puede estar siempre supeditada a la plena demostración de los peligros que conlleva una determinada actividad, producto o tecnología.”

La Sala concluye su argumento manifestando que: “Si bien en otra época la acción estatal restrictiva de la libertad económica y de las facultades de los propietarios debía obedecer a razones probadas de amenaza cierta al interés general, en la actualidad la falta de certeza científica y la subsecuente imposibilidad de cuantificar o anticipar con total certidumbre los efectos nocivos de un determinado proceso o bien respecto del cual existe evidencia de su potencial peligrosidad no puede tornarse en una talanquera para que las autoridades emprendan las actuaciones que la Constitución,

la ley y el Derecho Internacional esperan de ellas en pro de la defensa del ambiente, los recursos naturales o la seguridad y salud de la comunidad [...]

En últimas, como establece el numeral 6 del artículo 1 de la ley 99 de 1993, de conformidad con este principio, “cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”. En ese sentido, también apuntan en esta dirección el principio 15 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, el artículo 3.3 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el artículo 6 del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982.

En ese sentido, a partir de La Constitución Política de 1991, artículo 313 numeral 9, el Decreto Ley 1421 expresa en el artículo 12, el principio de precaución y el principio de rigor subsidiario, es competente esta corporación para pronunciarse sobre el presente proyecto de acuerdo.

VI. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento de la Ley 819 de 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones y que en su artículo 7 determina que:

“Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. (...)”

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”

Aclaramos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, ya que las acciones deben estar enmarcadas en los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital.

De esta manera, ponemos a consideración y estudio de los Honorables Concejales el presente Proyecto de Acuerdo.

Cordialmente,

MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA

HEIDY LORENA SANCHEZ BARRETO

JULIÁN FELIPE TRIANA VARGAS

PROYECTO DE ACUERDO NO 165 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS SOBRE EL USO Y MANIPULACIÓN DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS, SE PROHÍBE LA DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA SU COMPRA Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS, CON EL FIN DE PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES, DE LOS SERES HUMANOS Y DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL.”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 12 numerales 1 y 5, la Constitución Política de 1991, el artículo 313 numeral 9; y la Ley 1774 de 2016 los artículos 1° y 3° numeral 2.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°. OBJETO. El objeto del presente Acuerdo es establecer lineamientos sobre el uso y manipulación de artículos pirotécnicos, así como prohibir la destinación de recursos públicos para su compra y adquisición de servicios relacionados, con el fin de promover el bienestar y la protección de los animales domésticos y silvestres, de los seres humanos y de la estructura ecológica principal y se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULO 2° DEFINICIONES. Para efectos del presente acuerdo, se tendrán en cuenta las definiciones establecidas en el artículo 4° de la Ley 2224 de 2022.

ARTÍCULO 3°. LINEAMIENTOS La administración tendrá en cuenta los siguientes lineamientos para el uso y manipulación de la pólvora:

- a. PREVENCIÓN.** La Administración Distrital promoverá acciones tendientes a disminuir la producción, almacenamiento, comercialización, uso y disposición de artefactos pirotécnicos y de fuegos artificiales en las áreas que esta determine en cercanías de la Estructura Ecológica Principal, así como los centros de atención de animales y/o albergues.

- b. PRIORIZACIÓN.** La Administración Distrital, a través de las entidades que resulten competentes podrá identificar otras zonas en las cuales se puedan dirigir acciones tendientes a desincentivar el uso y la manipulación de la pólvora, teniendo en cuenta población en condiciones de neurodivergencia, patologías o rangos de edad que presenten alta sensibilidad y similares.
- c. TRANSICIÓN.** La Administración Distrital promoverá la transición hacia el uso de tecnologías de bajo impacto sonoro y ambiental en el distrito capital tales como tecnologías lumínicas, musicales y elementos de entretenimiento de bajo impacto ambiental y sonoro, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y a la disponibilidad presupuestal.
- d. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.** La Administración Distrital dentro del ámbito de sus competencias, fortalecerá las acciones de inspección Vigilancia y Control que consideren pertinentes con el fin de mitigar los efectos adversos de la pólvora.
- e. REPORTE Y REGISTRO DE DAÑOS.** La Administración Distrital a través de las entidades competentes propenderá por el fortalecimiento de los reportes y registros de casos de animales domésticos y silvestres afectados por el uso de pólvora, promoviendo el fácil acceso de la información y procurando la unificación de los criterios de los reportes. Esta información servirá como insumo para adelantar acciones tendientes a desincentivar el uso de la pólvora en el distrito capital.

f. INFORMACIÓN DE EVENTOS QUE UTILICEN PÓLVORA O ARTÍCULOS

PIRO-

TÉCNICOS: La administración distrital promoverá estrategias de comunicación de los eventos o espectáculos pirotécnicos con el fin de que se tomen las medidas por parte de la comunidad, para mitigar sus impactos.

ARTÍCULO 4° PROHIBICIONES. Se prohíbe la destinación de recursos de las entidades del Distrito Capital para la compra y adquisición de servicios de pólvora y productos pirotécnicos con fines recreativos, así como la utilización de pólvora y elementos pirotécnicos con fines recreativos por parte de las entidades del Distrito Capital.

Parágrafo 1. Las entidades del distrito capital podrán realizar compra, adquisición de servicios y utilización de pólvora y artículos pirotécnicos con fines NO recreativos.

ARTÍCULO 5° ACOMPAÑAMIENTO PARA EL SECTOR PRODUCTIVO. La Administra-

ción Distrital podrá apoyar a través de su oferta vigente de incentivos, estímulos y/o forta- lecimiento a los emprendimientos y empresas que lleven a cabo actividades de entreteni- miento con tecnologías alternativas de bajo impacto sonoro y ambiental.

ARTÍCULO 6º DISPOSICIÓN FINAL. La Administración Distrital, con observancia de las normas ambientales vigentes, y en el marco de sus funciones y competencias, determinará las formas y procedimientos para adoptar una política integral que incluya la recolección, transporte y disposición final de los artículos pirotécnicos en la ciudad, posterior a su uso.

ARTÍCULO 7º INFORMES. La Administración Distrital, en cabeza de las entidades respon- sables, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los animales, el 4 de octubre de cada año, entregará un informe general al Concejo de Bogotá D.C. sobre la implemen- tación del presente Acuerdo

Parágrafo 1. Este informe deberá realizarse en compañía de la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del Uso de la Pólvora en Bogotá.

ARTÍCULO 8º. REGLAMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN. La Administración Distrital contará con un plazo máximo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo para reglamentar e iniciar su implementación.

ARTÍCULO 9º. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 166 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y MATERIALIZACIÓN DE LAS ALIANZAS PÚBLICO POPULARES EN EL DISTRITO CAPITAL”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****1. OBJETIVO DEL ACUERDO.**

El presente acuerdo tiene por objeto dictar los lineamientos que faciliten la promoción y materialización de las Alianzas Público Populares entre el Distrito Capital y los actores de la Economía Popular con el fin de promover la participación ciudadana, el desarrollo sostenible, la gestión ambiental comunitaria, reducir las desigualdades socioeconómicas y aportar a la garantía de los derechos fundamentales individuales y colectivos de la ciudadanía bogotana.

2. JUSTIFICACIÓN**2.1. Contexto global.**

En el contexto global, las alianzas público-comunitarias, mayormente conocidas como Alianzas público-populares, se han consolidado como instrumentos efectivos para promover el desarrollo sostenible, reducir las desigualdades y fomentar la inclusión social. Ejemplos como las cooperativas de recicladores en Brasil y las asociaciones de producción de alimentos en Ecuador, reguladas por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, demuestran cómo la colaboración entre actores estatales y comunitarios puede generar beneficios mutuos y sostenibles. Estas experiencias son relevantes para ciudades como Bogotá, donde la economía popular representa una parte significativa del tejido socioeconómico.

2.2. Contexto Nacional.

A nivel nacional, el artículo 100 de la Ley 2294 de 2023 “Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026 “colombia potencia mundial de la vida”. y el Decreto 874 de 2024 del Sector Administrativo de Planeación Nacional “Por el cual se adiciona el Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar el artículo 100 de la Ley 2294 de 2023, sobre las Asociaciones Público-Populares” han creado el marco jurídico nacional para las Alianzas Público Populares (APPo), reconociendo su potencial para la ejecución de proyectos relacionados con infraestructura social, producción de alimentos, economía del cuidado y gestión ambiental. Ciudades como Medellín y Cali han comenzado a explorar mecanismos similares, promoviendo iniciativas de inclusión financiera y fortalecimiento de micronegocios. Por ejemplo, en Medellín, las asociaciones comunitarias participan en proyectos de economía circular, generando empleo y reduciendo residuos.

En el municipio de San Gil, Santander, se han materializado alianzas público-comunitarias a través de convenios solidarios, los cuales permiten la participación de Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Juntas, al igual que organizaciones sociales en proyectos de impacto local. Estas alianzas, financiadas por el Municipio, han sido utilizadas para la ejecución de obras de infraestructura vial, en donde la administración dispone los recursos y la comunidad la mano de obra y el conocimiento, este tipo de proyecto se encuentra contemplado en el plan de desarrollo municipal “San Gil con visión ciudadana” donde se propone el mejoramiento del 15% de la malla vial urbana (DNP, 2020).

2.3. Contexto Distrital.

En Bogotá, la economía popular es un motor clave para el sustento de miles de familias. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca del 50% de la población ocupada en la ciudad se encuentra en sectores informales, como el comercio, la manufactura y los servicios personales. Adicionalmente, la ciudad cuenta con más de 400.000 recicladores y alrededor de 3.5 millones de habitantes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, quienes podrían beneficiarse directamente de las APPo mediante esquemas de formalización y fortalecimiento económico.

Los ecosistemas urbanos, como los cerros orientales y los humedales distritales, también podrían beneficiarse de las APPo. Actualmente, los Cerros Orientales albergan importantes corredores biológicos y recursos hídricos, pero enfrentan amenazas como la deforestación y la urbanización. A través de alianzas público-comunitarias, se podría promover la restauración de estos ecosistemas mediante la siembra de árboles, el mantenimiento de las áreas reforestadas y la inclusión de organizaciones ambientales en la toma de decisiones, mediante modelos de administración compartida entre autoridad ambiental y comunidad en distintos ecosistemas de la Estructura Ecológica Principal. Estas acciones no solo contribuirían a la mitigación del cambio climático, sino también al fortalecimiento de los tejidos comunitarios locales.

En los humedales de la ciudad, que representan el 0.8% del territorio distrital pero son responsables de servicios ecosistémicos clave como el control de inundaciones y la regulación climática, las APPo podrían facilitar procesos de restauración ecológica y educación ambiental. Por ejemplo, alianzas con organizaciones locales podrían garantizar la limpieza periódica, el monitoreo de la biodiversidad y la sensibilización ciudadana sobre la importancia de estos ecosistemas. Adicionalmente, las APPo podrían ser utilizadas para administrar parques ecológicos de montaña, promoviendo la educación ambiental desde dinámicas de conservación que incluyan directamente a las comunidades aledañas como protectores de los ecosistemas.

Por otro lado, las plazas de mercado distritales, los recicladores y las organizaciones comunitarias en zonas como Ciudad Bolívar y Usme tienen el potencial de beneficiarse directamente de estas alianzas. Por ejemplo, las plazas de mercado podrían transformarse en nodos de distribución sostenible mediante APPo que impulsen la producción local y reduzcan las cadenas intermedias.

Esta propuesta también se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial los relacionados con trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), reducción de desigualdades (ODS 10) y acción por el clima (ODS 13). La implementación de las APPo fortalecerá las capacidades locales, mejorará la calidad de vida y contribuirá a una ciudad más equitativa y sostenible.

Por lo tanto, el presente Proyecto de Acuerdo es viable, necesario y oportuno para Bogotá. Al aprovechar el marco normativo existente, las experiencias nacionales e internacionales y el potencial de la economía popular en la ciudad, este instrumento puede convertirse en una herramienta estratégica para el desarrollo integral del Distrito Capital.

3. MARCO JURÍDICO

3.1 Postulados Constitucionales y de Bloque de Constitucionalidad

Constitución Política de Colombia (1991):

Artículo 1: Reconoce a Colombia como un Estado social de derecho, fundado en la dignidad humana, la solidaridad y la participación ciudadana.

Artículo 2: Establece como fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Artículo 13: Garantiza la igualdad ante la ley y obliga al Estado a promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, implementando medidas en favor de grupos marginados o vulnerables.

Artículo 79: Garantiza el derecho a gozar de un ambiente sano y la participación en las decisiones que afecten el medio ambiente.

Artículo 333: Reconoce la libertad económica y obliga al Estado a evitar las restricciones injustificadas a la actividad económica, fomentando la formalización y el desarrollo de micro y pequeñas empresas.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969): Derecho a la participación ciudadana y protección de derechos económicos, sociales y culturales como parte del Bloque de Constitucionalidad.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966): Obliga al Estado a garantizar condiciones de vida digna, inclusión y participación económica.

3.2 Leyes de Colombia y Decretos de Carácter Nacional

Ley 2294 de 2023: Regula las Alianzas Público Populares, permitiendo su implementación para infraestructura social, economía del cuidado y gestión ambiental.

Decreto 874 de 2024: Reglamenta las APPo, definiendo sus alcances y mecanismos de implementación.

Ley 1551 de 2012: Promueve la participación de organizaciones sociales en proyectos de desarrollo local.

Ley 2069 de 2020: Promueve el emprendimiento y la formalización empresarial como instrumentos para el cierre de brechas económicas.

Ley 819 de 2003: Exige la sostenibilidad fiscal y análisis del impacto económico en proyectos normativos, asegurando su viabilidad financiera.

3.3 Otros Acuerdos y Normativas Distritales

Acuerdo 890 de 2023 (Concejo de Bogotá): Reconoce las ocupaciones y actores de la economía popular, promoviendo la Alianza Público Popular como herramienta de inclusión.

Decreto 1421 de 1993: Regula el régimen especial para el Distrito Capital, definiendo competencias del Concejo para la aprobación de proyectos normativos relacionados con el desarrollo local y social.

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

En atención a lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, especialmente en los artículos 8, 12, y 13 el Concejo de Bogotá es Competente para tramitar este Proyecto de Acuerdo ya que los contenidos del mismo no versan sobre los aspectos enunciados en los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 14, 16, 17, y 21, del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 la presentación de esta iniciativa no se encuentra restringida al Ejecutivo.

Decreto Ley 1421 de 1993, Artículo 8. Funciones generales. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.

Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 13- Iniciativa: “los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero el contador y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

Solo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 14, 16, 17, y 21 del artículo anterior. Igualmente, solo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del Distrito, autoricen enajenar sus bienes y dispongan excepciones tributarias o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir modificaciones a los proyectos presentados por el alcalde”.

5. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 819 de 2003, la presente iniciativa no tendrá impactos fiscales para el Distrito Capital, en tanto se enmarca, por un lado, en la ejecución de los recursos previstos para el desarrollo de los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo que se relacionan con las Alianzas Público Populares (también denominadas en esta norma como Alianzas Público Comunitarias) para cada sector de la administración.

Considerando que el presente proyecto de Acuerdo no representa un impacto fiscal al normal funcionamiento del Distrito Capital, ponemos a consideración del Honorable Concejo de Bogotá D.C. la presente iniciativa.

PROYECTO DE ACUERDO NO 166 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y MATERIALIZACIÓN DE LAS ALIANZAS PÚBLICO POPULARES EN EL DISTRITO CAPITAL”**

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ARTÍCULO 1º. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto dictar los lineamientos que faciliten la promoción y materialización de las Alianzas Público Populares entre el Distrito Capital y los actores de la Economía Popular con el fin de promover la participación ciudadana, el desarrollo sostenible, la gestión ambiental comunitaria, reducir las desigualdades socioeconómicas y aportar a la garantía de los derechos fundamentales individuales y colectivos de la ciudadanía bogotana.

ARTÍCULO 2º. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente Acuerdo se adoptan las siguientes definiciones:

- a. **Economía popular y comunitaria:** Se entiende por economía popular a los oficios y ocupaciones mercantiles relacionados con la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, y no mercantiles, que hagan referencia a actividades domésticas o comunitarias, desarrolladas por unidades económicas de baja escala ya sea personales, familiares, micronegocios o microempresas, en cualquier sector económico. Los actores de la Economía Popular pueden realizar sus actividades de manera individual, en unidades económicas, u organizados de manera asociativa.
- b. **Alianzas Público Populares – APPo :** Mecanismos contractuales que podrán celebrar las entidades distritales con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria para ser ejecutados en espacios territoriales públicos o privados, con el fin de promover la participación ciudadana, el desarrollo sostenible, la gestión ambiental comunitaria, reducir las desigualdades socioeconómicas y aportar a la garantía de los derechos fundamentales individuales y colectivos de la ciudadanía bogotana. Las APPo pueden materializarse a través de distintas figuras contractuales como convenios solidarios, contratos estatales, pactos de acción colectiva, entre otros, y, según sea el caso conforme a la necesidad y el debido cumplimiento de los requisitos legales de contratación.

ARTÍCULO 3º. Lineamientos.

- a. **Difusión.** Los organismos distritales podrán difundir el mecanismo de Alianzas Público Populares en las distintas localidades utilizando diversos espacios y canales de comunicación como las Ferias de Negocios Inclusivas, las ferias de inclusión financiera, espacios de diálogo, mesas de trabajo y presentación de oferta institucional del Distrito.
- b. **Régimen de contratación aplicable.** Las APPo pueden materializarse a través de distintas figuras contractuales como convenios solidarios, contratos estatales, pactos de acción colectiva, entre otros, y, según sea el caso conforme a la necesidad y el debido cumplimiento de los requisitos legales de contratación y estarán sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Así mismo estarán sujetos a los principios de la función pública y las normas presupuestales aplicables.

- c. **Discriminación Positiva.** De conformidad con el Acuerdo 890 de 2023, artículo 6, las entidades de la administración de Bogotá, propenderán para que en todos los procesos de selección adelantados por el Distrito Capital de Bogotá -incluidas las Alcaldías Locales- se les otorgue un puntaje adicional a los actores que hagan parte de los sistemas de información del Distrito como el Sistema de Información para Actividades Económicas Informales (SIECI) contemplado en el artículo 7 de la Ley 2069 de 2020.
- d. **Armonía con los Planes de Desarrollo.** La administración propenderá porque la implementación de las APPo se encuentren alineadas con las metas, objetivos y programas del Plan Distrital de Desarrollo que se encuentre vigente, al igual que con las políticas nacionales y sectoriales vigentes, de tal manera que se potencien la consistencia y los efectos de la política pública en el desarrollo económico local.

ARTÍCULO 4°. Campos de aplicación. Las Alianzas Público Populares - APPo entre las entidades del Distrito Capital y los actores de la Economía Popular podrán realizarse en los siguientes campos de aplicación:

- a. Ejecución de obras.
- b. Adquisición de bienes y servicios relacionados con infraestructura social.
- c. Vivienda rural.
- d. Vías terciarias y caminos vecinales.
- e. Cultura.
- f. Infraestructura productiva local.
- g. Proyectos de eficiencia energética.
- h. Producción de alimentos.
- i. Suministro de bienes y servicios.
- j. Gestión comunitaria del agua.
- k. Saneamiento básico.
- l. Economía del cuidado.
- m. Fortalecimiento ambiental y comunitario.
- n. Restauración de ecosistemas de la Estructura Ecológica Principal.
- o. Administración de ecosistemas de la Estructura Ecológica Principal como Parques Distritales Ecológicos de Montaña y Humedales.
- p. Administración de bienes de uso público como plazas distritales de mercado.
- q. Adquisición de productos de origen o destinación agropecuarios.

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo anterior, cada entidad distrital deberá determinar en los Documentos del Proceso los requisitos que debe acreditar la persona natural o la entidad sin ánimo de lucro beneficiaria de la APPo, para lo cual deberá tener en cuenta los lineamientos que se dictan en el presente Acuerdo de ciudad.

ARTÍCULO 5o. Coordinación institucional. Para el cumplimiento del presente Acuerdo, deberán coordinarse la Secretaría General, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y sus entidades adscritas, y la Secretaría Jurídica Distrital, en un término no mayor a tres (3) meses contados a partir de la fecha de publicación de esta norma, para planear la estrategia de cumplimiento, seguimiento y evaluación de este Acuerdo de ciudad.

Esto, sin perjuicio de la coordinación interinstitucional que se requiera con otras entidades distritales y la concurrencia de las autoridades regionales y nacionales con incidencia sobre la gestión de las políticas públicas de la economía popular y de desarrollo económico, social y ambiental.

ARTÍCULO 6°. Seguimiento y evaluación. La Secretaría Distrital de Planeación liderará el seguimiento y evaluación de las APPo, mediante la elaboración de un informe anual que presentará al Concejo de Bogotá durante el último mes de

cada año donde se evidencie el impacto en la reducción de desigualdades, el empleo, y evaluación de indicadores ambientales.

ARTÍCULO 7o. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y Cúmplase

Autora:

H.C DONKA ATANASSOVA IAKIMOVA

Polo Democrático Alternativo

Coalición Pacto Histórico

Proyectó: Felipe Torres.

PROYECTO DE ACUERDO NO 167 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“REGLAMENTACIÓN DE PROMOCIÓN DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS y VIVIENDA PRODUCTIVA CON ALTERNATIVAS DE REÚSO”*****Exposición de Motivos****a) Objetivo**

El objetivo de este proyecto de acuerdo es promocionar la implementación de alternativas urbanas y rurales de reúso para las soluciones habitacionales, el mejoramiento integral de barrios y los esquemas autogestionarios y de autoconstrucción.

b) Justificación

Revitalización de entornos con usos mixtos, reconociendo el valor histórico de las edificaciones mediante alternativas innovadoras y modernas que contribuyen a la reducción del déficit habitacional en la ciudad construida.

- Mejoramiento estructural, acabados y fachadas de las edificaciones preservando su diseño original y enriqueciendo su calidad urbanística, fortaleciendo el sentido de pertenencia y devolviendo la mirada a estos lugares abandonados de la ciudad acorde con la normatividad urbanística vigente.

Al ubicarse generalmente en proximidad y accesibilidad a soportes urbanos y sociales, corresponde a una oportunidad para aumentar la oferta de vivienda de calidad.

Práctica que promueve la sostenibilidad ambiental al reducir la contaminación por escombros y partículas, implica menor tiempo una adecuación que una construcción de cero.

Oportunidad para incentivar la revitalización de la ciudad consolidada el reúso parcial o total para proyectos de vivienda, cumpliendo condiciones (Decreto 555 de 2021, Artículo 271) ▪ Existen predios que, por sus características constructivas y uso de suelo diferente a vivienda, pueden ser modificadas a uso residencial siempre que se cumplan los requisitos operativos para realizar subdivisiones o adecuaciones necesarias (Alcaldía de Bogotá, 2021, 42). ▪ Mecanismos alternativos para la generación de soluciones de vivienda, donde se promueve el reúso parcial o total de edificaciones para el desarrollo de soluciones habitacionales y de proyectos de vivienda. (Decreto 561 de 2022, Artículo 13, numeral 1)

A partir de las cuentas cero reiterativas de acueducto para el año 2019, se obtuvieron 6.794 registros asociados a usos de comercio y 227 a usos industriales, para un total de 7.021 registros, es de resaltar que estos registros cruzan con un total de 3.705 lotes, lo que indica la existencia de propiedad horizontal y con

ello la posible duplicidad de los datos o que al momento de realizar el cruce de información no se asigne la información correcta.

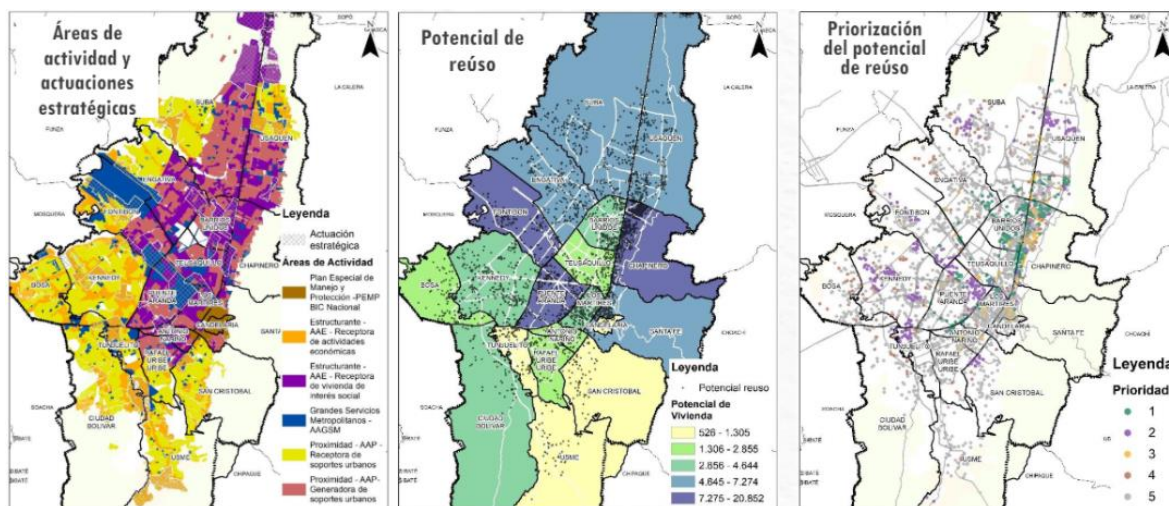
Es de resaltar que la información de “cuenta cero” solo cuenta con la dirección de la unidad predial y el uso, los cuales no necesariamente coinciden con los datos de catastro, lo que implicó realizar una revisión uno a uno en 1.838 registros aproximadamente. Posterior a esta revisión y ajuste, se realizó un control de calidad con el fin de verificar que no existieran CHIP duplicados, obteniendo 6.558 registros con información predial completa, dejando 463 registros sin información.

Los 6.558 registros fueron filtrados para excluir áreas que normativamente no permiten el desarrollo de uso residencial como lo son las afectaciones por movimientos en masa, riesgo no mitigable e inundaciones, áreas en proximidad al aeropuerto, áreas destinadas para planes parciales a la fecha y las áreas no compatibles con uso residencial acorde con el Decreto 555 del 2021, obteniendo una viabilidad preliminar de 6.282 registros.

Finalmente, Revisión de cuentas cero de Servicios Públicos Depuración de registros y usos diferentes a vivienda Cruce con datos de uso y calificación de construcciones Caracterización del sector y unidades prediales Definición de áreas potenciales para reúso Página 12 de 42 se excluyen registros con área construida menor a 36m² acorde con los parámetros de área mínima para vivienda del Plan de Ordenamiento Territorial vigente, obteniendo 5.318 registros válidos que corresponden a un potencial de vivienda de 100.229 unidades.

En la Gráfica 1 y tabla 1 se detalla la localización de los lotes 3.291, lo que corresponde al 89% de los registros iniciales. Estos lotes contienen construcciones potenciales para el reúso de edificaciones para vivienda acorde con la metodología planteada definiendo así el área de estudio, y se ubican principalmente en las localidades de Chapinero, Usaquén, y Fontibón; adicionalmente, muestra el potencial de vivienda por localidad siendo predominante en Chapinero, Puente Aranda y Fontibón.

Gráfica 1: Caracterización del potencial de reúso para vivienda



Fuente: SDHT, Escuela de Hábitat SIS, a partir de UAECD

Tabla 1: Caracterización del potencial de reúso para vivienda

Potencial Vivienda por priorización	1	2	3	4	5
	11.087	11.362	7.056	18.849	51.875
	100.229				

Fuente: SDHT, Escuela de Hábitat SIS, a partir de UAECD

Componente físico

En términos de vetustez se debe tener en cuenta que la normatividad de sismo-resistencia se da por primera vez en el país con el Decreto 1400 de 1984 donde se mencionan los parámetros técnicos de ingeniería y arquitectura mínimos para garantizar la durabilidad de estas y que deberán ser evaluadas con el ente territorial correspondiente a través de la expedición de licencias de construcción. Posteriormente, la Ley 400 de 1997 “establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, con el fin de que sean capaces de resistirse, incrementar su resistencia a los efectos que éstas producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos.” (Ley 400 de 1997)

Estos parámetros han sido modificados y completados en el transcurso de los años. Teniendo en cuenta este parámetro y los antecedentes en experiencias internacionales tendríamos 1.613 registros (32%) que requerirían mayores intervenciones sobre la estructura de las edificaciones para que cumplan la normatividad actual, lo que puede incrementar los costos y perder la rentabilidad sobre una alternativa de reúso. El 68% de los registros restantes cumplirían preliminarmente con parámetros mínimos estructurales, sin embargo, se sugiere realizar estudios detallados para garantizar su durabilidad. A continuación, se detalla la distribución del potencial por periodo de tiempo. A continuación, presentamos datos de generados por el diagnóstico técnico de soporte de reúso de edificaciones para vivienda:

- El 69% tiene una vetustez posterior a 1985. ▪
- El 79% tiene puntaje de calificación superior a 43 según UAECD. ▪
- Solo el 24% se ubica en manzanas con un IC mayor a 2.5. ▪
- 67% en densidades de vivienda entre 0 – 110 viv/ha. ▪
- Tratamiento Urbanístico, 59% Consolidación, 30% Renovación, 7% Conservación. 49% sobre AAE Receptora de VIS

Componente entorno

- 48% cuenta con más de 3m2 de espacio público por habitante.
- 60% con más de 2 m2 construidos de equipamiento por habitante.
- 82% cercano a la red troncal en menos de 1km.
- Del 10% al 15% con problemáticas de entorno.

Componente socioeconómico

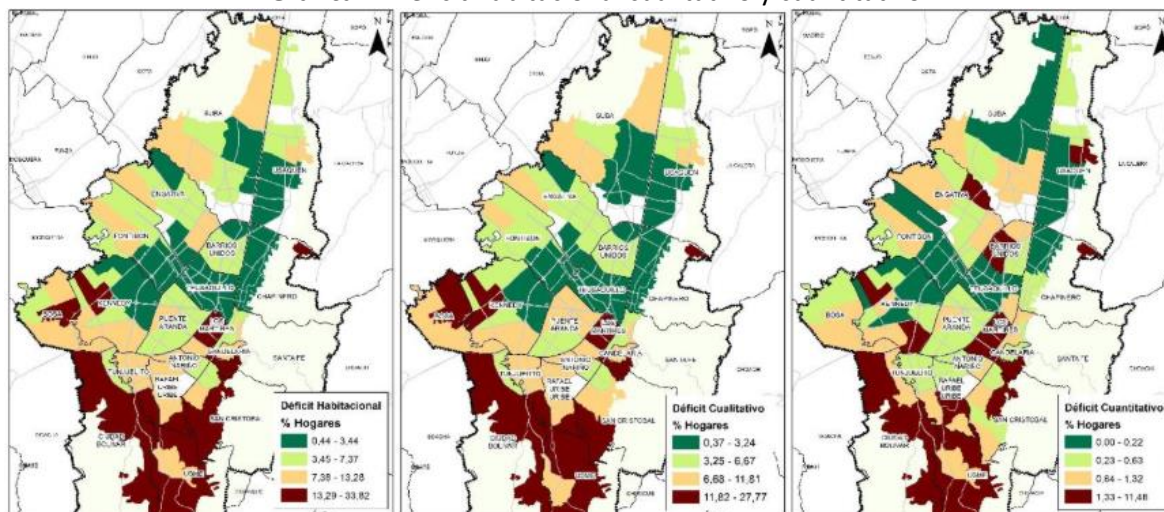
Solo el 16% se encuentra en el quintil más alto de IPM mayor a 19 puntos.

- En los sectores potenciales predominan los hogares con ingresos mayores a 4 SMMLV.
- El tipo de tenencia presenta una distribución similar, sin embargo, predomina en propia totalmente pagada.
- Solo el 22% gasta menos de 30% en el valor del arriendo y el 82% en amortización de crédito.

En cuanto al déficit habitacional de los hogares donde las localidades del nor-orient y el eje de la calle 26 concentra el menor déficit y el mayor hacia la periferia sur de la ciudad. Con relación a la distribución del potencial de reúso se observa en la Ilustración 5 que el 48% de los datos se ubican en el menor rango de déficit con 0,44 a 3,44 hogares y en menor proporción con 11% en el rango de 13,29 a 33,82 hogares, mostrando mayor peso del déficit cualitativo en el menor rango y en los demás sobre déficit cuantitativo habitacional.

Este parámetro de déficit nos permite concluir que el potencial sobre las áreas con déficit cuantitativo aportaría a la reducción de este, como también a la mejora de las condiciones habitacionales de aquellos registros que se ubican sobre el primer rango.

Gráfica 2. Déficit habitacional cualitativo y cuantitativo



Fuente: SDHT, Escuela de Hábitat SIS, a partir de UAEC

En cuanto a actuaciones estratégicas el potencial se ubica en 23 de estas concentrando un potencial de 15.346 viviendas en 783 registros, relacionado al 15%, como se indica en la Tabla 2. Cabe mencionar que las actuaciones estratégicas son instrumento a largo plazo que permite revitalizar e incentivar la consolidación de diferentes usos y que, aunque en este momento no cuentan con las mejores condiciones de accesibilidad o proximidad a servicios públicos se prevé que un largo plazo sea cubierto, por lo cual representa un alto potencial para el desarrollo de iniciativas como la de reúso de edificaciones.

Tabla 2. Potencial de reúso en actuaciones estratégicas

Actuación Estratégica	# Registros	Potencial de Vivienda
Montevideo	55	3.412
Chapinero verde e inteligente	92	1.949
Zona Industrial	69	1.809
Pieza Reencuentro	81	1.257
Ferias	20	799
Nodo Toberín	60	781
Sevillana	32	700
Pieza RioNegro	21	695
Chucua La Vaca	34	667
Teleport-Santafé	70	614
Polo Cultural	38	612
Distrito Aeroportuario-Fontibón	27	414
Calle 72	30	314
Campin 7 de Agosto	29	281
Metro Kennedy	19	254
Fucha Metro	17	187
Eje Tintal	14	185
20 de Julio	25	139
Ciudadela educativa y del cuidado	23	117
Porvenir	17	89
Eje Puente Aranda	5	35
Borde Usme	2	24
Lagos de Torca	3	12
Totales	783	15.346

Fuente: Elaboración SDHT – SIS, a partir de POT, 2021

Acorde análisis preliminares de RenoBo para edificaciones en la localidad de Santa Fé estiman para el 2022 unos costos de adecuación entre \$2.446.555 m2 a 3.403.746 m2, teniendo en cuenta valor del inmueble,

estudios, diseños, obras de adecuación e interventoría; factores variables según la vetustez, localización, conservación y área construida proyectada para vivienda.

Cabe mencionar, que si bien los costos metro cuadrado son significativos son diferenciales según la vetustez, normas de conservación, ubicación, estado actual de la edificación, entre otros factores dinámicos que no permiten definir un estándar de costos para este tipo de intervenciones.

Este tipo de proyectos puede verse afectado en tiempo debido a ocupaciones informales o dificultades en la negociación del inmueble, como también en la reducida capacidad de captura de valor si se tiene como objetivo la generación de vivienda tipo VIP – VIS y mantener un costo de vivienda acorde con los ingresos de los hogares vulnerables.

Esta propuesta de meta está acorde al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, desde la normatividad vigente existen instrumentos de planeación, gestión y financiación del suelo que permiten desde las entidades territoriales dar directrices y lineamientos que incentiven el desarrollo e implementación de diferentes soluciones habitacionales como el reúso de edificaciones, que puedan apoyar estas iniciativas públicas y privadas en articulación con diferentes actores. La siguiente tabla indica los instrumentos aplicables para este tipo de alternativa habitacional.

Tabla 3. Instrumentos aplicables a reúso de edificaciones

Instrumentos de planeación	Instrumento de gestión	Instrumentos de financiación
<ul style="list-style-type: none">▪ Plan Maestro de Hábitat▪ Plan Especiales de Manejo y Protección (PEMP)▪ Planes parciales▪ Plan vecinos▪ Actuaciones Estratégicas	<ul style="list-style-type: none">▪ Unidades de Actuación Urbanística▪ Unidades de Gestión▪ Expropiación precedida de las etapas de enajenación voluntaria o negociación directa	<ul style="list-style-type: none">▪ Anuncio de proyectos▪ Bancos inmobiliarios▪ Derechos de preferencia▪ Oferta preferente▪ Declaratoria de desarrollo prioritaria▪ Concurrencia de terceros

Fuente: Elaboración SDHT – SIS

Inspiración global para el reúso de edificaciones

El reúso de edificaciones se ha consolidado como una solución innovadora y sostenible en ciudades de todo el mundo, donde la preservación del patrimonio y la renovación urbana resultan en claros ejemplos de implementación para la revitalización urbana.

- **Gasometer City, Viena, Austria:** cuatro antiguos depósitos de gas del siglo XIX fueron transformados en un complejo multifuncional, con espacios para viviendas, oficinas, comercios y cultura. Esta reconversión ha dado una nueva vida a un espacio industrial, integrándose completamente en el tejido urbano moderno.
- **Tate Modern, Londres, Reino Unido:** la antigua Central Eléctrica de Bankside, construida en 1947, fue adaptada en el año 2000 para convertirse en uno de los museos de arte moderno más importantes del mundo. El proyecto preservó su estructura icónica mientras la transformaba en un epicentro cultural para la ciudad.
- **High Line, Nueva York, EE.UU.:** lo que fue una línea ferroviaria elevada se ha reconvertido en un parque urbano lineal. Esta innovadora transformación no solo ha revitalizado el área circundante, sino que también ha fomentado el desarrollo inmobiliario y comercial, demostrando el impacto del reúso en la renovación urbana.
- **Fundación Louis Vuitton, París, Francia:** un antiguo centro de reciclaje fue rediseñado como un museo y espacio cultural en el Bois de Boulogne. Este proyecto no solo aportó un nuevo espacio cultural a París, sino que también preservó la esencia del edificio original al adaptarlo para nuevos usos.

Impacto Fiscal

El presente Proyecto de Acuerdo NO GENERA IMPACTO FISCAL para el Distrito Capital, toda vez que no ordena gastos adicionales a los establecidos en el Plan de Distrital de Desarrollo 2024-2027 y no otorga beneficios tributarios que puedan afectar el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

c) Conclusión

El presente proyecto de acuerdo desarrolla el producto de la “Política Pública De Gestión Integral Del Hábitat” 2022 -2031, denominado de la siguiente manera:

“Facilitar el acceso a soluciones habitacionales, Diseñar e implementar soluciones habitacionales en la modalidad de vivienda en arriendo en edificaciones con potencial de reúso”

Al mismo tiempo está en consonancia con lo definido como Reúso de edificaciones en la menciona política pública, la cual expresa lo siguiente:

“Reúso de edificaciones: Como alternativa para la generación de soluciones habitacionales, se promueve el reúso parcial o total de edificaciones para el desarrollo de soluciones habitacionales y de proyectos de vivienda”

En este mismo sentido, el Documento Técnico de Soporte del Plan de Ordenamiento Territorial - POT adoptado mediante Decreto 555 de 2021, teniendo en cuenta los ritmos de mercado, la ciudad tendría el potencial de generar cerca del 55.2% de las demandas de vivienda a 2035 con nueva producción. A este se pueden sumar un 18.5% de soluciones habitacionales en otras tenencias y tipos alternativos a la vivienda

propia, como lo son, la vivienda colectiva, en arriendo, el reúso de edificaciones, la subdivisión de vivienda, etc.

Adicionalmente, según lo dispuesto en el Decreto Distrital 431 de 2024, *“Por el cual se adoptan los lineamientos y se establecen los mecanismos para la asignación de subsidios, en el marco de los programas de promoción y acceso a soluciones habitacionales y se dictan otras disposiciones”* establece en su artículo 28, en los siguientes términos:

“La Secretaría Distrital del Hábitat podrá adoptar programas que establezcan esquemas autogestionarios y de autoconstrucción para los potenciales beneficiarios del Distrito Capital de Bogotá, cuyos desarrollos serán reglamentados mediante reglamento operativo”.

Cordialmente

DONKA ATANASSOVA LAKIMOVA

Concejala Polo Democrático Alternativo PDA

Bancada Pacto Histórico

PROYECTO DE ACUERDO NO 167 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“REGLAMENTACIÓN DE PROMOCIÓN DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS y VIVIENDA PRODUCTIVA CON ALTERNATIVAS DE REÚSO”***

El Concejo de Bogotá D.C.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

CONSIDERANDO:

Que el artículo [51](#) de la Constitución Política de Colombia señala que *“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”*.

Que el derecho a la vivienda digna tiene una doble integración en la Constitución Política ya que se encuentra contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC, aprobado por medio de la Ley 74 de 1968, integrado en el bloque de constitucionalidad, en cuyo artículo 11 numeral [1](#), se afirma que toda persona tiene derecho *“a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”*. Sin embargo, estas disposiciones han sido concretadas por vía jurisprudencial, en las que se ha entendido que la vivienda no está limitada a una solución habitacional, sino que es una necesidad humana real con diferentes complejidades a ser tenidas en cuenta en el marco de las políticas públicas.

Que la Corte Constitucional en sus pronunciamientos ha desarrollado ampliamente el derecho a la vivienda digna, de manera articulada con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconociendo que este concepto abarca un amplio ámbito de protección desde distintas aristas, como la dignidad, y su adecuación.

Que coherente con lo anterior, en la sentencia C-191 de 2021, la Corte Constitucional señaló que:

“La Constitución (artículo 51) establece el derecho a la vivienda digna y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC) en el artículo 11.1 instituyen el derecho a la vivienda adecuada. Dada la diferencia conceptual existente entre la Carta y los instrumentos internacionales, en aplicación de los principios pro persona y de eficacia de los derechos, en la Sentencia C-493 de 2015, esta corporación señaló que corresponde

a los jueces y demás autoridades encargadas de aplicar y proteger los derechos humanos “dar el mayor alcance posible a cada una de esas prescripciones”

Que, en la misma sentencia de constitucionalidad, se definió que el derecho a la vida digna tiene un carácter progresivo, en cuanto existen acciones de cumplimiento inmediato, de corto plazo y otras que requieren de un desarrollo progresivo:

“para la Corte, el derecho a la vivienda digna es de carácter progresivo y supone para el Estado la carga de brindar los medios que conduzcan a su materialización. para cumplir con ese objetivo, las autoridades deben expedir los instrumentos legislativos que permitan la creación de un sistema coordinado entre las distintas entidades y que:

“(...) de forma concatenada, haga uso eficiente de los recursos para garantizar que la población más vulnerable de la sociedad, pueda contar con las condiciones necesarias para acceder a una solución de vivienda digna de acuerdo con los lineamientos establecidos por los instrumentos internacionales incorporados en el ordenamiento jurídico colombiano”

(...) 47. A partir de lo anterior, la Corte ha identificado que la garantía superior a la vivienda guarda estrecha relación con la dignidad humana y otros derechos fundamentales, como la vida, el mínimo vital, la salud, la educación y el acceso a los servicios del Estado. Estos no podrían ser eficaces si el individuo no contara con un lugar de habitación digno y adecuado para desarrollar su proyecto de vida. Con base en ello, el tribunal ha sostenido que la vivienda constituye un derecho fundamental autónomo. Sin embargo, le corresponde al Estado fijar las condiciones para hacerlo efectivo de manera progresiva conforme a la disponibilidad de recursos y la capacidad humana, de modo que se garanticen: *“plenas condiciones de seguridad jurídica, disponibilidad, sostenibilidad, habitabilidad, asequibilidad, adecuación espacial y adecuación cultural”*

(...) *En síntesis, la jurisprudencia constitucional determina que el concepto de vivienda digna implica que las personas habiten un lugar propio o ajeno que posibilite el desarrollo de su vida dentro de condiciones mínimas de dignidad y seguridad. En ese sentido, una “vivienda digna” debe contar con las condiciones adecuadas para no poner en peligro la vida e integridad física de sus ocupantes. Así mismo, esta Corte establece que cuando esté en discusión el derecho a la vivienda de sujetos de especial protección constitucional o en situación de vulnerabilidad (incluida la socioeconómica), las autoridades competentes deben tomar las medidas alternativas que sean menos gravosas para estos y, en todo caso, procurar soluciones provisionales o definitivas de vivienda”*

Que el concepto de vivienda adecuada se encuentra estrechamente vinculado a la vivienda digna; particularmente a través del derecho a la vivienda. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (1991), expresa que el derecho a la vivienda sirve para considerar una serie de factores y determinar si algunas formas de vivienda pueden ser consideradas como una vivienda adecuada, sintetizando el alcance en los siguientes términos:

“(...) el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere

exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos".

Que los numerales [2](#) y [3](#) del artículo 1 de la Ley 388 de 1997 "Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones", establecen como objetivos, entre otros, "El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes." y "Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres".

Que los numerales [3](#) y [4](#) del artículo 3 ibidem determina que el ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, que busca, entre otros fines, "(...) Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural" y "(...) Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales".

Que la Ley 1523 de 2012 en su artículo [primero](#) adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres como "(...) un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible". Así mismo, definió la política como "indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población".

Que la Ley [1537](#) del 2012 "Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones", tiene como objeto señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social y proyectos de vivienda de interés prioritario destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda.

Que las normas citadas se encuentran reglamentadas por el Gobierno Nacional en el Decreto Único Reglamentario [1077](#) de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

Vivienda, Ciudad y Territorio", que, entre otros temas, se refiere al Subsidio Familiar de Vivienda – SFV, como un aporte estatal en dinero para áreas urbanas. A su vez, en su artículo [2.1.1.1.1.2](#), modificado por el artículo primero del Decreto [1533](#) de 2019 y por el artículo [1](#) del Decreto 739 de 2021, señaló entre otros, las definiciones y los alcances de los conceptos de Vivienda de Interés Social - VIS, Vivienda de Interés Prioritario – VIP y Subsidio Familiar de Vivienda - SFV, evidenciando la relación natural e inherente entre un subsidio otorgado para adquirir vivienda y las viviendas destinadas a cerrar las brechas de desigualdad en el país.

Que a su vez, el artículo [2.1.6.1.1](#) del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, en el marco de la inspección, vigilancia de la actividad de la construcción y enajenación de vivienda, contempla a las organizaciones populares de vivienda como una herramienta con la potencialidad de aportar a la producción de la vivienda y que se articula con los objetivos de la política, estas organizaciones son definidas como: *“aquellas que han sido constituidas y reconocidas como entidades sin ánimo de lucro cuyo sistema financiero sea de economía solidaria y tengan por objeto el desarrollo de programas de vivienda para sus afiliados por sistemas de autogestión o participación comunitaria. Estas Organizaciones pueden ser constituidas por sindicatos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, fondos de empleados, empresas comunitarias y las demás que puedan asimilarse a las anteriores, en los términos previstos por la Ley 9 de 1989”*

Que el referido reglamento nacional en relación con la Política Pública de Vivienda Rural emite los lineamientos para la formulación y la ejecución de dicha política pública. Asimismo, compila los temas relacionados con el desarrollo urbano del país, entre estos, los instrumentos de financiación de vivienda, incluyendo el Subsidio Familiar de Vivienda, así como, los lineamientos del espacio público y sus estándares urbanísticos.

Que el artículo [157](#) de la Ley 1753 de 2015 *“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”* vigente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [336](#) de la Ley 1955 de 2019, establece que las entidades públicas en el marco de procesos de reasentamiento o reubicación de población y en atención a las características que les hayan dado origen, adelantarán acciones para que los hogares puedan acceder a la oferta pública preferente de servicios sociales en el nuevo hábitat y el desarrollo de programas de reactivación económica. Siendo una de las acciones contempladas en la política pública que se adopta.

Que la Ley [2044](#) de 2020 *“Por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones”*, tiene como objeto sanear la propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables, y los que existan en predios de propiedad legítima a favor de particulares, además de fijar las pautas para la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales.

Que el Acto Legislativo [02](#) de 2020 modificó el artículo [325](#) de la Constitución Política con la creación de la región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, como entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial, desarrollada mediante la Ley Orgánica [2199](#) de 2022 *“Por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitución Política y se expide el régimen especial de la Región Metropolitana Bogotá -*

Cundinamarca. ", cuya finalidad se contempló para garantizar la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos, promoviendo el desarrollo armónico, la equidad, el cierre de brechas entre los territorios y la ejecución de obras de interés regional.

Que a través del Acuerdo Distrital [858](#) de 2022, "*Por medio del cual se aprueba el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y se dictan otras disposiciones*", se aprobó el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, de conformidad con el Parágrafo Transitorio [1°](#) del artículo 325 de la Constitución Política y el artículo [6°](#) de la Ley 2199 de 2022.

Que la Ley 2079 de 2021 "*Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat*", en su artículo [1](#) reconoce que la política pública de hábitat y vivienda es una Política de Estado liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entidad que deberá diseñar y adoptar normas destinadas a complementar el marco normativo dentro del cual se formula y ejecuta la política habitacional urbana y rural en el país, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los colombianos.

Que el artículo [5](#) ídem, establece que las actuaciones de las entidades que tengan a su cargo actividades relacionadas con la formulación y ejecución de la política pública de vivienda y hábitat deben observar unos principios, dentro de los cuales se encuentra la priorización que deben dar las entidades públicas a la implementación de mecanismos que permitan mejorar la calidad de vida de la población menos favorecida, a través de programas de mejoramiento de vivienda y mejoramiento integral de las condiciones habitacionales de la población, vivienda nueva que permitan vivir en condiciones mínimas de dignidad, habitabilidad, calidad, sostenibilidad y seguridad al interior de las viviendas y su entorno, garantizando la universalidad en el acceso a la vivienda de calidad, equipamiento colectivo y espacio público en las zonas urbanas y rurales del país, y en atención a los criterios de cobertura, accesibilidad, articulación y continuidad.

Que la emisión de la política pública de gestión integral del hábitat debe atender el objetivo general al que se refiere el artículo [2](#) del del Acuerdo Distrital 761 de 2020, en el sentido de aportar a la garantía de los derechos de los más vulnerables, por medio de la oferta institucional, mixta y privada, en cuya línea aporta a la superación progresiva de la naturalización de la exclusión, discriminación, y segregación socioeconómica y espacial.

Que coherente con el glosario del Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante el Decreto Distrital [555](#) de 2021, la vivienda adecuada está determinada por la intersección entre factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos, entre otros aspectos como:

- a. La seguridad jurídica sobre la tenencia, la cual no implica la propiedad del inmueble.
- b. La disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura.
- c. Una cantidad de gastos personales y del hogar relacionados con la vivienda que sean soportables y que no impidan ni comprometan otras necesidades básicas.

d. Una habitabilidad adecuada en la cual la vivienda ofrezca protección al frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento, de riesgos para la salud, de peligro sobre la estructura portante de la vivienda y de vectores de enfermedades.

e. La asequibilidad a la vivienda para todas aquellas personas cobijadas por esta como derecho fundamental y, por consiguiente, debe concebirse y concederse a diversos grupos y minorías sociales que se encuentren en situación de desventaja respecto a un acceso pleno y sostenible económica, social y culturalmente.

f. Un lugar en el cual la vivienda tenga acceso a diversas opciones de empleo, de servicios de atención en salud y otros centros de atención, escuelas, así como a los diferentes servicios sociales.

g. La adecuación cultural de la vivienda de manera tal que tanto los materiales usados como las políticas que la rigen, apoyen y promuevan la diversidad de expresiones de identidad cultural a través de la diversidad de la vivienda.

Que mediante la Circular Interpretativa [007](#) del 25 de febrero de 2022, expedida en el marco de la facultad del artículo [102](#) de la Ley 388 de 1997, la Secretaría Distrital de Planeación interpretó las normas relacionadas con el área mínima y espacial de las unidades de vivienda nueva en las tipologías de vivienda colectiva y soluciones habitacionales con servicios, cuya conclusión prevé que dichas soluciones de vivienda no están sujetas a las disposiciones de configuración y espacios mínimos (áreas construidas) de que trata el artículo [384](#) del Decreto Distrital 555 de 2021.

Que la Política de Gestión Integral del Hábitat, en articulación con las definiciones y el glosario del Plan de Ordenamiento Territorial adoptado por el Decreto Distrital [555](#) de 2021, debe contemplar la “*Construcción Social del Hábitat*” como un proceso de ocupación del territorio en el cual las tareas de autoconstrucción o construcción son asumidas por un grupo organizado de habitantes de dicho territorio. En este proceso, las decisiones quedan bajo el control del referido grupo que asume su autogestión. Estas decisiones son entendidas como parte del aporte de las y los participantes al financiamiento de los proyectos de vivienda. Así, la participación en la toma de decisiones queda registrada como parte de la inversión de los habitantes originales del territorio y del valor final de la vivienda.

Que los procesos de construcción social implican la gestión del hábitat popular como concreción material de los derechos humanos a la tierra, la vivienda y la ciudad. En estos procesos se asume que el hábitat, al cual se integra la vivienda, hace parte de una visión enfocada en su construcción desde una dimensión social, cultural y humana.

Que, con el fin de concretar el marco normativo relacionado con la gestión integral del hábitat, se ha identificado la necesidad de formular una política pública que garantice la realización efectiva de los derechos de las personas a un hábitat de calidad en el territorio urbano y rural de Bogotá Distrito Capital.

Que en la referida sesión n.º 3 de 18 de agosto de 2021, se estableció que las políticas del sector

Que en la Sentencia C-[150](#) de 2015, la Corte Constitucional en desarrollo de los postulados constitucionales, ha definido que el derecho a la participación ciudadana en las decisiones públicas corresponde a un aspecto que se concreta en ciertos deberes a cargo del Estado, que se sintetizan así: “(i) el deber del Estado de abstenerse de adoptar medidas de cualquier tipo que impidan el libre ejercicio de la participación por parte de ciudadanos y organizaciones sociales, (ii) el deber de adoptar medidas de todo tipo que eviten que las autoridades públicas o los particulares interfieran o afecten el libre ejercicio de las facultades en cuyo ejercicio se manifiesta la participación y (iii) el deber de implementar medidas que procuren optimizar el desarrollo de las diversas formas de participación y que, al mismo tiempo, eviten retroceder injustificadamente en los niveles de protección alcanzados”.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. El presente proyecto tiene como objeto promocionar la implementación de alternativas urbanas y rurales de reúso para las soluciones habitacionales, el mejoramiento integral de barrios y los esquemas autogestionarios y de autoconstrucción.

Artículo 2. Atender con un mínimo de 10% el déficit cuantitativo urbano y rural, según reglamento la Secretaría Distrital de Hábitat, promovimiento unidades a través del reúso y subdivisión de edificaciones.

Artículo 3. En las áreas calificadas para recibir traslados de vivienda VIS y VIP en tratamiento de consolidación o de renovación urbana. En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo [6](#) del artículo 323 del Decreto Distrital 555 de 2021, la Secretaría Distrital del Hábitat en el listado de áreas que califique para recibir traslados de vivienda VIS y VIP deberá dar prioridad a las Áreas de Actividad Receptoras de Vivienda de Interés Social en tratamiento de consolidación o de renovación urbana.

Los proyectos receptores de la obligación podrán ser de vivienda de reúso de edificaciones para vivienda.

Artículo 4. Para la priorización de los proyectos con cargo a los recursos del pago compensatorio en dinero de la obligación de destinar suelo a vivienda de interés social y prioritario mediante esquemas de reúso, con los recursos que ingresen por el pago compensatorio de la obligación de destinar suelo para la construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario al Patrimonio Autónomo Subordinado Fondo de Compensaciones Obligados VIS/VIP - PAS FCO o al mecanismo que haga sus veces.

Artículo 5. Diversificación de la oferta de subsidios distritales para vivienda usada, reúso y productiva. El diseño de subsidios distritales de vivienda deberá contemplar las diferentes soluciones habitacionales, vivienda productiva de economía popular, vivienda usada o de reúso, subdivisión de vivienda, vivienda de interés cultural, mejoramiento habitacional, mejoramiento progresivo estructural y mejoramiento progresivo para ampliación, entre otras.

En el diseño del subsidio distrital de vivienda la Secretaría Distrital del Hábitat deberá incluir condiciones que contemplen el enfoque poblacional, diferencial y de género incluidos en la Política Pública de Gestión Integral del Hábitat y en la Política Pública de Servicios Públicos.

Artículo 6. Incentivos para el acceso a soluciones habitacionales y aumento de productividad en usos de suelo mixto. Los incentivos distritales previstos en el Decreto Distrital [145](#) de 2021 o el que haga sus veces, y en el Plan de Ordenamiento Territorial, se focalizarán para fomentar el acceso a soluciones habitacionales y para promover el mantenimiento de la vivienda de interés social en áreas de actividad receptora de vivienda de interés social, como lo son la priorización pública de vivienda, los programas de vivienda en arriendo para ahorro programado de compra, oferta de vivienda pública en arriendo, subsidios de arriendo en vivienda nueva y usada, mejoramiento, reúso, vivienda productiva con economía popular y para soluciones habitacionales con servicios para hogares de menores ingresos.

Artículo 7. La Secretaría Distrital del Hábitat identificará las edificaciones con potencial de reúso para promover proyectos asociativos destinados a vivienda en arriendo VIS y VIP, dando aplicación a lo dispuesto en el numeral [4](#) del artículo 52 de la Ley 388 de 1997, referente a la declaratoria de desarrollo prioritario de las edificaciones abandonadas o subutilizadas.

Artículo 8. La Secretaría Distrital de Planeación en conjunto con la Secretaría Distrital de Hábitat desarrollarán un documento de lineamientos para la promoción de vivienda productiva de economía popular, estableciendo una discriminación positiva en el pago predial y su inclusión de las determinantes de déficit cualitativo de vivienda para ayudar a las viviendas para realizar adecuaciones físicas en función de su actividad económica.

Artículo 9. Esquemas autogestionarios y de autoconstrucción. La Secretaría Distrital del Hábitat podrá adoptar programas que establezcan esquemas autogestionarios y de autoconstrucción para los potenciales beneficiarios del Distrito Capital de Bogotá, cuyos desarrollos serán reglamentados mediante reglamento operativo en los siguientes 6 meses a partir de la expedición de la presente norma, el cual deberá tener una etapa de consulta y concertación con actores sociales, comunitarios interesados en este proceso.

a). En este esquema las viviendas estarán a cargo de la organización popular de vivienda, asociación, junta o Cooperativa de Vivienda en calidad de operador de construcción, quien, organizará la comunidad para que, aportando su mano de obra, construyan las viviendas, bajo el acompañamiento del prestador de asistencia técnica en todas las fases de la obra. Adicionalmente, deberá contar con su respectiva interventoría, de conformidad con las normas que regulan la materia, quien se encargará de revisar y aprobar avances y ejecución de las obras.

b). Es la modalidad susceptible de aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda para la generación de una unidad de vivienda con la participación e iniciativa comunitaria a través de sus aportes para las actividades de la obra, el cual contará con acompañamiento técnico en la gestión y ejecución de estas, generando un trabajo colaborativo que promueva la apropiación, cohesión social y solidaridad entre las partes.

El aporte de las comunidades y/o hogares beneficiarios puede darse en dinero, en especie, entre otros. Cuando el aporte es en mano de obra se puede dar en forma de cuadrillas, mingas o grupos de trabajo organizados por un coordinador.

ARTICULO 10° VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE